

Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

### VISTOS Y OÍDOS:

Con fecha 25 de agosto de 2021, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile remitió a la Corte Suprema vía correo electrónico la Nota Diplomática N° 5.291, de fecha 23 de agosto de 2021, proveniente de la Embajada de la República Italiana, por medio de la cual se acompañó la solicitud de detención previa con fines de extradición de los ciudadanos chilenos **Orlando Moreno Vásquez**, nacido en Chile el 14 de febrero de 1941, cédula de identidad chilena N° 4.647.511-9; **Manuel Vásquez Chahuan**, nacido el 14 de noviembre de 1945, cédula de identidad chilena N° 5.090.301-K y **Rafael Francisco Ahumada Valderrama**, nacido el 13 de enero de 1945, cédula de identidad chilena N° 5.054.076-6, formuladas por la Ministra de Justicia de la República Italiana Hon. Marta Cartabia, en virtud del artículo XII del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago el 4 de octubre de 2012, a efectos de que cumplan con la pena de cadena perpetua que les fuera impuesta por la *Corte d'Assise d'Appello de Roma*, por sentencia de 8 de julio de 2019, irrevocable desde el 19 de febrero de 2020, como autores penalmente responsables del homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli y por el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido el 11 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Juan José Montiglio Murúa.

El Sr. Presidente de la Corte Suprema designó como instructora del procedimiento a la Ministra María Angélica Repetto García el 27 de agosto de 2021, la que por resolución de la misma fecha y afectándole una causal de inhabilidad, según certificación que consta en la misma causa, devolvió los antecedentes al Sr. Presidente de la Corte Suprema.

Por resolución de 31 de agosto de 2021 y atendido lo anterior, este último designó como Instructora a la Ministra Señora Ángela Vivanco Martínez.

Por resolución de 10 de septiembre de 2021, se tuvo por recibida la nota diplomática antes señalada y previo a resolver la solicitud de detención previa formulada por la República Italiana, se solicitó al Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile comunicar la situación carcelaria de los requeridos, particularmente si se encontraban privados de libertad, el centro penitenciario que los albergaba, la calidad en la que fueron ingresados, el tribunal y causa de donde emanaron las ordenes y en su caso, el tiempo que les restaba de condena. Asimismo se requirió a la Oficina Central Nacional de Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile que averiguara el paradero y domicilio de los requeridos dentro del territorio nacional, como también informare sobre eventuales procesos penales vigentes y antecedentes delictuales; a la Jefatura Nacional de Migraciones de la Policía de Investigaciones para que señalare sus ingresos y salidas del país desde el año 1973 a la fecha; y, al Registro Civil para que indicare el domicilio que aquellos tuvieran registrados, despachándose los respectivos oficios a dichas instituciones.



El 16 de septiembre de 2021, se resolvió tener presente el oficio del Departamento de Control Penitenciario, el cual informó no existir registros que den cuenta de que los requeridos estén o hubieran estado reclusos en algún establecimiento penal del país bajo dichas identidades. Asimismo, se tuvo presente el oficio N° 401 del Registro Civil e Identificación, comunicando que respecto de Orlando Moreno Vásquez, mantiene registrado el domicilio de calle Guatemala N°50, Villa O'Higgins, Temuco; en cuanto a Manuel Vásquez Chahuan, el de calle Gerónimo de Arce N°1.971, V. La Estancia, San Felipe; y, en relación a Rafael Ahumada Valderrama, el de calle Luis Bernardín N°1.035, Ñuñoa.

Finalmente, en la referida resolución, se tuvo presente la Nota Diplomática N° 5.411, de 30 de agosto de 2021, y sus documentos anexos, proveniente de la Embajada de Italia, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se tuvo por formalizado el pedido de extradición formulado por la Ministra de Justicia de la República Italiana, Marta Cartabia, en contra de Orlando Moreno Vásquez, cédula nacional de identidad chilena (RUN) N° 4.647.511-9, Manuel Abraham Vásquez Chahuán, cédula nacional de identidad chilena (RUN) N° 5.090.301-K y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, cédula nacional de identidad chilena (RUN) N° 5.054.076-6.

A dicha solicitud de extradición se acompañaron los siguientes documentos, los que por referirse a cada uno de los requeridos en particular, se enuncian de forma separada:

Respecto de Rafael Francisco Ahumada Valderrama:

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 595/2020 emitida por la *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma de fecha 12 de mayo de 2020 para el cumplimiento de la pena del *ergastolo*, impuesta por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma con sentencia del 8 de julio de 2019, firme el 19 de febrero de 2020, por su participación en el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 11 de septiembre de 1973, suscrita por la Ministra de Justicia Marta Cartabia (página 5);

ii) Orden de Ejecución para el Encarcelamiento ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 595/2020 emitida por el Procurador General de la República (página 6 y 7);

iii) Documento del Procurador General de la República, de 22 de septiembre de 2020, con un informe sobre los hechos por los que se condenó al requerido, señalando específicamente que el delito que se le imputa es el previsto y castigado por los artículos 110, 61 n. 1, 2, 4, 9, 575, 576.1 ns. 1 y 4, 577.1 ns. 2, 3 y 4, C.P. (concurso en homicidio voluntario pluriagravado) por haber concurrido, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, con otros cómplices, como encargado de los interrogatorios y torturas en el cuartel del Regimiento Tacna, en la muerte del ciudadano italiano, Juan José Montiglio Murúa, por cuya muerte se procedió en virtud del artículo 8 del C.P, encontrándolo como responsable particularmente de haber atacado el 11 de septiembre de 1973 el Palacio Presidencial “La Moneda”, donde se encontraba el Presidente Salvador Allende y sus colaboradores, escoltas presidencial y personal, todos los cuales fueron arrestados



ilegalmente, llevando a quienes componían a su escolta personal al cuartel de regimiento Tacna, donde fueron torturados y sometidos a interrogatorios; y, haber trasladado desde ese lugar a Peldehue a 20 personas, entre ellos al ciudadano italiano antes señalado, quien era uno de los 12 miembros del GAP, todos quienes fueron asesinados y sepultados en una fosa común, destrozando posteriormente sus cuerpos con dinamitas y granadas, todo en el ámbito de la operatividad del “Plan Cóndor”. (página 9 y 10);

iv) Difusión de búsqueda en campo internacional de Ahumada Valderrama Rafael Francisco emitido por la Procura Generale della Republica presso la Corte d’Appello di Roma, de fecha 14 de junio de 2021 (páginas 13-15);

v) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019, con declaración de sentencia firme de 19 de febrero de 2020 (páginas 16-176);

vi) Normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 178-184).

En cuanto a Orlando Moreno Vásquez:

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 593/2020 emitida por la *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma el 12 de mayo de 2020 para el cumplimiento de la pena del *ergastolo*, impuesta por la *Corte d’Assise d’Appello* de Roma con sentencia del 8 de julio de 2019, firma el 19 de febrero de 2020, por su participación en el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973, suscrita por la Ministra de Justicia Marta Cartabia (páginas 7-9);

ii) Orden de Ejecución para el Encarcelamiento ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 593/2020 emitida por el Procurador General de la República (páginas 11-12);

iii) Documento del Procurador General de la República, de 22 de septiembre de 2020, con un informe sobre los hechos por los que se condenó al requerido, señalando específicamente que el delito que se le imputa es el previsto y castigado por los artículos 61 n. 1, 2, 4, 9, 575, 576.1 ns. 1 y 4, 577.1 ns. 2 y 3 C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) por haber concurrido, en Chile, el 16 de septiembre de 1973, con otros cómplices, en cuanto miembro de los servicios de “inteligencia” militar encargado de los interrogatorios y torturas en el regimiento Tucapel, en la muerte del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli, por cuya muerte se procedió en virtud del artículo 8 del C.P, indicándose que este último, después de haberse presentado el 16 de septiembre de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, tal y como había sido intimado a muchos miembros de la Universidad de la Región con el bando n. 16 del Intendente de la Región de Temuco, pena la aplicación de la “ley de fuga”, fue recluido ilegítimamente en la cárcel de aquella ciudad y sometido a continuos interrogatorios bajo tortura en el Cuartel de Tucapel, junto a otras personas arrestadas por los mismos motivos. Solo aparentemente excarcelado el 4 de octubre de 1973 con la Disposición n. 52 de la Fiscalía del Ejército, Venturelli fue entregado, viceversa, a la “Caravana de la muerte”, dirigida por uno de los colaboradores más estrechos del General Augusto Pinochet, el General Sergio Arellano Stark, que tenía la tarea de depurar el país de los subversivos,



favoreciendo “la agilización” de la administración de la justicia contra estos. Venturelli fue sucesivamente matado y su cadáver ocultado, todo en el ámbito de la operatividad del “Plan Cóndor” (páginas 15 y 16);

iv) Difusión y búsqueda internacional del Procurador General de la República de 14-06-2021 (páginas 19-21);

v) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019, con declaración de sentencia firme de 19 de febrero de 2020 (páginas 24-184);

vi) Normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 186-195);

Sobre Manuel Vásquez Chahuán:

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 596/2020 emitida por la *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma el 12 de mayo de 2020 para el cumplimiento de la pena del *ergastolo*, impuesta por la *Corte d’Assise d’Appello* de Roma con sentencia del 8 de julio de 2019, firme el 19 de febrero de 2020, por su participación en el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973, suscrita por la Ministra de Justicia Marta Cartabia (páginas 4-5);

ii) Orden de Ejecución para el Encarcelamiento ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 596/2020 emitida por el Procurador General de la República (páginas 7-8);

iii) Documento del Procurador General de la República, de 22 de septiembre de 2020, informando sobre los hechos por los que se condenó al requerido, señalando específicamente que el delito que se le imputa es el previsto y castigado por los artículos 61 n. 1, 2, 4, 9, 575, 576.1 ns. 1 y 4, 577.1 ns. 2 y 3 C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) por haber concurrido, en Chile, el 16 de septiembre de 1973, con otros cómplices, en cuanto miembro de los servicios de “inteligencia” militar encargado de los interrogatorios y torturas en el regimiento Tucapel, en la muerte del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli, por cuya muerte se procedió en virtud del artículo 8 del C.P, indicándose que este último, después de haberse presentado el 16 de septiembre de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, tal y como había sido intimado a muchos miembros de la Universidad de la Región con el bando n. 16 del Intendente de la Región de Temuco, pena la aplicación de la “ley de fuga”, fue recluido ilegítimamente en la cárcel de aquella ciudad y sometido a continuos interrogatorios bajo tortura en el Cuartel de Tucapel, junto a otras personas arrestadas por los mismos motivos. Solo aparentemente excarcelado el 4 de octubre de 1973 con la Disposición n. 52 de la Fiscalía del Ejército, Venturelli fue entregado, viceversa, a la “Caravana de la muerte”, dirigida por uno de los colaboradores más estrechos del General Augusto Pinochet, el General Sergio Arellano Stark, que tenía la tarea de depurar el país de los subversivos, favoreciendo “la agilización” de la administración de la justicia contra estos. Venturelli fue sucesivamente asesinado y su cadáver ocultado, todo en el ámbito de la operatividad del “Plan Cóndor” (páginas 10 y 11);



iv) Difusión y búsqueda internacional del Procurador General de la República de 14 de junio de 2021 (páginas 13 y 14);

v) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019, con declaración de sentencia firme de 19 de febrero de 2020 (páginas 15-175);

vi) Normativa sobre prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 177-188);

Los hechos por los cuales se solicita la extradición de Orlando Moreno Vásquez se describen de la siguiente manera en la solicitud de extradición: *“MORENO VASQUEZ Orlando ha sido considerado responsable y castigado a la pena de la cadena perpetua, con la sentencia dictada por la 1ª Corte di Assise di Appello di Roma el 8 de julio de 2019, firme desde el 19 de febrero de 2020, por el siguiente delito: del delito previsto y castigado por los art. 61 n. 1, 2, 4, 9, art. 575, art. 576.1 ns.1 y 4, art. 577.1 ns. 2 y 3, C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) por haber concurrido, en Chile, el 16 de septiembre de 1973, con otros cómplices, en cuanto miembro de los servicios de "inteligencia" militar encargado de los interrogatorios y de las torturas en el regimiento Tucapel, en la muerte del ciudadano italiano, Ornar Roberto VENTURELLI LEONELLI, por cuya muerte se ha procedido en virtud del art. 8 C.P.”*

Por su parte, respecto del requerido Manuel Vásquez Chahuan se describen los siguientes hechos: *“Manuel VÁSQUEZ CHAHUÁN ha sido considerado responsable con sentencia dictada por el 1er Tribunal de Apelación con jurados [1ª Corte di Assise di Appello] de Roma el día 8 de julio de 2019, firme el día 19 de febrero de 2020, de condena a la pena de la prisión perpetua [ergastolo], por la siguiente infracción penal: delito previsto y penado en los artículos 61, núm. 1, 2, 4, 9, 575, 576 párrafo 1 números 1 y 4, 577 párrafo 1 números 2 y 3 C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) por haber participado, en Chile el 16 de septiembre de 1973, junto a otros copartícipes, en calidad de teniente de los servicios secretos militares encargado de los interrogatorios y de las torturas en el regimiento Tucapel, en el asesinato del nacional italiano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, por cuyo fallecimiento se ha procedido a tenor del art. 8 c.p.”*

En cuanto al requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama, se solicita su extradición por los siguientes hechos: *“AHUMADA VALDERRAMA Rafael Francisco ha sido considerado responsable con sentencia dictada por la 1ª Corte di Assise di Appello di Roma el 8 de julio de 2019, firme desde el 19 de febrero de 2020, y condenado a la pena de la cadena perpetua por el siguiente delito: Delito previsto y castigado por los artículos 110, 61 n. 1, 2, 4, 9, 575, 576.1 ns. 1 y 4, 577.1 ns. 2, 3 y 4, C.P. (concurso en homicidio voluntario pluriagravado) por haber concurrido, en Chile el 11 de septiembre de 1973, con otros cómplices, como encargado de los interrogatorios y torturas en el cuartel de Tacna, en la muerte del ciudadano italiano, Juan José MONTIGLIO MURUA, por cuya muerte se ha procedido en virtud del 8 C.P.”*

Con fecha 29 de septiembre de 2021, se tuvo presente los informes del Departamento de Migraciones y la Oficina Central Nacional de Interpol, ambos de la Policía de Investigaciones de Chile comunicando información relativa a las diligencias



efectuadas respecto de los requeridos. Atendido que la respuesta del Departamento de Migraciones no se condijo con lo solicitado mediante el oficio N° 65.393-2021, se resolvió oficiar nuevamente a dicha oficina, especificando que lo pedido es el registro de movimientos migratorios de los requeridos. Considerando que la presencia de los requeridos a los actos del procedimiento podía ser asegurada mediante medidas cautelares personales de menor intensidad a las privativas de libertad, se negó lugar a la detención previa con fines de extradición solicitada por Italia, decretándose en su lugar la medida cautelar de arraigo nacional en contra de los ciudadanos chilenos Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chahuán y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, de conformidad con el artículo 305 bis A del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, se ordenó obtener del sistema informático del Servicio de Registro Civil e Identificación, Monitor Web, el extracto de filiación y antecedentes de los requeridos para ser incorporados a los autos. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en los artículos 646 y 647 del Código de Procedimiento Penal, se dio inicio a la investigación y a fin de tomar declaración indagatoria a los requeridos, según lo dispuesto por el artículo 649 del mismo texto, se fijó audiencia en modalidad telemática para el 12 de octubre de 2021. Se requirió a la Oficina Central Nacional de Interpol de la Policía de Investigaciones para que pusiera en conocimiento de los reclamados los antecedentes del pedido de extradición y la resolución, citándoselos, bajo apercibimiento de arresto, para que comparecieran a la señalada audiencia por videoconferencia. Finalmente, se designó a la Corporación de Asistencia Judicial para que asumiera la defensa de los requeridos.

Por resolución de 8 de octubre de 2021, se tuvo a sus antecedentes el informe policial de Oficina Central Nacional de Interpol, de la Policía de Investigaciones de Chile, que comunicaba haber dado cumplimiento a lo instruido al haber notificado a los requeridos a fin de que comparecieran a la audiencia señalada. Asimismo, se tuvo presente el escrito de la abogada Katerina Gnecco Sandoval quien asumió patrocinio y poder en representación del requerido Rafael Ahumada Valderrama y se ordenó dar copia de los antecedentes que obran en la carpeta digital a la mencionada abogada.

En presentación de 8 de octubre de 2021, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz asumió patrocinio y poder en representación del requerido Manuel Vásquez Chahuán, solicitando que, previo a tomársele declaración indagatoria, se le efectuara un examen de facultades mentales, en atención a lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y su edad, suspendiéndose el procedimiento hasta no contar con dichos resultados. En la misma oportunidad, la abogada Katerina Gnecco Sandoval asumió patrocinio y poder respecto de Orlando Moreno Vásquez y solicitó que se requiriera un examen de facultades mentales respecto de sus representados.

Por resolución de 12 de octubre de 2021, se tuvo presente los patrocinios y poder respecto de los requeridos enunciados y se ordenó remitirles copia de los antecedentes contenidos en la carpeta digital. Asimismo, y en atención a las presentaciones efectuadas por los abogados defensores solicitando exámenes de facultades mentales para sus defendidos, se accedió a lo pedido, y se ordenó oficiar con carácter de urgente al Servicio Médico Legal de Santiago y Temuco con dicho fin. Además, y de acuerdo a lo dispuesto



por el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, la edad de los reclamados y siendo imprescindible contar con los resultados de los exámenes que se les practicaren, se suspendió la realización de la audiencia decretada. Se dispuso oficiar a los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago señora Paola Plaza González y señores Guillermo de la Barra Dünner, Miguel Vásquez Plaza y Hernán Crisosto Greisse a fin de que informaren si existen procesos o episodios en que se investigue o haya investigado la detención, tortura, desaparición y muerte de Omar Roberto Venturelli Leonelli y Juan José Montiglio Murúa, y, en su caso, si los reclamados son o fueron investigados, procesados o condenados por tener participación en dichos hechos, lo que debería certificarse al tenor de lo dispuesto por el artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, se solicitó a la autoridad diplomática requirente que en forma urgente remitiera copia original y traducida de las disposiciones legales italianas que tipifican los delitos por los cuales se condenó a los requeridos en dicho país, de conformidad al artículo X del tratado de extradición aplicable.

En presentaciones de 14 de octubre de 2021, el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez de la Oficina de Defensa Penal de la Corporación de Asistencia Judicial aceptó la designación de patrocinio y poder de los requeridos y se solicitaron copias del proceso.

En la misma fecha, y mediante Oficio N° 1.730, los Ministros en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, doña Paola Plaza González y don Guillermo De La Barra Dünner, informaron no encontrarse bajo su conocimiento causa por detención, tortura, desaparición y muerte de Juan José Montiglio Murúa, no obstante, señalando que dicha víctima se encuentra en causa Rol 126.461-MG “La Moneda”, fallada en primera instancia por el Ministro Miguel Vásquez Plaza, expediente que se encontraba en aquella fecha en apelación ante dicha Corte. Respecto de Omar Roberto Venturelli Leonelli, se comunicó que la causa Rol 2.182-1998, tramitada por el Ministro de Fiero Alejandro Solís Muñoz, fue sobreseída temporalmente con fecha 3 de marzo de 2011, de conformidad con el artículo 409 N°2 del Código de Procedimiento Penal, adjuntándose la respectiva certificación al tenor del artículo 350 Bis del Código de Procedimiento Penal.

En presentación de 15 de octubre de 2021, el Servicio Médico Legal de Temuco solicitó que se realizaran gestiones previas a la citación al examen siquiátrico del reclamado Orlando Moreno Vásquez, a las que se accedió por resolución de 20 de octubre del mismo año.

En presentación de 15 de octubre de 2021, la abogada Katerina Gnecco Sandoval solicitó no tener presente el escrito del abogado de la Oficina de Defensa Penal de la Corporación de Asistencia Judicial asumiendo patrocinio y poder respecto de sus representados, por ya encontrarse éstos con defensa privada y debido al carácter reservado del proceso. Además, solicitó que se oficiara a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, o solo al Ministro Miguel Vásquez Plaza, a fin de que remitiera copia de la sentencia de primera instancia dictada en la causa Rol N° 126.461- MG Episodio La Moneda.

Por resolución de 21 de octubre de 2021, se tuvo presente el oficio N° 1.730 remitido por los Ministros en Visita Extraordinaria, Paola Plaza González y Guillermo



de la Barra Dünner, y se accedió a lo solicitado por la abogada Katerina Gnecco Sandoval respecto de solicitar copia de la mentada causa Rol N°126.461-MG, oficiándose al efecto. A su vez, y atendida la representación privada asumida en autos, se proveyó no ha lugar a las presentaciones de la Corporación de Asistencia Judicial.

El 27 de octubre de 2021, el Servicio de Registro Civil e Identificación remitió los extractos de filiación y antecedentes de los requeridos, en los cuales registran las siguientes anotaciones:

- Orlando Moreno Vásquez:

i) En causa N° 113.051/2006 por el 1° Juzgado Civil de Temuco, ex Juzgado del Crimen, condenado como autor de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal de la época, por resolución de 25 de junio de 2010, a 200 días de presidio menor en su grado mínimo, pena remitida, la que cumplió el 27 de diciembre de 2012;

ii) En causa N° 113.089/2013 por la Corte de Apelaciones de Temuco, declarado reo como cómplice de 7 delitos de homicidio calificado contemplado en el artículo 391 N° 1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal y autor de 7 delitos de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del mismo texto.

iii) En causa N° 2.182/1998 por la Corte de Apelaciones de Santiago, declarado reo como autor del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1 y 3 del Código Penal.

- Manuel Vásquez Chahuán:

i) En causa N° 113.089/2010 por el 1 del Crimen de Temuco, declarado reo como autor del delito contemplado en el artículo 391 Nr. 1°, circunstancia primera del Código Penal.

ii) En causa N° 144.034/2019 por la Corte de Apelaciones de Temuco, declarado reo como autor del delito de aplicación de tormentos, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del texto vigente a la época.

- Rafael Ahumada Valderrama:

i) En causa N° 2.128/1998, declarado reo como coautor de secuestro calificado “Episodio Uruguayos Alberto Fontela y Otros”.

El 28 de octubre la abogada Katerina Gnecco Sandoval solicitó que se trajeran a la vista los autos Rol 2.182-1998 Episodio “Omar Venturelli Leonelli”, solicitando en el otrosí de la presentación que en caso de accederse a lo pedido en lo principal, y una vez se tenga a la vista la causa Rol N° 2182-1998 “Omar Venturelli Leonelli”, se otorgue copia digitalizada de: 1.- La querella interpuesta en esos autos con fecha 25 de julio de 2006 por doña Fresia Margarita Cea Villalobos en favor de la víctima Omar Roberto Venturelli Leonelli; 2.- Declaración prestada por don Orlando Moreno Vásquez, a fojas 300 de esos autos; 3.- Declaraciones prestadas por don Manuel Abraham Vásquez Chahuan, a fojas 314 y 1062 de esos autos.

El 29 de octubre de 2021, el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, informó no encontrarse bajo su conocimiento ninguna causa relativa a la detención, tortura, desaparición y muerte de Omar Roberto Venturelli Leonelli, en tanto que respecto de Juan José Montiglio Murúa,





le correspondió el conocimiento de la Causa Rol 126.461-MG “La Moneda” en la cual se investigó, entre otros, su homicidio calificado, proceso que se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el ingreso N°3.452-2018, acompañando copia de dicha sentencia.

Por resolución de 4 de noviembre de 2021, se tuvo presente el oficio antes señalado y, proveyendo el escrito presentado por la abogada defensora particular Katerina Gnecco Sandoval, se ordenó traer a la vista la Causa Rol N° 2.182-1998, episodio “Omar Venturelli”. Además se resolvió solicitar a los Ministros en Visita Extraordinaria, Guillermo de la Barra Dunner y Paola Plaza González, copia digitalizada de los documentos individualizados por la defensora en su presentación.

El 8 de noviembre de 2021 arribaron oficios del Servicio Médico Legal de Santiago, señalando que, de conformidad a la Normativa Técnica Pericial de Salud Mental (Res Ex No. 856/2018), no se podría agendar hora para los requeridos Manuel Vásquez Chahúan y Rafael Ahumada Valderrama, por no haberse recibido los antecedentes judiciales con el oficio solicitante del peritaje.

El 10 de noviembre de 2021, se recibió oficio de la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, con copia digitalizada de las piezas solicitadas respecto de la causa Rol N° 2.182-1998.

El 19 de noviembre de 2021, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió antecedentes complementarios, consistentes en las normas del Código Penal italiano relativas a la prescripción, al delito por el cual fueron condenados los reclamados en el Estado requirente, y circunstancias agravantes, tanto en versión español como en su idioma original.

Por resolución de 25 de noviembre de 2021, se tuvo presente los oficios del Servicio Médico Legal y se pidió información relativa a los números telefónicos de los requeridos, como también se tuvieron presente los oficios de la Ministra en Visita Extraordinaria Paola Plaza y los antecedentes remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En presentación de 2 de diciembre de 2021, la abogada Katerina Gnecco Sandoval solicitó se extraigan copias auténticas de piezas de la causa Rol N°2.182-1998 y fueran incorporadas al expediente de extradición, considerando su relevancia criminalística, petición a la que se accedió por medio de resolución de 6 de diciembre. En esta última además se ordenó reiterar oficio al Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse, como también se pidió cuenta al Servicio Médico Legal de Temuco respecto de las diligencias efectuadas para cumplir lo requerido por este tribunal.

El 9 de diciembre de 2021, arribó el oficio del Ministro en Visita Extraordinaria Hernán Crisosto Greisse, informando no tener procesos o episodios en que se investigue o haya investigado la detención, tortura, desaparición y muerte de Omar Roberto Venturelli Leonelli y Juan José Montiglio Murúa, el que se tuvo presente por resolución de 13 de diciembre de 2021. En dicha oportunidad además se ordenó remitir a las partes constancia relativa a los documentos solicitados traer a la vista correspondientes a la causa Rol N° 2.182 ya individualizada y las conclusiones obtenidas luego de su revisión.



Con fecha 13 de diciembre de 2021, se dejó constancia de la revisión de los 6 tomos de tramitación que conforman la causa Rol N° 2.182-1998, episodio “Venturelli”, traída a la vista en estos autos. En ella, se registró que tras una serie de órdenes de búsqueda emitidas a fin de tomar declaración testimonial a Jorge Barudi Labrín, no fue posible concretar dicha diligencia debido a que no se ubicó al individuo. Por otro lado, se adjuntó la página N° 4 del Diario Austral de la ciudad de Temuco, correspondiente a la edición del día viernes 14 de septiembre de 1973, en la que consta el texto del Bando N° 16. Por último, se constató que no se libró exhorto internacional a Italia a fin de conocer el estado de la investigación.

El 15 de diciembre de 2021 se recibió dos oficios del Servicio Médico Legal de Temuco, uno solicitando a este Tribunal tener acceso a la copia de ficha clínica existente en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco y Consultorio Santa Rosa, respecto de Orlando Moreno Vásquez, a fin de complementar la evaluación de peritaje psiquiátrico. El siguiente remitió el informe pericial respectivo, en el cual se concluyó que se trata de una persona sin alteración de juicio de realidad, con nivel intelectual normal y funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista de sus facultades mentales no existe impedimento para que declare en el presente proceso. Ambos oficios se tuvieron presente por resolución de 21 de diciembre del mismo año, autorizándose el acceso y copias solicitadas por dicho servicio.

El 22 de diciembre arribaron oficios del Servicio Médico Legal de Santiago, comunicando hora de citación para examen respecto de Manuel Vásquez Chahuán y Germán Mendoza Ahumada, solicitando lo necesario para oficializar su citación, a los que por resolución del día 29 del mismo mes, se dispuso que, atendida la proximidad de las fechas señaladas y respecto al error en el nombre de uno de los requeridos, se fijare nuevo día y hora para la realización de las pericias.

El 28 de diciembre de 2021 el Servicio Médico Legal de Santiago remitió informe médico relativo a Manuel Abraham Vásquez Chahuán, en el cual se concluyó que no presenta alteraciones psicopatológicas de relevancia médico legal en los hechos que se investigan en esta causa.

El 3 de enero de 2022, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz presentó un escrito solicitando que se extrajeran determinadas piezas del expediente de Eltit Spielman, como también solicitó que se oficiara al Ejército de Chile con la finalidad de remitir copia de la hoja de vida calificada de Manuel Vásquez Chahuan, y acompañó copia simple del auto de procesamiento dictado por el Ministro Madrid Croharé en contra de Vásquez Chahuan y su posterior revocación, y Copias simples de la hoja de vida de Manuel Abraham Vásquez Chahuan. Por resolución de 7 de enero de 2022, el Tribunal accedió parcialmente a la solicitud, y además tuvo presente el informe psiquiátrico remitido por el Servicio Médico Legal de Santiago. Con misma fecha, se dejó constancia en el expediente digital de la revisión de los diez tomos de tramitación que conforman la causa Rol N° 2.182-1998 episodio “Eltit Spielmann”, acompañando copias de la resolución auto de procesamiento dictada el 30 de junio de 2014 en contra de Vásquez Chahuan, de extractos de su hoja de vida militar, y, por último, de la



resolución de 04 de septiembre de 2014 que dejó sin efecto el auto de procesamiento librado en contra de Manuel Vásquez Chahuan.

Por resolución de 21 de enero de 2022, atendido el tiempo transcurrido, se reiteró oficio al Servicio Médico Legal respecto del informe psiquiátrico del requerido faltante, como también se pidió al Ejército de Chile, copia auténtica y completa de la hoja de vida militar de los reclamados, sus fichas médicas anexas y licencias médicas emitidas entre los años 1973 y 1980, oficiándose al efecto.

El 26 de enero de 2022, el Servicio Médico Legal comunicó mediante oficio la fecha de citación para que se efectuare el examen de facultades mentales a Rafael Ahumada Valderrama, lo que se tuvo presente por resolución de 1 de febrero del mismo año, oportunidad en la cual además se comunicó a su defensa privada dicha cita.

Por resolución de 15 de febrero de 2022, y atendido el tiempo transcurrido sin respuesta, se reiteró oficio al Ejército de Chile relativo a los antecedentes solicitados con fecha 21 de enero del mismo año.

El 17 de febrero de 2022, la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación del requerido Rafael Abraham Ahumada Valderrama, solicitó que se oficiara al Ejército de Chile, a fin de obtener información relativa a muertos y heridos pertenecientes a las filas del Ejército durante el 11 de septiembre, a lo que por resolución del día 22 del mismo mes se accedió solo parcialmente. En dicha oportunidad, además se solicitó a la autoridad judicial requirente que remitiera en forma urgente copia traducida de la sentencia de primera instancia n. 1/2017, dictada el 17 de enero del año 2017 por la *III Corte di Assise di Roma* por la cual se condenó a los requeridos, oficiándose al efecto.

Por oficio reservado de 24 de febrero de 2022, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, remitió información relativa a las Hojas de Vida de los requeridos, sus fichas clínicas, y señalando además que en la Hoja de Vida de 1973/1974 de Manuel Vásquez Chahuan se registra una anotación de mérito en relación con la operación militar desplegada contra José Liendo Vera.

En presentación de la misma fecha, la abogada Katerina Gnecco Sandoval repuso de la resolución de 22 de enero 2022, en el sentido de dar lugar a las diligencias que solicitó por medio de la anterior presentación.

Por resolución de 3 de marzo de 2022, se tuvo presente el informe remitido por el Ejército, institución a la cual además se le pidió complementara los antecedentes aportados, en el sentido de informar las fechas de inicio y término de la operación militar que permitió la detención de José Liendo Vera, alias “Comandante Pepe” en 1973, junto al registro de personas que participó en dicha operación. En la misma oportunidad, se negó lo solicitado a la recién señalada abogada defensora.

El 5 de abril de 2022, arribó oficio del Servicio Médico Legal de Santiago, con el informe relativo a las facultades mentales del requerido Rafael Ahumada Valderrama, señalando en lo medular que el sujeto de examen presenta un déficit cognitivo leve, asociado principalmente al funcionamiento de la memoria y la fluidez en el lenguaje, cuadro compatible con un trastorno neurocognitivo leve, el que, si bien en ese momento no era equivalente a la enajenación mental, podía ser progresivo. Asimismo, acompañó



informe psicológico complementario, que también observa el mismo cuadro, aunque establece que el juicio de realidad y la capacidad de comprensión se encuentran conservadas, siéndole posible distinguir entre una conducta adecuada de una sancionada socialmente.

Con fecha 6 de abril de 2022, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército informó no existir antecedentes documentales relacionados con el origen de la instrucción que ordenó el ataque al Palacio Presidencial de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 y/o las unidades que participaron en esos hechos. Señalando además que, efectuada una revisión de los antecedentes de Rafael Ahumada Valderrama, no existen antecedentes relativos a su participación activa en el ataque, arresto y traslado de la escolta personal del Presidente Salvador Allende al Cuartel del Regimiento Tacna.

Por resolución de 12 de abril de 2022 se tuvo presente los dos oficios antes señalados, reiterándose al Ejército de Chile lo requerido mediante oficios de 22 de febrero y 3 de marzo del mismo año, oficiándose al efecto.

Con fecha 18 de abril de 2022, arribó oficio del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien informó la inexistencia de información relativa a las fechas de inicio y término de la operación militar que logró en 1973 la detención de José Liendo Vera, alias “comandante Pepe”, como tampoco registro de quienes participaron en ella, lo que se tuvo presente por resolución de 21 de abril.

El 29 de abril de 2022, se hicieron parte los abogados Nelson Guillermo Caucoto Pereira y Francisco Félix Bustos Bustos, en representación de doña Tamara Montiglio Belvederessi.

El 2 de mayo de 2022, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz solicitó que se complementara el oficio remitido al Ejército de Chile el 18 de febrero del mismo año, aclarando que se requiere también información relativa al entonces Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuan, de dotación del Regimiento Tucapel a septiembre de 1973.

Con fecha 7 de mayo de 2022, la abogada Katerina Gnecco Sandoval solicitó que se tuviera por opuesta a la solicitud de los abogados Nelson Caucoto Pereira y Francisco Bustos Bustos de ser parte del presente proceso, mientras que el 9 de mayo de 2022, estos efectuaron una presentación a fin de ser admitida su participación en el mismo.

Por resolución de 12 de mayo de 2022, se resolvió la solicitud del abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, señalándose estarse a lo resuelto e informado el 21 de enero y 24 de febrero del año en curso. En la misma oportunidad, se resolvió la oposición de la abogada Katerina Gnecco Sandoval y la solicitud de los abogados Nelson Caucoto Pereira y Francisco Bustos Bustos, accediéndose a esta última, pues el procedimiento de extradición comprendido en el Código de Procedimiento Penal no excluye expresamente la participación de terceros interesados, como también, de acuerdo a las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, a las que este también debe remitirse, como además a los principios del derecho internacional, que fomenta la participación activa de las víctimas de derechos humanos en todo proceso judicial de su interés y en cualquier momento de su desarrollo.



El 17 de mayo de 2022, el Jefe Mayor General del Ejército remitió oficio al tenor de lo solicitado, adjuntando fotocopias autenticadas del Diario de Guerra del Regimiento Blindado N° 2 de 1973, en el cual se observa anotación de conformidad a la cual el despliegue entorno al Palacio Presidencial de La Moneda obedeció a una orden verbal. Asimismo, señaló no existir anotaciones que indiquen la participación activa de Rafael Ahumada Valderrama en el ataque, arresto y traslado de la escolta personal del Presidente Salvador Allende al Cuartel del Regimiento Tacna, dando cuenta de una anotación de mérito del mismo en su Hoja de Vida, de 30 de noviembre de 1973. Finalmente, dio cuenta no tener más antecedentes respecto de las fechas de inicio y término de la operación militar que logró la detención de José Liendo Vera, ni respecto al registro de quienes participaron en dicha operación.

Por resolución de 25 de mayo de 2022, se tuvo presente el oficio antes mencionado y atendido el tiempo transcurrido, se reiteró al Estado requirente lo solicitado por oficio de 22 de febrero del mismo año.

Con fecha 2 de junio de 2022, y por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, arribó Nota Diplomática N° 3.677 proveniente de la Embajada de Italia, de fecha 10 de mayo de 2022, por la cual se solicitó la detención previa y extradición de los ciudadanos chilenos **Daniel Aguirre Mora**, nacido el 29 de junio de 1931, cédula nacional de identidad 3.142.616-2, **Pedro Octavio Espinoza Bravo**, nacido el 19 de agosto de 1931, cédula nacional de identidad 3.063.238-9, y **Carlos Luco Astroza**, nacido el 11 de noviembre de 1937, cédula nacional de identidad 4.053.179-3, a efectos de cumplir con la pena que les fuera impuesta por el Tribunal de Apelación con jurados de Roma, mediante sentencia de 8 de julio de 2019, en la que se condenó a Daniel Aguirre Mora a la pena de cadena perpetua por su participación en el delito de homicidio voluntario pluriagravado, cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973; a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de cadena perpetua con aislamiento diurno por 2 años, por su participación en los delitos de homicidio voluntario pluriagravado, cometidos en Chile el 5 de mayo de 1976 y 26 de mayo de 1976; y a Carlos Luco Astroza a la pena de cadena perpetua por su participación en el delito de homicidio voluntario pluriagravado, cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973.

A dicha solicitud de extradición se acompañaron los siguientes documentos, los que por referirse a cada uno de los requeridos en particular, se enuncian de forma separada:

Sobre Daniel Aguirre Mora

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 1048/2021, dictada por *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma el 13 de julio de 2021, para el cumplimiento de la pena de prisión perpetua, impuesta por la Corte *d'Assise d'Appello* de Roma, con sentencia de 8 de julio de 2019, firme en fecha 9 de julio de 2021, por el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el día 16 de septiembre de 1973 (páginas 1 y 2);

ii) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019 (páginas 3-164);



iii) Orden de Ejecución para la Encarcelación ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 1048/2021, emitida por el Procurador General de la República (páginas 167 y 168);

iv) Informe de la Fiscalía General de la República, de 4 de septiembre de 2021, exponiendo sobre el proceso penal llevado a cabo en la República Italiana, reseñando las diligencias investigativas y etapas procesales, las cuestiones de hecho y derecho abordadas en los juicios de fondo, y, la imprescriptibilidad del delito de secuestro de persona (páginas 171-181);

v) Difusión de búsqueda internacional de la Fiscalía General de la República ante la Corte de Apelaciones de Roma, de fecha 16 de diciembre de 2021 (páginas 183-186);

vi) Normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 188-197);

#### Sobre Pedro Octavio Espinoza Bravo

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 1049/2021, dictada por *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma el 2 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de la pena de prisión perpetua con aislamiento diurno por 2 años, impuesta por la Corte *d'Assise d'Appello* de Roma, por sentencia de 8 de julio de 2019, firme en fecha 9 de julio de 2021, por los delitos de homicidio voluntario pluriagravado cometidos en Chile el 5 de mayo de 1976 y 26 de mayo de 1976 (páginas 1 y 2);

ii) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019 (páginas 3-164);

iii) Acta de audiencia celebrada el 8 de julio de 2019 ante la Corte del Jurado de Apelaciones de Roma Sección Primera Bis en la que se dispuso corregir error material de escrituración cometido en la redacción de la sentencia definitiva (páginas 166-176);

iv) Orden de Ejecución para la Encarcelación ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 1049/2021, emitida por la Fiscalía General de la República (páginas 178-181);

v) Difusión de búsqueda internacional de la Fiscalía General de la República ante la Corte de Apelaciones de Roma, de fecha 16 de diciembre de 2021 (páginas 182-185);

vi) Normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 188-196).

#### Sobre Carlos Luco Astroza

i) Solicitud de detención preventiva y entrega en extradición del requerido, sobre la base de la orden de ejecución SIEP 1050/2021, dictada por *Procura Generale presso la Corte di Appello* de Roma el 9 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de la pena de prisión perpetua, impuesta por la Corte *d'Assise d'Appello* de Roma, con sentencia de 8 de julio de 2019, firme en fecha 9 de julio de 2021, por el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el día 16 de septiembre de 1973 (páginas 1 y 2);

ii) Sentencia condenatoria de la Corte de Apelación de Roma (*1ª Corte di Assise di Appello di Roma*) de 8 de julio de 2019 (páginas 3-163);



iii) Informe de la Fiscalía General de la República, de 4 de septiembre de 2021, exponiendo sobre el proceso penal llevado a cabo en la República Italiana, las cuestiones de hecho y derecho discutidas en segunda instancia y la imprescriptibilidad del delito de secuestro de persona (páginas 166-170);

iv) Orden de Ejecución para el Encarcelamiento ex art. 656.1 C.P.P. (condenado libre) N. SIEP 1050/2021, emitida por el Procurador General de la República (páginas 178-180);

v) Difusión de búsqueda internacional de la Fiscalía General de la República ante la Corte de Apelaciones de Roma de 16 de diciembre de 2021 (páginas 182-184);

vi) Normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes (páginas 185-191).

Los hechos por los cuales se solicita la extradición de Daniel Aguirre Mora son los siguientes: *“Daniel AGUIRRE MORA fue considerado responsable con sentencia dictada por la la Corte di Assise di Appello [Corte del Jurado de Apelaciones] de Roma el 8 de julio de 2019, pasada a cosa juzgada el 09.07.2021, de condena a la pena de cadena perpetua, por los siguientes delitos: **cargo M1) - Caso "VENTURELLI LEONELLI"** - delito previsto y castigado por los arts. 61 n.1, 2, 4, 9, 575, 576/1º n.1 y 4, 577/1º n.2, 3 y 4 del Código Penal (homicidio voluntario pluriagravado) por haber participado, en Chile el 16 de septiembre de 1973, junto con otros cómplices, como encargado de los interrogatorios y de las torturas en la cárcel de Temuco, en el asesinato del ciudadano italiano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, por cuya muerte se procedió de conformidad con el art. 8 del código penal.”*

Los hechos por los cuales se solicita la extradición de Pedro Octavio Espinoza Bravo son los siguientes: *“Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO fue considerado responsable con sentencia dictada por la la Corte di Assise di Appello [Corte del Jurado de Apelaciones] de Roma el 8 de julio de 2019, pasada a cosa juzgada el 09.07.2021, de condena a la pena de cadena perpetua con aislamiento diurno por dos años, por los siguientes delitos: **cargo N1) - Caso "DONATO AVENDANO"** - delito previsto y castigado por los arts. 61 n.1, 2, 4, 9, 575, 576/1º n.1 y 4, 577/1º n.2, 3 y 4 del Código Penal (homicidio voluntario pluriagravado) por haber participado, en Chile el 5 de mayo de 1976, junto con otros cómplices, como jefe de las operaciones de la DINA (organismo de represión contra el partido comunista), en el papel de número dos de la organización, y como responsable del centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", donde estuvo detenido ilegalmente Jaime Patricio Donato AVENDANO, junto con otros militantes del Partido comunista chileno, en el asesinato de dicho ciudadano italiano, Jaime Patricio Donato AVENDANO, por cuya muerte se procedió de conformidad con el art. 8 del código penal. Con tal fin, efectuó el registro y la ocupación militar de treinta y dos apartamentos, definidos "cuevas" del Partido Comunista, entre los cuales los de la Calle Conferencia n. 1587 y de la Calle Alejandro del Fierro n. 5113, donde realizó, con otros cómplices, actos dirigidos a poner en peligro, con la finalidad de matar, la incolumidad de un número indeterminado de personas, incluso por el solo hecho de sospechar que pudieran militar en el Partido Comunista Chileno, arrestándolas sin ninguna resolución de la Autoridad legítima, llevándolas a Villa Grimaldi, torturándolas*



y matando a algunas de ellas, entre las cuales el ciudadano Jaime Patricio Donato Avendano. **Cargo 01) - Caso "MAINO CANALES"** - delito previsto y castigado por los arts. 61 n.1, 2, 4, 9, 575, 576/1º n.1 y 4, 577/1º n.2, 3 y 4 del Código Penal (homicidio voluntario pluri agravado) por haber participado, en Chile el 26 de mayo de 1976, junto con otros cómplices, como jefe de las operaciones de la DINA (organismo de represión contra el partido comunista), prácticamente el número dos de la organización, y como responsable del centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", donde estuvo detenido ilegalmente Juan Bosco MAINO CANALES junto con otros militantes del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria - corriente de izquierdas de la democracia cristiana chilena, que se había separado del partido), en el asesinato del ciudadano italiano, Juan Bosco MAINO CANALES, por cuya muerte se procedió de conformidad con el art. 8 del código penal. Con tal fin, en el ámbito de la campaña represiva contra el MAPU, que él había creado, programado y realizado, con otros cómplices, el día 26 de mayo de 1976, tras haber arrestado a Elisabeth URRA, a Antonio Elizondo ORMAECHEA y a Juan Bosco MAINO CANALES, y tras haberlos llevado a "Villa Grimaldi", donde éstos fueron interrogados y torturado, mató a las personas antes citadas que habían sido arrestadas ilegalmente, entre las cuales el ciudadano Juan Bosco MAINO CANALES, ocultando sus cadáveres y apropiándose de algunos bienes personales de ellos, entre los cuales un automóvil Citroen AK6. "

Los hechos por los cuales se solicita la extradición de Carlos Luco Astroza son los siguientes: "Con la sentencia dictada el 8 de julio de 2019 por la 1º Corte di Assise di Appello di Roma (Tribunal Penal de Apelación) firme desde el 09.07.2021, LUCO ASTROZA Carlos ha sido considerado responsable del delito seguidamente indicado y condenado a la pena de la cadena perpetua: **Punto MI) - Caso VENTURELLI LEONELLI** - delito previsto y castigado por los artículos 575, 61 n. 1, 2, 4 y 9, art. 576.1 n. 1 y 4, 577.1 n. 2, 3 y 4 C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) por haber participado - junto a otros correos, en Chile, el 16 de septiembre de 1973, en cuanto encargado de los interrogatorios y de las torturas en la cárcel de Temuco - en la ejecución del ciudadano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, por cuya muerte se ha procedido en virtud del art. 8 C.P. "

Por resolución de 7 de junio de 2022, y atendida la acumulación ordenada por el Presidente de la Corte Suprema, se tuvo por recibidos dichos antecedentes y previo a proveer, se dispuso oficiar al Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile a fin de que comunicara la situación carcelaria de los requeridos, debiendo informar si estos se encuentran privados de libertad, el recinto que los alberga, la calidad en que fueron ingresados, el tribunal y la causa del cual emanaron las ordenes y en su caso, la pena que les resta por cumplir. Asimismo, se despachó orden de búsqueda a Interpol a fin de que averiguara el actual paradero y eventual domicilio de los requeridos, informando además sobre procesos penales y antecedentes delictuales, como también a la Jefatura Nacional de Migraciones a fin de que comunique sobre sus ingresos y salidas desde el año 2016 a la fecha. Además, se requirió del Registro Civil e Identificación información sobre su domicilio y copia de sus extractos de filiación y antecedentes. Finalmente, se ofició a los Ministros de la Corte de Apelaciones de





Santiago que se individualizan a fin de que informen si existen procesos o episodios en que se investigue o haya investigado la detención, tortura, desaparición y muerte de Omar Roberto Venturelli Leonelli, Jaime Patricio Donato Avendaño y Juan Bosco Maino Canales, y en su caso, si los requeridos son o fueron investigados, procesados, citados a declarar o condenados por tener participación en tales hechos, despachándose los oficios respectivos.

El 7 de junio de 2022, arribó oficio del Registro Civil, remitiendo extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones relativas al Registro General de Condenas tratándose de Daniel Aguirre Mora; con una anotación relativa a la causa Nro. 113.051/2006 correspondiente al 1º Juzgado del Crimen, por el delito contemplado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, tratándose de Carlos Luco Astroza; y, el mismo documento relativo a Pedro Octavio Espinoza Bravo, con 49 hojas de anotaciones.

El 8 de junio de 2022, el Ministro en Visita Extraordinaria Guillermo De La Barra Dünner informó no encontrarse bajo su conocimiento, ni el de la Ministra Paola Plaza González, causa por la detención, tortura, desaparición y/o muerte de Jaime Patricio Donato Avendaño, no obstante lo cual, dio cuenta que dicha víctima se encuentra en causa Rol N° 2.182-98 episodio “Conferencia 1º”, actualmente bajo apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 2.545-2019. En lo que respecta a Omar Roberto Venturelli Leonelli, se acompañó certificación del artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, sobre Juan Bosco Maino Canales se señaló que dicha causa se encuentra en tramitación bajo el Rol N° 2.182-98 Episodio “Juan Maino y otros”, seguida por los delitos de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal de la época, en la cual se dictó sentencia de casación y reemplazo el 13 de noviembre de 2014, declarándose la reapertura del sumario para perseguir la responsabilidad de Reinhard Doring Falkenberg el 8 de octubre de 2021, encontrándose actualmente en tramitación.

En la misma fecha, el Ministro en Visita Extraordinaria Hernán Crisosto Greisse informó no le correspondió conocer causas relativas a dichas víctimas, razón por la cual tampoco citó a declarar a los reclamados de autos respecto de ellas.

El 10 de junio de 2022, el Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones informó que ninguno de los reclamados consultados registra movimientos migratorios por pasos fronterizos habilitados en la fecha consultada.

El 13 de junio de 2022, el Departamento Control Penitenciario de Gendarmería de Chile dio cuenta que los reclamados Aguirre Mora y Luco Astroza no se encuentran reclusos en ningún establecimiento penitenciario del país, en tanto que Espinoza Bravo sí lo está, en el CCP de Punta Peuco, como condenado en 47 causas y con 22 procesos pendientes, iniciando el cumplimiento de su condena el 14 de junio de 2006, la que terminará el 3 de marzo de 2571.

Por resolución de 15 de junio de 2022, se tuvo presente los informes de las instituciones antes señaladas y los oficios remitidos por los Ministros previamente individualizados.



El 15 de junio de 2022, el Registro Civil informó sobre los domicilios que registra de Daniel Aguirre Luco, Carlos Luco Astroza y Pedro Espinoza Bravo en dicha institución, informe que se tuvo presente por resolución del día 28 del mismo mes y año.

El 8 de julio de 2022, arribó el oficio RR.EE (DIGEJUR) OF. PUB. N°7231 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitiendo los antecedentes solicitados mediante oficio de 25 de mayo del mismo año, correspondientes a la sentencia de primera instancia dictada por la III Corte di Assise di Roma contra los requeridos Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chahuan y Rafael Francisco Ahumada Valderrama.

Con fecha 12 de julio de 2022, se recibió la Nota Diplomática N° 5570 de la Embajada de Italia, de fecha 30 de junio de 2022, la cual acompañó la sentencia de primera instancia dictada por la III Corte di Assise di Roma, dictada en contra de Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chahuan, y Rafael Francisco Ahumada Valderrama.

El 12 de julio de 2022, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército complementó la información requerida, señalando que el Comandante del Regimiento de Artillería N°1 Tacna expresó que Rafael Abraham Ahumada Valderrama no figura con antecedentes de tener participación activa en el ataque, arresto y traslado de la escolta personal del Presidente Salvador Allende el Cuartel del Regimiento Tacna durante esos años, y tampoco con información de la Operación militar que logró en 1973 la detención de José Liendo Vera.

Con fecha 26 de julio de 2022, el Director de la Escuela de Infantería remitió certificado de búsqueda, indicando que dichos antecedentes no fueron habidos por inexistencia de documentación física o digital.

Finalmente, el Director de la Escuela de Suboficiales expuso que se realizaron las diligencias buscando los antecedentes donde conste el origen de la instrucción que ordenó el ataque al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, además de la participación de Rafael Abraham Ahumada Valderrama o de algún otro en particular, sin antecedentes.

El 26 de julio de 2022, Interpol remitió informe policial, comunicando que don Carlos Luco Astroza falleció el día 1 del mismo mes y año, en tanto que Pedro Espinoza Bravo se encuentra recluido en el C.C.P Punta Peuco desde el 29 de septiembre de 2013. Por su parte, don Daniel Aguirre Mora tiene como domicilio el de Calle 3 Oriente N°640, departamento 32, edificio Sol Oriente, Viña del Mar, donde se encontraría postrado y bajo el cuidado de una enfermera.

Por resolución de 29 de julio de 2022, se tuvo presente el informe policial antes señalado y el oficio remitido por el Ejército de Chile, como también la nota diplomática remitida por la Embajada de Italia. En la misma oportunidad y considerando el fallecimiento de don Carlos Luco Astroza y lo previsto en el artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 93 N°1 del Código Penal, se decretó el sobreseimiento definitivo del proceso dirigido en su contra.

Además, resolviendo derechamente la solicitud de detención previa y considerando que la presencia de los requeridos podía ser asegurada con medidas



cautelares personales de menor intensidad que aquella, se negó lugar a la misma, decretándose el arraigo nacional en contra de Daniel Arnoldo Aguirre Mora y Pedro Octavio Espinoza Bravo, de conformidad al artículo 305 bis A del Código de Procedimiento Penal, ordenándose poner dicha circunstancia en conocimiento de la Jefatura Nacional de Migraciones e Interpol a fin de que controlare su debido cumplimiento.

Asimismo, se tuvo por formalizado el pedido de extradición formulado por la República italiana en contra de aquellos, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 646 y 647 del Código de Procedimiento Penal, se dio inicio a la investigación, requiriéndose a Interpol y al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco a fin de que lo pusiera en su conocimiento.

Finalmente, se reiteró solicitud de información a los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Miguel Vásquez Plaza y se solicitó a la señora Paola Plaza González que informare sobre la actual estado procesal de Pedro Octavio Espinoza Bravo respecto del proceso Rol N° 2.182-1998 episodio “Juan Maino y otros”, particularmente si este fue investigado, procesado, citado a declarar, condenado o absuelto en dicho procedimiento.

Por resolución de la misma fecha, y teniendo en consideración el estado de tramitación de la causa, se dispuso que la audiencia para tomar declaración indagatoria a los requeridos, de acuerdo al artículo 649 del Código de Procedimiento Penal, se determinaría una vez que se encontrare equiparada la situación procesal de todos ellos, esto es, cuando se obtuvieran los informes solicitados y exámenes siquiátricos que determinaran si Aguirre Mora y Espinoza Bravo se encuentran mentalmente capacitados para prestar declaración.

El 3 de agosto de 2022, la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago señora Paola Plaza González, informó que la causa Rol N°2.182-98 episodio “Juan Maino y otros”, seguida por los delitos de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, en su redacción de la época, se encuentra en etapa de sumario y en lo que respecta a Pedro Octavio Espinoza Bravo, el único antecedente que obra en ella consiste en una copia de declaración en calidad de inculpado remitida por el entonces Ministro de Fiero Juan Guzmán Tapia al Ministro Jorge Zepeda Arancibia, la que adjuntó.

En la misma fecha, el Ministro Señor Miguel Vásquez Plaza comunicó que las causas relacionadas con violación a Derechos Humanos ya no están a su cargo, motivo por el cual no puede proporcionar información relativa a ellas, oficios ambos que se tuvieron presente por resolución de 9 de agosto de 2022.

El 25 de agosto de 2022, la abogada Magdalena Garcés Fuentes solicitó hacerse parte en representación de los intereses de doña María Paz Venturelli Cea, lo que se tuvo presente por resolución de 30 de agosto del mismo año.

Por resolución de la misma fecha, atendida la avanzada edad de los requeridos Pedro Bravo Espinoza y Daniel Aguirre Mora y lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, previo a tomar sus declaraciones de acuerdo al artículo 649 del mismo texto, se dispuso oficiar al Servicio Médico Legal de Valparaíso y



Santiago a fin de que sometiera a ambos a un examen de facultades mentales, oficiándose al efecto.

El 2 de septiembre de 2022, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió Nota Diplomática N° 7.769 de la Embajada de Italia, de 25 de agosto de 2022, por la cual esta comunicó que dicho Estado otorgó mandato a los abogados Silvio Cuneo Nash y Karinna Fernández Neira para que representara sus intereses.

El 2 de septiembre de 2022, el Servicio Médico Legal de Valparaíso informó la citación para efectuar evaluación siquiátrica para el lunes 3 de octubre de 2022 a don Daniel Aguirre Mora.

El 7 de septiembre de 2022, el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial Juan Manuel Álvarez Álvarez aceptó la designación para ser patrocinante de Daniel Aguirre Mora y Pedro Espinoza Bravo.

Por resolución de 9 de septiembre de 2022, se tuvo presente los patrocinio y poder presentados por el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial; lo informado por la Embajada de Italia mediante su nota diplomática, y se ordenó a los abogados representantes del Estado requirente que solicitaran formalmente su incorporación a estos autos, acompañando un mandato judicial. Por último, se tuvo presente el oficio del Servicio Médico Legal de Valparaíso, ordenándose ponerlo en conocimiento de la primera.

El 12 de septiembre de 2022, la abogada Karinna Fernández Neira repuso de la mencionada resolución, solicitando se tuviera por constituido su patrocinio y poder en calidad de representantes de la República italiana, certificándose previamente su calidad de abogados, reposición que se acogió por resolución de 22 de septiembre del mismo año, dejándose sin efecto la anterior, requiriéndoseles formalizar su incorporación a estos autos de acuerdo al artículo 1 de la Ley N°18.120. En la misma, se pidió cuenta al Servicio Médico Legal de Santiago respecto de lo solicitado por oficio del 30 de agosto pasado.

El 22 de septiembre de 2022, el Servicio Médico Legal de Santiago remitió informe correspondiente a Pedro Octavio Espinoza Bravo, el que concluyó que no presenta alteraciones sicopatológicas de relevancia médica legal en los hechos que se investigan en esta causa judicial. Se observó que, si bien presenta un deterioro sicorgánico propio de su edad avanzada, con el olvido transitorio de algunas fechas o nombres, conserva la capacidad de comprender, conducirse en un proceso legal, y prestar declaración adecuadamente, el que se tuvo presente por resolución de 30 de septiembre del mismo año.

El 30 de septiembre de 2022, el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez, en representación de don Daniel Aguirre Mora, solicitó se modificare la fecha de realización del examen mental agendado ante el Servicio Médico Legal de Valparaíso, por haberse visto su representado aquejado por diversas afectaciones de salud, a lo que se accedió por resolución de 6 de octubre del mismo año, ordenando poner en conocimiento de dicha institución, solicitando ofrecer facilidades para la realización de dicha diligencia.



El 11 de octubre de 2022, el abogado Jorge Balmaceda Morales solicitó se tuviera presente y por acompañado documento que acredita el patrocinio y poder suscrito por Pedro Espinoza Bravo, presentación que se resolvió el 20 de octubre del mismo año, solicitándose previamente acreditar junto a la abogada Viviana Hernández su personería para actuar en el proceso ante Gendarmería de Chile y que se rectificara su presentación según ello y lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley N°20.886 y artículo 3 del Auto Acordado de la Corte Suprema para la aplicación de dicha ley.

Por resolución de 7 de noviembre de 2022, se pidió cuenta al Servicio Médico Legal de Valparaíso respecto de lo solicitado por oficio de 6 de octubre del mismo año.

El 10 de noviembre de 2022, el Servicio Médico Legal de Valparaíso informó citación a evaluación siquiátrica para el 16 de noviembre de 2022 a don Daniel Arnoldo Aguirre Mora, lo que se tuvo presente por resolución de 14 de noviembre de 2022.

El 16 de diciembre de 2022, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la Nota Diplomática N°13.122 proveniente de la Embajada de Italia, informando que en su opinión, la avanzada edad de los sujetos de extradición y la residencia estable en Chile no son impedimento para la subsistencia de una fuerte posibilidad de fuga debido a la extrema magnitud de los delitos cometidos y a la tipología de la pena consecuentemente aplicada, que es la de cadena perpetua. Señaló además que, en caso de sentencia favorable a la extradición, los sujetos a ella podrían fácilmente violar la actual medida cautelar de prohibición de expatrio para buscar sustraerse a su entrega a Italia y a la consiguiente ejecución de dicha pena, que podría ser conmutada por aquella de 30 años de reclusión. Por lo anterior concluyó que les parece necesaria la aplicación de una medida cautelar más restrictiva, estimando como la más adecuada y proporcional la de arresto domiciliario o cualquiera otra más grave que la prohibición de expatrio. Por resolución de misma fecha, se resolvió no ha lugar, fundado en que el Estado requirente cuenta con debida representación legal en la causa.

El 20 de diciembre de 2022, Haydee Oberreuter Umazabal, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitó hacerse parte en estos autos. Por resolución de 22 de diciembre del mismo año, se requirió que previo a proveer, se suscriba la presentación por medio de la compareciente, Haydee Oberreuter Umazabal, según lo dispuesto en el artículo 3 del Auto Acordado de esta Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación Electrónica, o ratifique la firma ante el señor Secretario. Dicho mandato fue cumplido el 19 de diciembre, según certificación de 20 de diciembre del mismo año, todo lo que se tuvo presente por resolución de 28 de diciembre de 2022.

El 10 de enero de 2023, el Servicio Médico Legal de Valparaíso remitió informe de pericia psicológica practicada a Daniel Arnoldo Aguirre Mora, en el cual se concluyó que exhibe indicadores clínicos de un deterioro cognitivo leve compatible con un estadio 2-3/2 de la Escala de Deterioro Global de Reisberg y que no cumple criterios para el diagnóstico de otras sicopatologías. Que a nivel biomédico, presenta elementos constitutivos de un adulto mayor frágil dado por la existencia de factores de riesgo (edad cronológica), cardiopatía y trastorno del equilibrio-marcha), los cuales incrementan la



posibilidad de presentar episodios adversos, o de pérdida, o mayor deterioro en la funcionalidad y dependencia. Por resolución de la misma fecha, se solicitó complementar dicho informe, al tenor de lo pedido, debiendo aclarar a partir del examen de facultades mentales efectuado, la capacidad del requerido Daniel Aguirre Mora de declarar ante este tribunal, de conformidad al artículo 349 y 649 del Código de Procedimiento Penal.

El 13 de enero de 2023, el Servicio Médico Legal de Valparaíso cumplió lo ordenado, señalando que si bien el requerido mencionado se encuentra en condiciones para declarar, la existencia de un leve menoscabo en su desempeño cognitivo puede interferir con su participación plena en instancias judiciales, el que se tuvo presente por resolución de 19 de enero de 2023.

El 26 de enero de 2023, la abogada Paulina de los Ángeles Zamorano, abogada del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, delegó poder en los abogados Marcelo Orellana Caro y Joaquín Perera Campusano, lo que se tuvo presente por resolución de 26 de enero del mismo año.

El 3 de febrero de 2023, y atendido el mérito de los antecedentes, y con la finalidad de tomar declaración indagatoria a los requeridos Manuel Vásquez Chahuán, Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez, Daniel Aguirre Mora y Pedro Espinoza Bravo, según dispone el artículo 649 del Código de Procedimiento Penal, se fijó dicha gestión en modalidad telemática para el 22 de febrero del mismo año, a las 13.00 horas. Se requirió en dicha oportunidad a Interpol a fin de que pusiera en conocimiento de los cinco primeros requeridos la resolución, citándolos para comparecer en el día y hora señalados, bajo apercibimiento de arresto; y, en particular tratándose de Pedro Octavio Espinoza Bravo, se ofició al Centro de Cumplimiento Punta Peuco a fin de que dispusiera los medios tecnológicos necesarios para la comparecencia desde sus dependencias, despachándose los oficios respectivos.

El 6 de febrero de 2023, El Centro de Cumplimiento Punta Peuco informó haber notificado al requerido Pedro Espinoza Bravo, lo que se tuvo presente por resolución de la misma fecha.

El 10 de febrero del mismo año, se dejó constancia en autos de haber recibido correo electrónico en la casilla [extradicionesdai@pjud.cl](mailto:extradicionesdai@pjud.cl), comunicación de doña Gisela Aguirre, hija de Daniel Aguirre Mora, en el sentido de solicitar una alternativa no digital para comparecer a la audiencia. Por resolución de misma fecha, se ordenó remitir la comunicación a la Corporación de Asistencia Judicial, la cual ejerce la defensa del requerido Daniel Aguirre Mora, resolviendo además que, sin perjuicio de lo anterior, y atendido el tenor de lo informado, la defensa de dicho requerido deberá acompañarlo el día fijado para su declaración indagatoria, a fin de asistirlo en la misma.

El 16 de febrero de 2023, Pedro Octavio Espinoza revocó todo patrocinio y poder otorgado a la fecha y confirió este al abogado Alcibiades Jorge Eugenio Balmaceda Morales, lo que se tuvo presente por resolución expedida el mismo día.

En la misma oportunidad, la abogada Magdalena Garcés Fuentes solicitó que se oficiara a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para que funcionarios de dicha repartición se constituyeran en el domicilio de los requeridos el día de la declaración indagatoria, a fin de resguardar su adecuada realización. Asimismo,



solicitó hacerse parte en representación de la Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). A la primera de dichas solicitudes, se proveyó no ha lugar por resolución de 20 de febrero del mismo año, por ser responsabilidad de los requeridos el correcto desarrollo de la mentada audiencia, a la cual fueron debidamente citados bajo apercibimiento. En cuanto a la segunda solicitud, previo a ser proveída, se solicitó copia actualizada del certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro de dicha institución, lo que fue cumplido mediante presentación del mismo día, teniéndose en consecuencia como parte, por resolución de 21 de febrero de 2023.

El 22 de febrero, Interpol comunicó haber notificado exitosamente a los requeridos Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora de la audiencia indagatoria, lo que se tuvo presente el mismo día.

El 27 de febrero de 2023, de acuerdo a lo instruido, se efectuó audiencia telemática a fin de tomar declaración indagatoria a los requeridos, de conformidad con el artículo 649 del Código de Procedimiento Penal, con la asistencia de estos últimos, sus abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval por Ahumada Valderrama y Moreno Vásquez, Luis Hernán Núñez Muñoz por Vásquez Chahuán y Jorge Balmaceda Morales por Espinoza Bravo; la abogada del Estado requirente Karina Fernández Neira; Francisco Felix Bustos Bustos por doña Tamara Montiglio Belvederessi, Joaquín Perera Campusano en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y, Marcelo Orellana Caro.

En seguida, se expuso a los presentes el propósito de la audiencia y los pasos venideros en la tramitación del proceso tras ella, para proceder con la toma de las declaraciones indagatorias.

En primer lugar, depuso Rafael Francisco Ahumada Valderrama, quien acreditó su identidad y señaló no tener claro la razón por la cual se le somete a este procedimiento de extradición. Consultada sobre este punto, su abogada señaló que, si bien la comunicación con él es compleja, entiende que existe el presente proceso y que es requerido por el Estado italiano a grandes rasgos. Hizo presente que al firmar el patrocinio y poder el año 2021, se le explicaron estos aspectos, sin perjuicio de que posterior a ello su salud se ha visto afectada, por lo que la comunicación es más fluida con su hija.

Preguntado, el requerido indicó no tener condena penal en el país y aceptó prestar su declaración asistido por su abogada defensora, sin perjuicio de que preguntado, contestó no tener antecedentes adicionales sobre este caso, desconociendo a los ciudadanos extranjeros, aunque solo por rumores sabe que son italianos, sin que se le haya imputado por nadie responsabilidad directa.

En segundo lugar, depuso Manuel Abraham Vásquez Chahuán, quien acreditó su identidad y señaló estar dispuesto a declarar acompañado de su abogado.

Preguntado, respondió estar consciencia del proceso de extradición que se sigue en su contra por las informaciones que le han entregado sus abogados y lo que ha visto en redes sociales. Respecto de estos hechos, no ha estado procesado ni condenado en



Chile. Sabe que hay procesos vigentes, sin embargo, nunca ha sido interrogado ni procesado en ellos.

Añadió que el año 1973 se encontraba destinado al Regimiento de Infantería N°8 de Temuco, el 11 de septiembre estaba allá en calidad de Comandante de la Segunda Compañía de Fusileros de Infantería, y realizó ese día actividades de seguridad en distintas entidades del servicio público. El día siguiente, fue citado a su oficina por el Comandante del Regimiento don Pablo Iturriaga para encomendarle la misión de trasladarse con una patrulla reforzada a el Complejo Maderero de Panguipulli y ponerse a disposición del Comandante Guerra que estaba en la zona para capturar al “Comandante Pepe” en su momento, donde estuvo hasta el 24 de septiembre. La captura de aquel se materializó el día 19 o 20, quien fue entregado ese mismo día a Carabineros de la localidad de Liquiñe, posterior a lo cual desconoce su destino, salvo que después hubo un Consejo de Guerra. Tras ese día, fue evacuado en helicóptero a Temuco por haber contraído tifoidea y del hospital lo derivaron a su domicilio con reposo absoluto y tratamiento antibiótico por veinte días, lo que duró hasta el 12 de octubre de 1973, motivo por el cual no tiene vinculación con los casos de Montiglio en Santiago ni Venturelli de Temuco, dado que este habría desaparecido el 4 de octubre de 1973. Agregó que fue procesado por el Ministro Madrid por el caso Eltit, similar en las fechas, pues aconteció el 12 de octubre y dicho Ministro revocó el auto de procesamiento en su contra, con la documentación oficial con que contaba.

Respecto de lo ocurrido en el Regimiento Tucapel, dijo no tener mayores antecedentes, pues estuvo hasta el 15 de octubre sin actividad personal en dicha unidad. Señaló no conocer los hechos ocurridos en la cárcel de Temuco.

No conoció al señor Venturelli Leonelli ni tiene antecedentes al respecto, ni mucho menos al personaje de Santiago, pues estaba en Temuco.

En tercer lugar, depuso Orlando Moreno Vásquez, quien tras acreditar su identidad, aceptó declarar en presencia de su abogada.

Indicó conocer la razón por la cual se solicita su extradición por parte de Italia, pero que no ha sido interrogado ni tiene juicio pendiente en Chile respecto de estos hechos.

Consultado sobre su conocimiento sobre esta causa, respondió haber aparecido y haber sido interrogado en varias causas. Él trabajaba en la Segunda Comandancia del Regimiento, como dactilógrafo y criptógrafo, era el encargado de las claves del Regimiento, sin tener contacto con su parte operativa, por ser solo un administrativo. Se encontraba bajo las órdenes del Segundo Comandante Luis Jofré, quien a su vez era el Fiscal, pero tenía sus propios actuarios. La Fiscalía no actuaba en la Segunda Comandancia donde él trabajaba, sino que tenía su propia oficina. El 25 de septiembre de 1973 debe haber estado en esa misma posición.

No recuerda haber conocido el Bando Militar N° 16.

Agregó que hubo detenidos en el Regimiento Tucapel en los días próximos a la toma del Palacio de la Moneda, pero que él no tuvo contacto con ellos. Sabe que llegaron y que los veía cuando los pasaban a un gimnasio, que era donde estaba la





mayoría de la gente que llegaba detenida. No supo de las detenciones ilegales en la cárcel de Temuco. No conoció a Omar Venturelli.

En cuanto a interrogatorios efectuados en el Regimiento Tucapel, señaló que estos si se llevaban a cabo por personal de Investigaciones, aunque no le consta haberlos visto.

En cuarto lugar, depuso Daniel Arnoldo Aguirre Mora, quien acreditó su identidad y aceptó declarar en presencia de su abogado.

Sobre el conocimiento de la presente causa, indicó ser inocente, no ser la persona requerida por los tribunales italianos, que erróneamente lo han responsabilizado, pues en su conocimiento el responsable es el ex funcionario de Investigaciones Alfonso Poblete Müller. Lo anterior lo ha establecido con su denuncia ante los tribunales de justicia con ocasión del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, fecha en que se encontraba prestando servicios en Temuco, donde era Comisario Jefe de la Comisaría de Investigaciones de Chile, dependiente de la Prefectura territorial.

Añadió que el 25 de septiembre de 1973, estaba en Temuco sirviendo en su unidad, sin conocer los hechos ocurridos a esa fecha en el Regimiento Tucapel. Se mantuvieron desde el 11 al 30 de septiembre sin acción y acuartelados por orden del Intendente a la fecha, de apellidos Iturriaga Marchese.

No participó en la causa de muerte del ciudadano Venturelli Leonelli, con quien no tuvo ninguna clase de contacto.

Menciona que el responsable sería el señor Poblete, funcionario de Investigaciones, a quien denunció, porque solo era él y cinco funcionarios más de la Policía de Investigaciones quienes fueron entregados al Regimiento Tucapel, más bien a la Fiscalía para trabajar con ellos. La denuncia la hizo el año 2018 más o menos, ante el Juzgado de Garantía por la suplantación de su nombre y cargo policial. No sabe el interés de aquel de haberlo hecho, era un funcionario arribista que había llegado al Regimiento Tucapel a servir voluntariamente. Por su parte, él siempre estuvo en su oficina y trabajó desde ahí con sus funcionarios, salvo con el señor Poblete y cinco funcionarios más, además del inspector Alfonso Poblete, el de mayor grado, el detective Rigoberto Ortiz, otro de apellido Quiroz, otro San Juan y Morales, además del chofer de apellido Luco Astroza.

Agregó que el señor Poblete, bajo el amparo del grupo de funcionarios de la Operación Cóndor y de la Caravana de la Muerte, que a la fecha pasaron por Temuco. Ni él ni sus funcionarios tuvieron contacto con las personas de la Caravana de la Muerte al pasar por Temuco, pues estaban acuartelados, también el día 19 de la detención del ciudadano Venturelli. Los únicos que supieron de esto fueron los funcionarios agregados a la Fiscalía del Regimiento Tucapel.

Finalmente, depuso Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien tras acreditar su identidad, aceptó declarar asistido por su abogado.

Indicó desconocer la razón por la cual se le somete a este proceso de extradición, tras lo cual, su abogado señaló haber conversado en términos generales con su cliente, quien le dijo ignorar este juicio y no haber declarado, que no tuvo ninguna participación



en los hechos que aparecen en la sentencia condenatoria, sin saber porque se dictó. Solo sabe de la existencia de una carta rogatoria pidiendo su extradición.

Cree que se le relaciona con esta causa pues se le ha sindicado como el segundo de la Dirección de Inteligencia Nacional, pero no lo fue. Tuvo diferentes cargos a través del tiempo. Desde el 27 de julio de 1973 estaba en comisión de servicios y pasó a desempeñarse en dicha calidad al Estado Mayor de la defensa nacional, producto de la muerte del edecán del Presidente Allende e investigar los hechos que ocurrieron posterior a ella. En dicha función estuvo hasta diciembre de 1974, fecha en que pasó en comisión de servicios a la Junta de Gobierno en el edificio Diego Portales.

En 1976, regresó de una comisión de servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil, donde estuvo por decreto de Contraloría General de la República, desde el 17 de marzo de 1975 al 17 de marzo de 1976.

Añadió que no participó en investigaciones respecto de miembros del Partido Comunista o del MAPU. No conoció a Jaime Donato ni a Juan Maino, sin tener relación con detenidos en julio de 1976.

Agregó fue designado por el Director de Inteligencia Nacional, el 19 de noviembre de 1974, a cargo del cuartel Terranova, existiendo solo cuarteles a esa época y no unidades operativas. En ese lugar hizo relación con las personas que estuvieron detenidos y que fueron apareciendo de acuerdo con las informaciones que tuvo, y eso ya lo entregó a un Ministro que tenía a su cargo procesos de derechos humanos.

Del caso Montiglio señaló no tener más antecedentes, que lo declaró todo desde 1973 y hasta estos días, en cada uno de los procesos a los cuales ha estado sometido, ha aportado pruebas que confirman que las unidades estaban al mando de otras personas y el período en que estuvo a cargo por orden del Director, hubo un intervalo de diez días que tuvo que ir a Estados Unidos y después vacaciones en 1975 y en seguida, su salida de la Dirección de Inteligencia.

Pidió aclarar que, en un primer período solo el Director de Inteligencia, Coronel Manuel Contreras, conocía la estructura de lo que sería oficialmente después del año 1974 y que se puso en práctica a partir de 1975. En cuanto al acceso a esa estructura y las decisiones que se tomaban, señaló que solo el 2007 revisó un archivador que tenía el Coronel Contreras en su escritorio y ahí se dio cuenta de las misiones asignadas a cada una de las partes de la estructura que formaba la DINA, lo que también ha sido entregado como prueba en otros procesos.

Preguntado sobre quien era el segundo al mando de dicha institución, este señaló que hay un plan de acción de inteligencia en el cual en el párrafo 5 habla de que quien coordinaba las acciones que estaban contenidas en ese plan, que era a fines de 1973 y 1974 un Coronel de la Fuerza Aérea, Mario Jahn Barrera. En 1974, el segundo era Jahn y en 1976 era Rolando García Le-Blanc, Oficial de la Armada, Capitán de Navío. En febrero, este le entregó el puesto al Capitán de Navío Germán Guesalaga, quien estuvo solamente un mes, y le entregó al Coronel de Ejército Jerónimo Pantoja Henríquez. Por su grado, nunca le correspondió siquiera reemplazar al Director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Con dicho testimonio, no existiendo cuestiones pendientes, se puso término a la diligencia.



El 28 de febrero de 2023, los abogados Francisco Bustos Bustos y Magdalena Garcés Fuentes, actuando en conjunto con Karinna Fernández Neira, en las calidades antes reseñadas, efectuaron una presentación con diversas consideraciones a fin de acoger la petición de extradición pasiva de autos, lo que se tuvo presente por resolución de 1 de marzo del mismo año.

A continuación, el 2 de marzo, la abogada Katerina Gnecco Sandoval formuló observaciones a la mencionada presentación, el que por resolución del mismo día fue devuelto a la misma, a fin de que suprimiera los pasajes insultivos del mismo, de conformidad a los artículos 531 y 542 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que esta solicitó el día 6 del mismo mes dicho escrito se tuviera por no presentado.

En la misma oportunidad, el abogado Joaquín Perera Campusano, en representación del Programa de Derechos Humanos, como asimismo Silvio Cuneo y Karinna Fernández, en representación del Estado italiano, solicitaron la prisión preventiva de los requeridos Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuan, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora y en subsidio, su arresto domicilio total. A dicha petición se sumaron los abogados Francisco Bustos Bustos y Magdalena Garcés Fuentes, los días 7 y 8 de marzo del mismo año, respectivamente.

El 16 de marzo de 2023, el abogado Juan Manuel Álvarez, solicitó se tuviera presente una serie de consideraciones en cuanto a no cumplirse en la especie con los requisitos jurídicos para dar lugar a la extradición de su representado.

Por resolución de 17 de marzo de 2023 se tuvo por no presentado el mencionado escrito de Katerina Gnecco Sandoval; en relación a las solicitudes enunciadas, se dio traslado a los abogados defensores; y, se tuvo presente lo expuesto por la defensa de Daniel Aguirre Mora.

El 19 de marzo de 2023, la misma abogada defensora solicitó que se tuviera por rechazada la petición de prisión preventiva y en subsidio de arresto domiciliario total, por haber sido suficiente hasta la fecha la medida cautelar vigente respecto de sus representados -arraigo nacional- para el éxito de la investigación y no existir peligro de fuga respecto de ellos, argumentando además tratarse de personas adultas mayores, resultando aplicable en la especie la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. Por su parte, el día 20 del mismo mes y año, el defensor Luis Núñez Muñoz evacuó el traslado conferido, exponiendo en lo sustancial iguales argumentos, como también Juan Manuel Álvarez, que solicitó que dichas peticiones fueran rechazadas, al no cumplirse en la especie con los requisitos legales para ser acogidas.

Por resolución de 21 de marzo de 2023, se tuvo por evacuados los traslados conferidos, y, resolviendo derechamente las peticiones de 6, 7 y 8 de marzo, se dispuso que, atendido el estado procesal de la causa, se justifica la necesidad de decretar una medida cautelar adicional a la de arraigo nacional vigente en relación a los reclamados Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuan, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora. Sin embargo, dada su avanzada edad, lo pedido por los abogados solicitantes y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la aplicabilidad de medidas personales menos gravosas tratándose de estos, se dispuso la



medida cautelar de arresto domiciliario total, a cumplirse en las direcciones que cada uno de ellos informó en la diligencia de declaración indagatoria.

En la misma fecha y tras el arresto domiciliario decretado, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz solicitó que su representado, Manuel Vásquez Chahuan, pudiera salir de su domicilio a una serie de citas médicas que detalló en su presentación, petición a la que por resolución de 22 de marzo del 2023, se dispuso que previo a proveer, se acompañaren los comprobantes que dieran cuenta de ellas, como también se indicaren los centros de salud en los cuales habrían de prestarse dichas atenciones.

En la misma fecha, la abogada Katerina Gnecco Sandoval solicitó se autorizara a Rafael Ahumada Valderrama para salir a una cita médica agendada en forma previa, indicando los detalles de ella y comprobante de reserva de hora médica.

El 23 de marzo del mismo año, el abogado Jorge Balmaceda Morales solicitó se dispusiera la apertura de la reserva del proceso.

Por resolución del mismo día, se autorizó al requerido Rafael Ahumada Valderrama para que saliera de su domicilio el día 27 de marzo de 2023, a fin de que asistiera a su hora médica. En la misma oportunidad, se denegó lo solicitado por el abogado Jorge Balmaceda Morales, sin embargo, se encomendó a la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos que efectuara las gestiones técnicas para que este pudiera visualizar la causa a través de su Oficina Judicial Virtual.

El mismo día, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz cumplió lo ordenado, acompañando los comprobantes de horas médicas solicitados y el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez pidió que se otorgara autorización para que Daniel Aguirre Mora pudiera salir de su domicilio para los fines médicos urgentes que fueren necesarios.

Por resolución de 24 de marzo de 2023, se accedió a lo pedido por el primero de ellos, autorizándose al requerido Manuel Vásquez Chahuan a salir de su domicilio al tenor de las horas médicas reseñadas. Respecto de la segunda de dichas solicitudes, se dispuso solicitar en su oportunidad lo pedido, acompañando la documentación de respaldo respectiva.

Se hace presente que, a lo largo de la tramitación del proceso, una vez decretada la medida cautelar de arresto domiciliario total, se otorgó una serie de autorizaciones para que los requeridos asistieran a las citas médicas solicitadas, por lo que se determinó oficiar a Carabineros de Chile en cada oportunidad, con miras a que se tomaran las respectivas medidas de vigilancia conducentes, inclusive aquellas que significaren el traslado y custodia del requerido al centro médico.

El 27 de marzo del mismo año, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz pidió se oficiara al Ministro Álvaro Mesa Latorre, solicitándole copia auténtica de las transcripciones de las declaraciones de los testigos Edith Wihad Chahuan Chahuan y Raúl Pedro Goyeneche Cabezón, correspondiente a los autos Rol 113.039, ordenándose su incorporación al expediente en parte de prueba. Adicionalmente, pidió se oficiaría al Servicio Médico Legal, al Instituto de Salud Pública, al Instituto Nacional de Estadísticas y al Estado Mayor del Ejército de Chile, a fin de obtener información de acuerdo a las afirmaciones vertidas por su representado en la audiencia indagatoria.



Con fecha 29 de marzo, se recibió el informe N°519 de la Prefectura de Viña del Mar N°8 de Carabineros de Chile, que informa sobre el cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total del requerido Daniel Aguirre Mora.

El día 30 de marzo, la abogada Katerina Gnecco presentó los siguientes escritos. En primer lugar y en representación del requerido Ahumada Valderrama presentó como medios de prueba un registro médico ambulatorio que certifica que el requerido posee un deterioro cognitivo moderado; una orden médica que indica la realización de una resonancia magnética con el objeto de terminar con precisión el nivel de deterioro cognitivo; por último, acompañó copia de las indicaciones médicas que dan cuenta del tratamiento farmacológico que debe serle suministrado al paciente Rafael Ahumada para el deterioro neurológico.

En segundo lugar, en representación del requerido Moreno Vásquez, solicitó dejar sin efecto la cautelar de arresto domiciliario total, ya que por sentencia de 29 de marzo en la causa Rol N° 154811-2020 se dispuso su ingreso inmediato al Recinto de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco para el cumplimiento efectivo de la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

En tercer lugar, en representación de los requeridos Ahumada Valderrama y Moreno Vásquez, solicitó traer a la vista la causa Rol N°126.461 MG, conocido como el “Episodio “La Moneda” y específicamente a lo concerniente al secuestro calificado de Montiglio Murúa.

Por último, la citada abogada presentó el escrito, en representación del requerido Ahumada Valderrama, mediante el cual acompañó un informe neuropsicológico y receta médica del requerido que prescribe el medicamento memantina.

Con fecha 31 de marzo de 2023, en representación del señor Vásquez, su abogado señor Luis Núñez presentó un escrito solicitando tener presente los diversos argumentos esgrimidos para rechazar la extradición. Asimismo solicitó tener presente certificado de antecedentes para fines especiales del requerido, donde consta que éste está sometido a proceso en Chile, por dos causas distintas a los hechos por el que se requiere; resolución de 4 de septiembre de 2014 dictada por el ministro Madrid Croharé que revocó el auto de procesamiento de Manuel Vásquez Chahuan, de fecha 30 de junio de 2014, que lo sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado de Eltit Spielmann; y, hoja de vida en la cual consta el traslado desde el Regimiento de Montaña N° 15 Calama, hasta el Regimiento Tucapel de Temuco, con fecha 3 de marzo de 1973 y la enfermedad sufrida en la misión militar encomendada, la duración de la misma y la imposibilidad de estar físicamente en el lugar donde se habría consumado la detención de Eltit Spielmann, que coincide con las fechas de detención de Omar Roberto Venturelli Leonelli.

En la fecha precedentemente señalada, los abogados Fernández y Cuneo, en representación del Estado italiano, ofrecieron prueba testimonial acompañando lista de testigos compuesta por Emanuela Fronza y Andrea Speranzoni. Respecto a la prueba documental, además de reiterar la documentación del Estado requirente en la formalización, solicitaron tener por acompañado el documento de la Fiscalía General de la República en el Tribunal de Apelaciones de Roma que remitió en detalle los



antecedentes concretos de los mecanismos de resguardo de garantías judiciales y de debido proceso al que tuvieron acceso cada uno de los requeridos durante el proceso penal realizado ante las autoridades judiciales italianas y que precedió al presente requerimiento de extradición.

El 31 de marzo de 2023, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la abogada Garcés, presentó escrito solicitando acceder a la citación a declarar a los testigos Francesca Lessa y Claudia Cárdenas Aravena.

En la misma fecha, el abogado Bustos, en representación Tamara Montiglio Belvederessi, solicitó acceder a la citación de la testigo Silvia Bagni.

El abogado Perera, en representación del Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 31 de marzo, solicitó acceder a la toma de declaración de los testigos María Alicia Mejía Fritsch y Emanuele Corn.

Por resolución de 12 de abril de 2023, se proveyeron, según orden de presentación, los escritos anteriormente individualizados, resolviéndose de la siguiente manera. Al escrito del abogado Luis Núñez Muñoz en representación del requerido Vásquez Chahuan, se solicitó individualizar de manera completa la causa dirigida por el Sr. Ministro Álvaro Mesa Latorre, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Por otro lado, no se dio lugar por improcedente a lo solicitado en el escrito del mismo abogado solicitando diligencias dentro del probatorio. Asimismo, se tuvo a sus antecedentes el contenido del oficio N° 519 de la 1° Comisaría de Viña del Mar, de Carabineros de Chile. Además, se tuvo por acompañados los documentos individualizados en el escrito de la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación del señor Ahumada. Respecto al escrito de la mencionada abogada referente al requerido Moreno Vásquez, se resolvió oficiar al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, de Gendarmería de Chile, a fin de informar si el requerido Orlando Moreno Vásquez se encuentra privado de libertad en sus dependencias, y, en caso de ser afirmativo lo anterior, el tiempo faltante para cumplir la condena señalada. Al escrito de la abogada ya individualizada se ordenó traer a la vista la causa Rol N° 126.461 MG episodio “La Moneda”, Rol N° 5005-2022 de esta Excelentísima Corte, e incorporar al expediente digital la declaración del requerido Rafael Ahumada Valderrama, dejándose la debida constancia de si dicho reclamado fue procesado o acusado en esos autos. Respecto al último escrito de la abogada Gnecco se tuvo por acompañados los documentos ofrecidos en parte de prueba en representación del requerido Ahumada Valderrama. En relación al escrito del abogado Núñez Muñoz, por el requerido Vásquez Chahuan, sin perjuicio del estado procesal de la causa, se tuvo presente lo solicitado en lo principal, y, respecto a la solicitud contenida en el otrosí, se resolvió que, previo a tener por acompañados los antecedentes ofrecidos, se acompañe copia de la resolución indicada en el punto 2. Al escrito de los abogados Karinna Fernández Neira y Silvio Cuneo Nash en representación del Estado italiano, se resolvió que, previo a tener por ofrecida la prueba testimonial, se acompañara dentro de tercer día, bajo apercibimiento de tenerse por no ofrecida la misma: 1) nombre completo,



profesión, domicilio, correo electrónico y pasaporte o documento de identificación de los testigos; 2) los aspectos específicos al presente proceso sobre los que se van a referir, en virtud de la calidad en que fueron ofrecidos; 3) el listado de preguntas a efectuarse a los testigos señalados, atendido lo dispuesto en el artículo 466 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Penal; y, 4) nombre completo, profesión, domicilio y pasaporte o documento de identificación del traductor, junto con los antecedentes que acrediten su idoneidad, teniéndose presente que será de cargo de la parte oferente su participación en la audiencia respectiva. Al escrito de la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), se resolvió que, previo a tener por ofrecida la prueba testimonial, se acompañara dentro de tercer día, bajo apercibimiento de tenerse por no ofrecida la misma, 1) nombre completo, profesión, domicilio, correo electrónico y pasaporte o documento de identificación de los testigos; 2) los aspectos específicos al presente proceso sobre los que se van a referir, en virtud de la calidad en que fueron ofrecidas, y; 3) el listado de preguntas a efectuarse a los testigos señalados, atendido lo dispuesto en el artículo 466 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Penal. En lo que respecta a la presentación del abogado Francisco Bustos, en favor de Tamara Montiglio Belvederessi, se resolvió que, previo a tener por ofrecida la prueba testimonial, se acompañara dentro de tercer día, bajo apercibimiento de tenerse por no ofrecida la misma, 1) nombre completo, profesión, domicilio, correo electrónico y pasaporte o documento de identificación de la testigo; 2) los aspectos específicos al presente proceso sobre los que se va a referir, en virtud de la calidad en que fue ofrecida, y; 3) el listado de preguntas a efectuarse a los testigos señalados atendido lo dispuesto en el artículo 466 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Penal. Al escrito del abogado Joaquín Perera Campusano, en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se resolvió que, previo a tener por ofrecida la prueba testimonial, se acompañara dentro de tercer día, bajo apercibimiento de tenerse por no ofrecida la misma: 1) domicilio y pasaporte o documento de identificación de los testigos; 2) los aspectos específicos al presente proceso sobre los que se va a referir, en virtud de la calidad en que fue ofrecido, y; 3) aclare si las preguntas referidas en su escrito corresponden al listado de preguntas a efectuarse a los testigos señalados, atendido lo dispuesto en el artículo 466 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Penal.

El mismo día 12 de abril de 2023, se ofició al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco a fin de informar al Tribunal si el requerido Moreno Vásquez se encuentra privado de libertad en sus dependencias, y, siendo afirmativo lo anterior, se indique el tiempo faltante para que se dé cumplimiento a la condena de 5 años y 1 día impuesta en la causa rol N° 2.182-1998 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N° 154.811-2020 de la Corte Suprema, por el secuestro calificado de Jaime Emilio Eltit Spielman.

Con misma fecha, y sin perjuicio de lo indicado en la resolución precedente respecto a la prueba testimonial ofrecida por las partes, atendido el número de la misma, las gestiones a efectuarse para su toma de declaración y los elementos de prueba



aportados, además de los solicitados, se determinó aumentar el plazo de investigación, fijándose en definitiva el cierre de la investigación para el 1 de junio de 2023.

El 13 de abril de 2023, el abogado Luis Hernán Núñez, en representación del requerido Vásquez Chahuan, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de 12 de abril de 2023 que resolvió no dar lugar a las diligencias probatorias solicitadas por escrito de 27 de marzo de 2023. Asimismo, solicitó tener por cumplido lo ordenado por resolución de 12 de abril de 2023, en orden a individualizar en forma completa la causa dirigida por el Sr. Ministro Álvaro Mesa Latorre, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

Con misma fecha, el abogado Jorge Balmaceda en representación del requerido Espinoza Bravo, presentó un escrito solicitando tener presente una serie de consideraciones en orden a rechazar la extradición de su representado a la República Italiana, fundado principalmente en que se encuentra actualmente siendo juzgado por los mismos hechos, delitos, y por la misma víctima en causa penal diversa seguida en Chile, Rol N°126.461 MG, conocido como el “Episodio “La Moneda”.

El 14 de abril de 2023, el tribunal resolvió no dar lugar al recurso de reposición interpuesto por el abogado Núñez Muñoz, atendido a que la documentación solicitada dice relación con información general sobre la situación de fiebre tifoidea el año 1973 en Chile y no con la enfermedad específica que habría afectado a su representado, lo que la hace improcedente. Respecto al segundo escrito presentado por el mismo abogado, se tuvo por cumplido lo ordenado, por lo que se resolvió solicitar al Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sr. Álvaro Mesa Latorre, copia de las declaraciones de los testigos Edith Wihad Chahuan Chahuan, y Raúl Pedro Goyeneche Cabezón, que versen sobre el requerido Manuel Abraham Vásquez Chahuan en la causa Rol N° 113.089, seguida por el delito de homicidio calificado, denominada “*Episodio asalto al polvorín*”. Por último, la resolución tuvo presente el escrito presentado por el abogado Jorge Balmaceda en representación del requerido Espinoza Bravo.

Asimismo, el 14 de abril de 2023, se informó por el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, que el interno Orlando Moreno Vásquez se encuentra recluso en el establecimiento penitenciario desde el 28 de marzo de 2023 cumpliendo una condena de 5 años y 1 día por el delito de secuestro calificado, impuesta en Causa Rol N° 2182-98 Episodio Jaime Eltit Spielmann, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Señaló además que el tiempo faltante para el cumplimiento de condena sería de 4 años, 10 meses y 21 días, registrando fecha de cumplimiento de condena el 5 de marzo de 2028.

Con fecha 14 de abril de 2023, se tuvo presente el oficio remitido por el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, por lo que se resolvió dejar sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta respecto del requerido Orlando Moreno Vásquez.

Con misma fecha, los abogados Karinna Fernández y Silvio Cuneo, en representación del Estado italiano, presentaron un escrito para efectos de cumplir con lo ordenado por resolución de 12 de abril de 2023, informando los datos de identificación de los testigos, los aspectos del proceso sobre el que se referirán, el listado de preguntas a





realizar, y, la individualización del traductor, acompañando además antecedentes para acreditar su idoneidad en el otrosí del escrito.

De igual manera y con misma fecha, el abogado representante del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Joaquín Perera Campusano, presentó un escrito para efectos de cumplir con lo ordenado por resolución de 12 de abril de 2023, informando de los datos de identificación de los testigos ofrecidos oportunamente, señalando también sobre qué aspectos del proceso recaerán sus testimonios, y, por último, acompañó el listado de preguntas para cada testigo.

Asimismo, el 15 de abril de 2023, la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), presentó un escrito para efectos de cumplir con lo ordenado por resolución de 12 de abril de 2023, informando los datos de identificación de los testigos ofrecidos, señalando además el objeto de la declaración, y, por último, acompañó la minuta de preguntas.

Con misma fecha, los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos, en representación de Tamara Montiglio Belvederessi, presentaron un escrito para efectos de cumplir con lo ordenado por resolución de 12 de abril de 2023, informando los datos de individualización de la testigo ofrecida, el objeto de la declaración de la testigo, acompañó el listado de preguntas a realizar, y, por último en el otrosí, solicitó tener por acompañado el currículum vitae de la testigo ofrecida.

Con fecha 17 de abril de 2023, en lo relativo al escrito de la abogada Magdalena Garcés, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), se determinó que, previo a tener por ofrecida la prueba testimonial, aclare en el plazo de 24 horas si sus testigos necesitan de traductor, y de ser afirmativo, su individualización y antecedentes para acreditar su idoneidad.

Con misma fecha, Luis Núñez Muñoz, abogado en representación del requerido Vásquez Chahuan, solicitó que se tenga presente como medida para mejor resolver o conforme el artículo 455, las diligencias relacionadas a la fiebre tifoidea el año 1973 en Chile.

El mismo día, la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), presentó un escrito cumpliendo con lo ordenado por resolución de 17 de abril de 2023, señalando que los testigos ofrecidos no necesitan de traductor.

Con fecha 18 de abril de 2023, se proveyeron los escritos anteriormente individualizados, resolviéndose la presentación de los abogados Karinna Fernández y Silvio Cuneo, a lo principal, por cumplido lo ordenado, y se tuvo por acompañados los documentos adjuntos en el otrosí. De la misma forma, con la presentación del abogado Joaquín Perera Campusano, en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se tuvo por cumplido lo ordenado. Asimismo, a través de la presentación de los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos, en representación de Tamara Montiglio Belvederessi, se tuvo por cumplido lo ordenado y por acompañado el currículum vitae de la testigo ofrecida. Respecto a las presentaciones de fechas 15 y 17 de abril de la abogada Magdalena Garcés, se tuvo por cumplido lo



ordenado. Además, se resolvió poner en conocimiento de las partes las minutas de testigos acompañadas, para los efectos y en el plazo del artículo 466 del Código de Procedimiento Penal. Por último, respecto a la presentación del abogado Luis Núñez, se determinó que se esté a lo resuelto anteriormente.

Con fecha 19 de abril de 2023, la abogada Katerina Gnecco, en representación de los requeridos Ahumada Valderrama y Moreno Vásquez, presentó un escrito evacuando el traslado conferido respecto a las minutas de testigos presentadas, solicitando el rechazo de la prueba testimonial ofrecida por la contraria, por no ajustarse a la normativa chilena relativa a la rendición de prueba en juicio, fundado en que los testigos no depondrán sobre hechos, sino que más bien sobre materias de derecho.

Con misma fecha se tuvo por evacuado el traslado de la abogada Katerina Gnecco, resolviendo a su respecto no dar lugar a lo solicitado, fundado en que el mismo Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, dispone que, para determinar la procedencia de una extradición, se debe cumplir con ciertos requisitos que dicen relación con el proceso penal desarrollado en el Estado requirente, razón por la cual resulta de relevancia la prueba ofrecida.

Luego, por resolución de misma fecha, se ordenó certificar por medio del Sr. Secretario de la Corte, si se verificó el transcurso del plazo otorgado por resolución de 18 de abril de 2023, lo cual se cumplió mediante certificación de 19 de abril de 2023.

Con misma fecha, se tuvo presente el certificado emanado del Sr. Secretario, por lo que se tuvo por ofrecida la prueba testimonial y documental, resolviéndose autos para fijar la toma de declaración de los testigos ofrecidos.

Con fecha 24 de abril de 2023, se remitió a este Tribunal el oficio N° 541-2023 del Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, mediante el cual se acompañó copia de las declaraciones de los testigos Edith Wihad Chahuan Chahuan y Raúl Pedro Goyeneche Cabezón, prestadas durante el término probatorio de la causa Rol N° 113.089 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco. Con misma fecha se tuvo presente dicho oficio.

Con fecha 27 de abril de 2023, se fijó audiencia para llevar a cabo las declaraciones testimoniales, el 10 de mayo de 2023 a las 13:00 horas, para que depongan los testigos ofrecidos por los abogados Nelson Caucoto Pereira y Karinna Fernández Neira, y, el 17 de mayo de 2023 a las 13:00 horas, para que depongan los testigos ofrecidos por los abogados Joaquín Perera Campusano y Magdalena Garcés Fuentes. Además, se hizo presente que dichas audiencias serían llevadas a cabo por medio de videoconferencia.

Con fecha 4 de mayo de 2023, la 18° Comisaría de Carabineros de Ñuñoa remitió al Tribunal el oficio N° 730, mediante el cual se informó el cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total del requerido Rafael Ahumada Valderrama, registrando en total 4 fiscalizaciones e diversas fechas del mes de marzo y abril, no encontrando moradores en 3 oportunidades, y no encontrando la numeración en una ocasión.



Con fecha 5 de mayo de 2023, el tribunal resolvió dar traslado a la defensa del requerido Rafael Ahumada Valderrama respecto al informe de incumplimientos registrados por la 18° Comisaría de Ñuñoa.

Con fecha 5 de mayo de 2023, la abogada representante del Estado italiano, Karinna Fernández Neira, presentó un escrito solicitando que la testigo Andrea Speranzoni pudiera prestar su testimonio en la audiencia de 17 de mayo de 2023, debido a un entorpecimiento judicial provocado por una audiencia ante la Corte de Assise de Apelación de Bolonia fijada para el 10 de mayo de 2023. Se acompañó en el otrosí del escrito el currículum vitae de la testigo ofrecida, y además, copia de la resolución de la Corte de Assise de Apelación de Bolonia que da cuenta de la audiencia fijada para el 10 de mayo a la que debe concurrir Andrea Speranzoni.

Con fecha 8 de mayo de 2023, la 17ª Comisaría de Carabineros Las Condes remitió al Tribunal el oficio N° 1103, mediante el cual se informó del cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total respecto del requerido Manuel Vásquez Chahuan.

Con misma fecha, la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación del requerido Rafael Ahumada Valderrama, evacuó el traslado conferido por resolución de 5 de mayo de 2023 respecto al informe de incumplimientos de la medida cautelar de arresto domiciliario total remitido por la 18° Comisaría de Ñuñoa, señalando a su respecto que los incumplimientos informados obedecerían a procedimientos de fiscalización negligente, toda vez que el requerido se encuentra incapacitado para desarrollar sus actividades cotidianas de forma independiente, y requiere la constante asistencia de terceros, por lo que le resultaría dificultoso salir de su domicilio e incumplir la medida. De esta forma, solicitó que se mantenga sin modificaciones la medida cautelar fijada.

El 9 de mayo de 2023, el abogado del Estado italiano, Silvio Cuneo Nash, solicitó que se dispusiera la citación de la testigo Emanuela Fronza originariamente fijada para el día 10 de mayo de 2023, ahora para el día 17 de mayo, fundado en que ésta habría sufrido la fractura de una pierna, por lo que no se encontraría en condiciones de comparecer a la audiencia aludida.

Con fecha 10 de mayo de 2023, Francisco Bustos Bustos, abogado de Tamara Montiglio Belvederessi, presentó un escrito mediante el cual delegó poder a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, Andrea Gattini Zenteno y a la habilitada en derecho Ayza Moraga Carrasco, solicitando su incorporación en el sistema de tramitación digital de Oficina Judicial Virtual. Posteriormente, el mismo abogado presentó un nuevo escrito complementando el anterior, en el sentido de acompañar el certificado de egreso de la habilitada en derecho. En el otrosí hizo presente que tiene pendiente para el mismo día miércoles 10 de mayo un alegato en la Sala Penal de la Excm. Corte Suprema por causa diversa, razón por la cual solicita consideración si eventualmente tardare en incorporarse a la audiencia de marras.

Con misma fecha 10 de mayo, el tribunal resolvió respecto de la presentación de la abogada Karinna Fernández Neira, disponer la citación del testigo Andrea Speranzoni para la audiencia del 17 de mayo de 2023. Por otro lado, se tuvo a sus antecedentes el



oficio remitido por la 17° Comisaría de las Condes de Carabineros de Chile. Además, se tuvo presente y por evacuado el traslado conferido a la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación del requerido Rafael Ahumada Valderrama. Luego, respecto la presentación del abogado Silvio Cuneo Nash, se dispuso la citación de la testigo Emanuela Fronza a la audiencia del 17 de mayo de 2023. Por último, a los escritos del abogado Francisco Bustos Bustos, se tuvo presente la delegación de poder otorgadas, por acompañado el documento certificado de egreso, y se tuvo presente el alegato pendiente para el mismo día en la Sala Penal de este Excmo. Tribunal.

El 10 de mayo de 2023, se resolvió que atendida la diferencia horaria y la cantidad de testigos citados para la audiencia del 17 de mayo de 2023, se comuniqué a los intervinientes que esta tendría una duración máxima de 3 horas, por lo que, en caso de que alguno de ellos no alcance a testificar dentro del horario indicado, se continuaría con la toma de declaraciones en una audiencia única fijada para el viernes 19 de mayo de 2023, desde las 14:00 horas, mediante videoconferencia.

Con fecha 10 de mayo de 2023, se llevó a cabo la primera audiencia para toma de declaración de la testigo ofrecida por el abogado Nelson Caucoto Pereira. La audiencia fue dirigida por la Ministra que suscribe, y contó con la comparecencia de los abogados defensores Juan Manuel Álvarez Álvarez en representación del requerido Daniel Aguirre Mora, la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación del requerido Rafael Ahumada Valderrama, y el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz en representación de Manuel Vásquez Chahuan. Por otro lado, en representación del Estado italiano, compareció el abogado Silvio Cuneo Nash, Francisco Bustos Bustos en representación de Tamara Montiglio Belvederessi, y, Joaquín Perera Campusano y Marcelo Orellana Caro en representación del Programa de Derechos Humanos. Se indicó a los comparecientes el propósito de la audiencia y se dio inicio tomando juramento a la testigo Silvia Bagni, Doctora en Derecho, Profesora Asociada en Derecho Público Comparado, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bologna. Su testimonio se centró en el contenido del derecho a la defensa penal en la República Italiana, el debido proceso y sus principios fundamentales en materia procesal penal en la República Italiana, la regulación del derecho a la defensa en materia penal en el ordenamiento comunitario y/o en instrumentos del sistema europeo de protección de los derechos humanos; y las principales garantías que existen en Italia para hacer efectivo ese derecho. Concluida la declaración de la testigo, se dio la palabra a los abogados comparecientes, quienes no tuvieron nada que agregar, por lo que se puso término a la audiencia.

Con fecha 11 de mayo de 2023, el abogado Luis Núñez Muñoz, defensor de Manuel Vásquez Muñoz, solicitó la modificación de la medida cautelar fijada, de arresto domiciliario total a arresto domiciliario total y nocturno entre las 22:00 y las 06:30 del día siguiente, fundado en la extensión del procedimiento y en el estado crítico de salud del requerido.

Por resolución de 12 de mayo de 2023, se resolvió no dar lugar a la modificación de la medida cautelar solicitada por el abogado Luis Núñez Muñoz en representación del requerido Manuel Vásquez Muñoz, fundado en la proximidad del cierre de la



investigación, que no variaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de decretar la cautelar de arresto domiciliario total, y, que, a pesar de su vigencia, ha sido una constante del Tribunal el no afectar el derecho a la salud del requerido, lo que se tradujo en múltiples autorizaciones para que asista a sus citas médicas.

Con fecha 17 de mayo de 2023, se dio inicio a la audiencia de toma de declaración de los testigos ofrecidos por los abogados Karinna Fernández, Joaquín Perera y Magdalena Garcés, la cual fue dirigida por la Ministra Instructora que suscribe y contó con la comparecencia de los abogados defensores Juan Manuel Álvarez Álvarez por Daniel Aguirre Mora, la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación los requeridos Orlando Moreno Vásquez y Rafael Ahumada Valderrama, y el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz en representación del requerido Manuel Vásquez Chahuan. Se contó además con la comparecencia de la abogada Karinna Fernández en representación del Estado Requirente, Francisco Bustos Bustos por Tamara Montiglio Belvederessi, Magdalena Garcés por María Paz Venturelli y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD), y Joaquín Perera Campusano y Marcelo Orellana Caro en representación del Programa de Derechos Humanos. Se indicó a los comparecientes el propósito de la audiencia y se dio inicio tomando juramento al traductor Pietro Sferazza Taibi.

Comenzó la audiencia con el testimonio de Andrea Speranzoni, italiano, defensor de Derechos Humanos y querellante en el proceso criminal que dio origen a los requerimientos de extradición de autos, quien prestó testimonio en su lengua materna, el italiano, siendo asistido por el traductor ofrecido por el Estado Requirente. Señaló que en el proceso Cóndor, él defendió como parte civil querellante a Alejandro Patricio Montiglio Belvederessi, por la imputación L1, que se refiere a los hechos constitutivos de delito entre los días 11 y 13 de septiembre de 1973, que se iniciaron con el secuestro del ciudadano italiano Juan Montiglio en el Palacio de La Moneda, las torturas que esa misma persona sufrió dentro del regimiento Tacna, y su homicidio ejecutado en la dependencia militar de Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Señaló que los imputados en dicho episodio correspondían a Arellano Stark Sergio Víctor, Ramírez Pineda Luis Joaquín y el requerido de autos Rafael Francisco Ahumada Valderrama. Señaló que, además fue parte querellante civil por Margarita Maino Canales, hermana de Juan Bosco Maino Canales, víctima de los delitos de secuestro, homicidio y tortura el acaecidos el 26 de mayo de 1976. El testigo agregó que también actuó como querellante civil en el episodio de Calle Conferencia en representación del Partido Comunista de Chile, por el secuestro y homicidio de Jaime Donato Avendaño acaecido el 5 de mayo de 1976, siendo imputados Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito, y el requerido de autos, Pedro Octavio Espinoza Bravo. El testigo detalló la duración que tuvo el proceso en cada instancia y luego procedió a referirse a los principios generales de orden penal, procesal, constitucional y ahondó en las garantías procesales para los imputados juzgados en ausencia. Continuó su declaración refiriéndose a ejemplos concretos de cómo se salvaguardó en el proceso seguido en Italia el principio contradictorio y el derecho a la defensa de los requeridos, haciendo mención a notificaciones y a excepciones opuestas por los defensores designados de oficio por el



Estado italiano, y al contraexamen de testigos que declararon en las audiencias. Luego, fue consultado por la Ministra Instructora sobre el rol de los defensores de los requeridos en el proceso de extradición, indicando las identidades de cada uno, su participación, financiamiento y selección. Así, el testigo procedió a referirse latamente a la figura de los defensores de oficio designados por el Estado italiano, y se refirió a la normativa orgánica que los rige. Concluidas las preguntas del tribunal, el abogado Juan Álvarez Álvarez en representación de Daniel Aguirre Mora, consultó por intermedio del Tribunal, sobre las alegaciones generales del abogado defensor designado de oficio para el señor Aguirre Mora. El testigo replicó que el abogado Marco Bastoni contra examinó los documentos y a los consejeros técnicos presentados por el Ministerio Público de Italia, señalando que el resultado absolutorio en primera instancia para Aguirre Mora, resulta un corolario de la eficacia en la actividad de la defensa, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones y la Suprema Corte.

Finalizado el testimonio del testigo Andrea Speranzoni, la abogada Karinna Fernández Neira renunció a la testimonial de la doctora Emanuela Fronza tras haber tenido conocimiento que persiste su situación de salud, lo que le impidió la concurrencia el día de la audiencia. Se continuó con las declaraciones juramentadas de la testigo Francesca Lessa, ofrecida por la Abogada Magdalena Garcés, docente e investigadora de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Comenzó su testimonio brindando un resumen del contexto histórico y político en que se desarrolló la Operación Cóndor, y realizó un breve relato sobre cómo ocurrieron los hechos perpetrados sobre las víctimas. Consultada por la Ministra Instructora, relató que desde finales de los años 90, la Fiscalía de Roma se encontraba investigando homicidios de diferentes víctimas italianas que habían sido muertas en el marco del plan Cóndor en dictaduras de América del Sur, las cuales fueron unificadas en un solo proceso.

Continuó la audiencia con el testimonio de la segunda testigo ofrecida por la abogada Magdalena Garcés, la docente Claudia Marcela Cárdenas, profesora asociada y directora del departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Tomado juramento, pasó a exponer sobre cómo desde el 2006, la Excelentísima Corte Suprema ha aplicado conjuntamente el derecho internacional y el derecho interno a los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar; las consecuencias jurídicas de esta doble subsunción, trayendo a colación el principio *aut dedere aut iudicare* (o entregar o juzgar); y las fuentes del derecho internacional que ha aplicado la Corte Suprema para juzgar crímenes ocurridos durante la dictadura que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos. Consultados los comparecientes sobre preguntas pendientes, se puso término a la audiencia.

Con fecha 19 de mayo de 2023, se continuó con la etapa final de las audiencias de declaración de testigos, la que fue dirigida por la Ministra Instructora que suscribe, y contó con la comparecencia de los abogados defensores Juan Manuel Álvarez Álvarez por el requerido Daniel Aguirre Mora; la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación los requeridos Orlando Moreno Vásquez y Rafael Ahumada Valderrama, y el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz en representación de Manuel Vásquez Chahuan. Además compareció por el Estado requirente el abogado Silvio Cuneo Nash;



los abogados Joaquín Perera Campusano y Marcelo Orellana Caro en representación del Programa de Derechos Humanos; la abogada Magdalena Garcés por María Paz Venturelli y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Aysa Moraga Carrasco por Tamara Montiglio Belvederessi. Se comunicó a los presentes que el propósito de la audiencia radicó en recibir la declaración de los testigos ofrecidos por el abogado Joaquín Perera Campusano.

Se comenzó tomando juramento a la testigo María Alicia Mejía Fritsch, abogada de nacionalidad italiana, con especialidad en derecho penal procesal y sustantivo, quien intervino en el juicio seguido ante tribunales italianos en representación de los familiares de las víctimas. Consultada por la Ministra Instructora, se refirió a su participación en el proceso judicial ventilado en la República Italiana, en el que actuó como parte civil en representación de la familia de Donato Avendaño; a la forma en que se desarrolló el juicio, detallando cada una de sus fases y medios de impugnación; brindó testimonio sobre las manifestaciones del principio de bilateralidad de la audiencia, derecho a la defensa y la forma en que se produjo la prueba en el proceso italiano; se refirió a las principales actuaciones que realizaron los abogados defensores de oficio de los requeridos. El abogado Luis Núñez Muñoz solicitó al Tribunal que la testigo pudiera clarificar sobre la figura de los jueces populares, a lo que la testigo clarificó que se trataba de jurados, ciudadanos inscritos en una lista de la Corte Superior, que son convocados por sorteo para concurrir a las decisiones de la Corte. Consultada por el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez a través del tribunal, afirmó que conforme el ordenamiento penal italiano cada persona que participa en una fracción o parte del delito responde como concurrente en él y que la pena se determina de acuerdo a su nivel de participación en el mismo. A instancia de la abogada Katerina Gnecco, se le consultó a la testigo si los abogados defensores de oficio pudieron tomar contacto directo con los defendidos, a lo que respondió que no tenía certeza al respecto.

Luego se tomó juramento al siguiente testigo, Emanuele Corn, italiano, Doctor en Derecho y académico de Derecho Penal de la Universidad de Trento, quien brindó testimonio sobre los principios de Derecho Penal y Procesal Penal que orientan el desarrollo de los juicios penales en Italia, con especial énfasis la cautela de los derechos fundamentales de los intervinientes y las reglas de valoración de la prueba; se refirió al juzgamiento en ausencia de los imputados como fórmula para evitar la impunidad por delitos cometidos; y a la independencia del poder judicial del gobierno italiano como principio. Consultadas las partes, y no existiendo pendientes, se dio término a la audiencia.

Con fecha 23 de mayo de 2023, el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial Juan Álvarez Álvarez, presentó un escrito solicitando se tenga presente un documento acompañado en el otrosí de la presentación, escrito personalmente por su representado, Daniel Aguirre Mora, en el cual detalló la forma en la que habría desaparecido el señor Omar Venturelli, y sindicó al responsable de ello y su posterior muerte.

Por resolución de 24 de mayo de 2023 se tuvo presente el escrito del abogado, y por acompañado el texto del requerido Daniel Aguirre Mora.



Con fecha 29 de mayo de 2023, la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), solicitó tener por acompañada una minuta hecha llegar por la profesora Dra. Francesca Lessa, en la que expuso por escrito sus respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia testimonial de 17 de mayo de 2023. Solicitó además en el otrosí tener presente que la testigo envió una copia de su libro “Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur”, con la finalidad de ser entregado a la Ministra Instructora.

Con fecha 31 de mayo de 2023, se dejó constancia de la revisión de los 35 tomos de tramitación que conforman la causa Rol N° 126.461 MG, episodio “La Moneda”, Rol N° 5005-2022 de esta Excelentísima Corte, traída a la vista en estos autos, constatando que el requerido Rafael Ahumada Valderrama no fue procesado por dicha causa. Por otro lado, se acompañó una copia de las declaraciones vertidas por el requerido de autos en dicho proceso. Así, a foja 1252 rola declaración prestada el 21 de enero de 2002, oportunidad en la que señaló que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como Capitán Comandante de la Primera Batería del Regimiento de Artillería N°1 Tacna, siendo informado por el Comandante del Regimiento que las Fuerzas Armadas habían decidido pronunciarse en contra del régimen político establecido, por lo que se le ordenó dirigirse con su Batería hacia avenida Bulnes frente a La Moneda, siendo su misión disparar hacia la puerta principal del Palacio Presidencial. Luego de ello, señaló que se dirigió a la Fábrica Yarur Summar, por una denuncia sobre la existencia de armamento. Continuó su declaración afirmando que mientras se encontraba frente a la Moneda no se percató si tomaron detenidos, debido a que se encontraba a una distancia de doscientos metros. Señaló que al volver al Regimiento a eso de las 02:00 AM se enteró que habían detenidos que correspondían a personal de La Moneda, específicamente de la Guardia del Presidente Salvador Allende (GAP). Continuó señalando que el día 12 de septiembre se le ordenó custodiar a los detenidos que se encontraban en los bóxer de los vehículos, que eran alrededor de 25 hombres, lo que realizó hasta el día 13 de septiembre. Señaló que luego entregó su turno y se le destinó junto a su Batería a las actividades de control de empresas, y al volver al Regimiento a eso de las 16:00 horas los detenidos ya no estaban, por lo que creía que se los llevaron al Estadio Nacional. Además afirmó no recordar la identidad del Capitán de quien recibió el turno de cuidado de los detenidos, ni tampoco a quién se lo entregó. Señaló que mientras estuvo a cargo de los detenidos no se les maltrató ni torturó. Señaló no conocer la identidad de ninguno de los detenidos, agregando que mientras los custodió no fueron sacados del lugar para ser interrogados. A foja 3882, rola declaración prestada por Rafael Ahumada Valderrama el 4 de febrero de 2003, quien luego de ser exhortado a decir la verdad señaló que la única vez que tuvo contacto con las personas detenidas en el Palacio de La Moneda fue cuando le correspondió custodiarlos como oficial de ronda. Afirmó recibir el turno durante la mañana del 12 de septiembre, para luego entregarlo al mediodía del día siguiente. Señaló que el 14 de septiembre, se percató de la ausencia de los detenidos de La Moneda, y que se le informó que habían sido posiblemente llevados al Estadio Nacional. Afirmó que con posterioridad, en 1974,





se enteró por comentarios de pasillo que los prisioneros de La Moneda habían sido llevados al predio de Peldehue y que fueron fusilados. A foja 6989, rola declaración prestada por Rafael Ahumada Valderrama el 5 de julio de 2006, quien legalmente juramentado, expuso en lo pertinente que a raíz del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, personas que estaban al interior del Palacio de La Moneda fueron detenidas y trasladadas hasta las dependencias del regimiento Tacna, las que fueron trasladadas al patio N° 2. Señaló desconocer si a los detenidos se les interrogó, no correspondiéndole a él la labor. Señaló que el comandante del Regimiento era Joaquín Ramírez Pineda, pero que él no pudo haber tomado la decisión de trasladar a los detenidos desde el regimiento, toda vez que esa decisión pasaba por mandos externos. Señaló que en un careo realizado el año 2005 se enteró que el Brigadier Pedro Espinoza llegó con una orden emanada de una autoridad externa que disponía que los detenidos fueran trasladados a Peldehue. Señaló que dicha orden debió haber emanado de la autoridad superior al Comandante del Regimiento, que habría correspondido al Comandante de la Segunda División del Ejército, pero que no recuerda quien era el General que desempeñaba dicho cargo. Agregó que entre los detenidos reconoció a Jorge Tapia Martínez, quien se encontraba en el grupo de los trasladados a Peldehue, y que era su amigo de la infancia. También supo que estaba ahí un sujeto de apellido Paredes, que fue director de Investigaciones. Cerró señalando que por el Regimiento Tacna habrían pasado un total de dos mil detenidos.

Con fecha 31 de mayo de 2023, se tuvo presente el escrito de la abogada Magdalena Garcés Fuentes en el que acompañó en el otrosí una minuta hecha llegar por la profesora Dra. Francesca Lessa sobre los puntos abordados en la audiencia de 17 de mayo de 2023.

Con fecha 2 de junio de 2023, atendido el mérito de autos, se resolvió el cierre de la investigación y se remitieron los antecedentes a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema para que informe.

Con fecha 15 de junio de 2023, la abogada Katerina Gnecco Sandoval, presentó un escrito por su representado Orlando Moreno Vásquez, señalando que, a pesar de que por resolución de 14 de abril de 2023 se dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total debido a su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, continúan a la fecha las fiscalizaciones de la medida cautelar por parte de Carabineros de Chile. Es por ello que solicita que se oficie nuevamente a Carabineros de Chile con la finalidad de que tomen conocimiento del alzamiento de la medida cautelar.

Por resolución de fecha 16 de junio de 2023, se ordenó volver a remitir a Carabineros de Chile el oficio que informó el cese de la medida cautelar de arresto domiciliario total del requerido Orlando Moreno Vásquez, por encontrarse privado de libertad.

Con fecha 28 de julio de 2023, se remitió a este Tribunal el oficio N° 1357 de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, señalando en lo pertinente que en circunstancias que personal policial concurrió con fecha 21 de julio de 2023 al domicilio del requerido Daniel Arnoldo Aguirre Mora con la finalidad de fiscalizar la medida cautelar de arresto domiciliario total, su hijo, Daniel Aguirre Bueno comunicó a los



funcionarios policiales la defunción del requerido, presentando el certificado médico respectivo. Así, por resolución de misma fecha, se ordenó certificar por medio del Secretario de la Excelentísima Corte Suprema, el certificado de defunción de Daniel Arnoldo Aguirre Mora debidamente inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación. De esta forma, con fecha 31 de julio de 2023, el Secretario de la Excelentísima Corte Suprema constató que el certificado de defunción de Daniel Arnoldo Aguirre Mora se encontraba debidamente inscrito en el Registro de Defunciones de dicha institución.

Con fecha 1 de agosto de 2023, el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez, en representación del requerido Daniel Arnoldo Aguirre Mora, solicitó el sobreseimiento total y definitivo, fundado en la muerte de su representado, acompañando en el otrosí el respectivo certificado de defunción expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Con fecha 2 de agosto de 2023, con el mérito de lo informado por certificación de 31 de julio de 2023, se decretó el sobreseimiento definitivo de la presente causa seguida contra el requerido Daniel Arnoldo Aguirre Mora, por lo que se alzaron las medidas cautelares decretadas en su contra, y se ordenó informar de aquello a la Fiscalía Judicial de la Excelentísima Corte Suprema y al Estado requirente por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se tuvo por acompañado el certificado de defunción del requerido Daniel Arnoldo Aguirre Mora, acompañado por el abogado Juan Manuel Álvarez Álvarez.

Con fecha 4 de agosto de 2023, se remitió a este Tribunal el oficio N° 1401 de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, informando la recepción del oficio que dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total respecto del requerido Daniel Aguirre Mora producto de su fallecimiento. Dicho oficio se incorporó a sus antecedentes por resolución de 9 de agosto de 2023.

Con fecha 19 de agosto de 2023, la señora Fiscal Judicial de la Excelentísima Corte Suprema, remitió el Informe N° 152 que abordó las siguientes materias: se hizo una relación de los sujetos requeridos en extradición y los hechos y delitos por los cuales fueron condenados; los medios y antecedentes que se tuvieron en consideración en la República Italiana para configurar el delito; de la tramitación en el expediente de extradición de marras; de los antecedentes que obran en el expediente en relación a cada requerido; de los antecedentes que constan de los expedientes que figuran en los sistemas informáticos del Poder Judicial y otros expedientes materiales; de las normas nacionales e internacionales aplicables y de su cumplimiento para acceder o no a la solicitud; un análisis de los procedimientos instruidos en nuestro país en que se investigó los hechos que motivan el pedido de extradición, con especial énfasis en los sujetos que resultaron finalmente condenados por aquellos y su identidad con los requeridos de autos; y, finaliza manifestando que en opinión de la Fiscal Judicial, se han cumplido copulativamente los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002, y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago de Chile el 4 de octubre de 2012, y demás exigencias, por lo que propone: 1.-



Se rechaza la solicitud de extradición de Pedro Octavio Espinoza Bravo respecto de la condena impuesta por el caso de la víctima Jaime Patricio Donato Avendaño en Italia, toda vez que ha sido condenado en Chile en autos rol N° 2.182-98, “Episodio Calle Conferencia 1”, tramitada por el Ministro en Visita Extraordinaria don Miguel Vázquez Plaza, respecto de los mismos hechos y víctima, situación investigada en la República Italiana paralelamente. 2.- Se conceda la extradición de los requeridos Orlando Moreno Vázquez y Manuel Abraham Vázquez Chahuan para que cumplan la condena impuesta por su participación en la muerte de Omar Roberto Venturelli Leonelli. Se propone se difiera su entrega hasta el término de la tramitación de la causa rol 113.089, “Episodio Asalto al Polvorín”, que realiza el señor Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Álvaro Claudio Mesa Latorre, o el término del cumplimiento de la pena en Chile, si se le impusiere alguna en dicha causa; y, respecto de Orlando Moreno Vázquez, hasta que termine de cumplir la actual condena privativa de libertad de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, que se verifica en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, impuesta en la causa Rol 2182-1998, por el delito de secuestro calificado en el episodio Jaime Eltit. 3.- Se conceda la extradición de Rafael Francisco Ahumada Valderrama, para que cumpla en Italia la pena impuesta por el homicidio pluriagravado de don Juan José Montiglio Murúa. Se propone se difiera su entrega hasta el término de la tramitación de la causa Rol 2.182-1998 “Episodio Uruguayos Alberto Fontela y Otros”. 4.- Se conceda la extradición de Pedro Octavio Espinoza Bravo por el homicidio pluriagravado de don Juan Bosco Maino Canales. Se propone se difiera su entrega hasta el término del cumplimiento de las penas impuestas en diferentes causas en el territorio nacional, las que sumadas alcanzan alrededor de 500 años de privación de libertad por cumplir aún, que se verifican en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco. 5.- Omite pronunciamiento respecto de las solicitudes de extradición de Carlos Luco Astroza y Daniel Arnoldo Aguirre Mora, por haberse decretado a su respecto sobreseimiento definitivo en este procedimiento.

Con fecha 21 de agosto de 2023, se resolvió agregar a los autos el informe de la señora Fiscal Judicial. Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 652 del Código de Procedimiento Penal, se confirió traslado a los abogados representantes del Estado requirente, de la Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de las víctimas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el término de diez días.

Con fecha 31 de agosto de 2023, los abogados representantes del Estado requirente, Karinna Fernández Neira y Silvio Cuneo Nash evacuaron el traslado conferido respecto del informe fiscal, señalando en lo pertinente que comparten el análisis efectuado por la señora Fiscal Judicial, en el sentido que, si bien se han investigado en Chile situaciones conexas a los hechos, no se han dirigido acciones concretas contra los requeridos. Agregó además, que los hechos por los cuales fueron acusados y condenados los requeridos, se encuentran sancionados en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención



Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, cita jurisprudencia en la cual la Excma. Corte Suprema con anterioridad ha afirmado el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, mismo carácter atribuido por el informe fiscal. Luego, invocó el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002, y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago de Chile el 4 de octubre de 2012, haciendo presente la importancia del control de convencionalidad, de cuyas normas y principios se derivan obligaciones de identificar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Concluye el escrito señalando que se encuentran cumplidos todos los requisitos para acceder a la extradición, por lo que solicita que se acceda favorablemente al pedido.

Con misma fecha, el abogado coordinador del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Orellana Caro, evacuó traslado, haciendo referencia a la propuesta resolutive contenida en dicho informe, señalando estar íntegramente de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, por lo cual solicita que se acceda a la extradición.

En el mismo sentido, la abogada Magdalena Garcés Fuentes, representante de María Paz Venturelli Cea y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) evacuó traslado con misma fecha, señalando adherir a las opiniones de la señora Fiscalía Judicial, en orden a que se encuentran cumplidos los requisitos para conceder la extradición de los requeridos. Además, señaló que se cumple con el Protocolo Adicional del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana en lo referente a las condenas en rebeldía, toda vez que a los requeridos se les hizo saber de la existencia del juicio y se les nombró una adecuada defensa técnica. Por otro lado, agregó que el requerido Orlando Moreno Vásquez se encuentra actualmente acusado en calidad de cómplice por el delito de homicidio calificado y como autor del delito de apremios ilegítimos en causa Rol N° 113.089 “Episodio Polvorín”, sustanciada por el Ministro en Visita Extraordinaria Álvaro Mesa Latorre. Agregando además, que el mismo requerido se encuentra actualmente cumpliendo condena por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann. Respecto del requerido Vásquez Chahuan, informó que éste se encuentra acusado como autor del delito de homicidio calificado cometido contra una serie de víctimas ocurrido el 10 de noviembre de 1973 en Temuco en la misma causa Rol N° N° 113.089 “Episodio Polvorín”. Además, señaló que el señor Vásquez Chahuan se encuentra condenado a la pena de 3 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos a los que fue sometido don Luis Chihuailaf Arriagada en Causa Rol 114.034-2013, sustanciada por el Ministro Álvaro Mesa Latorre, la cual fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en segunda instancia, y que actualmente se encuentra con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia.

Por último, con misma fecha 31 de agosto de 2023, los abogados Nelson Caucoto Pereira y Francisco Bustos Bustos, en representación de Tamara Montiglio Belvederessi, evacuaron traslado, señalando en lo medular, encontrarse de acuerdo con lo informado por la señora Fiscalía Judicial, razón por la cual, solicitan que se conceda la solicitud de extradición.



Con fecha 1 de septiembre de 2023, se tuvo por evacuado el traslado conferido, y luego, el 4 de septiembre de 2023, en virtud de lo dispuesto en el artículo 652 del Código de Procedimiento Penal, se confirió traslado a los abogados defensores de los requeridos por el término de 10 días.

Por resolución de 12 de septiembre de 2023, en atención a la presentación de fecha 11 de septiembre de 2023 de la abogada Katerina Gnecco Sandoval, al derecho a defensa de los reclamados y al principio de igualdad de armas, se resolvió aumentar en 7 días el plazo para que los abogados de los requeridos evacuaran sus respectivos traslados.

Con fecha 18 de septiembre de 2023, la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación de los requeridos Rafael Ahumada Valderrama y Orlando Moreno Vásquez evacuó traslado conferido por resolución de 4 de septiembre del mismo año, solicitando que se desestime en todas sus partes lo propuesto por la Fiscalía Judicial en su informe, y, en consecuencia, que se niegue la extradición de sus representados. Respecto del requerido Moreno Vásquez, señala que el Informe Fiscal propone que se difiera su entrega material al término del cumplimiento de la condena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, impuesta por la causa Rol N° 2182-1998 por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, omitiendo que existe un proceso pendiente a su respecto, el cual se encuentra en tramitación ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. Por otro lado, señaló que el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, junto con su Protocolo Adicional, contemplan una carga procesal para el Estado requirente cuando se solicita la extradición para el cumplimiento de sentencias dictadas en ausencia, la cual consiste en probar la existencia de un recurso o remedio en su ordenamiento jurídico, que permita que el requerido pueda impugnar la sentencia y volver a discutir el hecho y derecho. Así, sostiene la defensora, que dicha carga debía ser alegada y probada por el Estado requirente al presentarse el requerimiento, y de no ocurrir aquello, corresponde rechazar la extradición, lo cual sería reforzado por la letra g) del artículo II del Tratado de Extradición. En este sentido, señala que aquella carga no habría sido satisfecha por el Estado requirente, habiendo precluido en esta instancia su oportunidad para probarlo. En la misma línea, cuestionó lo consignado por el Informe Fiscal en lo relativo a que sería procedente la extradición bajo el artículo 1° del Protocolo adicional, toda vez que los requeridos tuvieron conocimiento efectivo del proceso incoado en el país requirente, cuestión que para la defensora resulta errada, ya que sostiene que la invitación a los requeridos a fijar domicilio en Italia y otras comunicaciones con la finalidad de poner en noticia de acontecimientos procesales ocurridos en Italia no permiten satisfacer el principio de bilateralidad. Por otro lado, señala que el Informe Fiscal no se hace cargo del hecho que sus defendidos fueron condenados *en peius* por una sentencia de segunda instancia, razón por la cual sostiene que no se respetó el derecho a la defensa en juicio. Agregó que ninguno de los testigos ofrecidos se hizo cargo de la exigencia contenida en el artículo 1° del Protocolo adicional, esto es, la existencia de un recurso o remedio que garantizara a los requeridos el derecho a enervar/impugnar la sentencia que se pretende hacer cumplir o, el derecho a exigir la realización de un nuevo juicio. Sostuvo además



que el Estado requirente se excedió al atribuirse competencia penal respecto de no nacionales, sobre hechos con caracteres de delito con principio de ejecución y/o consumación dentro del territorio del Estado de Chile, cuestión que el Tratado habilita al Estado requerido como hipótesis para rechazar el pedido de extradición. Por otro lado, señaló que el Estado de Italia ha preterido de forma voluntaria y premeditada el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito por Chile e Italia, lo que desencadenó en que se atentara contra el derecho de los requeridos de ser oídos, de aportar pruebas, o de solicitar antecedentes al Estado requerido, toda vez que dicho tratado regula, entre otras, la notificación de actuaciones judiciales, el interrogatorio de sospechosos o acusados, la realización de la búsqueda de pruebas. Luego, la defensora sostuvo que el Informe Fiscal yerra al considerar satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal y los demás contenidos en el Tratado de Extradición y su Protocolo Adicional. En lo relativo al cumplimiento del numeral 3° del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, la defensora sostuvo que no se cumple lo exigido, toda vez que los antecedentes mencionados en el Informe Fiscal, resultan insuficientes para acreditar la participación de sus representados en los hechos investigados, sosteniendo que sus defendidos no se desempeñaban en las labores señaladas por el fallo italiano. De esta forma, sostiene que no es efectivo que Ahumada Valderrama haya sido quien estaba a cargo de los interrogatorios en septiembre de 1973, toda vez que este se encontraba a cargo de la Primera Batería de Combate del Regimiento de Artillería Motorizada N°1 “Tacna”, no estando a cargo de la inteligencia del Regimiento, pues en esa época la persona a cargo de la Inteligencia era el señor Enrique Galeno Ovalle. Por otro lado, respecto a Orlando Moreno Vásquez, señala que si bien en septiembre de 1973 se encontraba cumpliendo funciones en el Regimiento Tucapel, lo cierto es que esas funciones nunca fueron operativas o relacionadas con la detención, interrogatorio y/o posterior desaparición de persona alguna, sino que su función era la de Criptógrafo del Regimiento. Sostuvo que no existen antecedentes que permitan vincular a sus representados con el homicidio de las víctimas, razón por la cual, ninguno de ellos resultó condenado o procesado por dichos crímenes en Chile, por lo que resultaría inentendible que otra judicatura, extranjera, sin tener los antecedentes suficientes, haya llegado a una conclusión diversa sobre supuestas participaciones y que hoy pretenda ejecutarlas. En el mismo sentido, sostiene la defensora que no se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que no se encuentra justificada la existencia del delito que se investiga, como tampoco existen presunciones fundadas que permitan establecer que el inculpado ha tenido participación en el delito, sea como autor, cómplice o encubridor. Por otro lado, la defensora discrepa del Informe Fiscal en cuanto a no estimar concurrente la letra a) del artículo IV del Tratado, que prohíbe la doble persecución penal. Esto, fundado en que dicha disposición establece el rechazo de la extradición cuando el requerido se encuentra sometido a procedimiento penal, o ya fue juzgada por las autoridades judiciales de la Parte requerida, lo cual, estima concurrente en el caso de marras, toda vez que la norma haría referencia a un concepto amplio de sometimiento a proceso, por lo cual, tanto Orlando Moreno Vásquez, como Rafael Ahumada Valderrama habrían ya



sido objeto de un procedimiento judicial en Chile, sin que hayan resultado condenados. Agrega además que Chile tendría mejor derecho para entrar al conocimiento y juzgamiento de las conductas punibles, toda vez que los requeridos son de nacionalidad chilena, sumado a que las presuntas conductas punibles se desarrollaron en territorio nacional.

Por otro lado, la defensora sostuvo que ninguno de sus representados fue debidamente informado de los cargos que se formularon en su contra, como tampoco se les requirió para ser oídos, ni mucho menos se les notificó la sentencia de primera instancia de forma personal, tal como sería exigido por el artículo 505 inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, lo cual, a su juicio, podría haberse concretado a través de los mecanismos dispuestos por el tratado de asistencia judicial en materia penal, celebrado entre las dos potencias, pero que se pretirió sin causa. De la misma forma, discrepa con el Informe Fiscal en lo referente a que se observaron las garantías del debido proceso penal en su tramitación, y en lo relativo a la notificación suficiente de que se dirigía un proceso penal en su contra, señalando que, al contrario, la mera invitación a fijar domicilio en Italia no constituye emplazamiento suficiente, máxime cuando el Tratado de Asistencia judicial en materia penal, satisfacía de manera completa las pretensiones del sistema judicial italiano para incoar correctamente su investigación, además aseguraba a los justiciables un debido proceso de ley en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

En otro punto, la presentación de la defensa critica el fallo que fundamenta la solicitud de extradición fundado en que éste reformó *in peius* la sentencia de primer grado, lo cual se habría realizado reinterpretando las declaraciones de los testigos aportados en primera instancia, los cuales se estimaron en su oportunidad como insuficientes para formar convicción.

Por último cierra invocando la Convención internacional sobre protección de los derechos humanos de la persona mayor, que en su artículo 4° , letra c) dispone que el Estado de Chile se obliga a fortalecer, todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial, en todos sus ámbitos; el cual se encontraría en directa relación con el artículo 31 de la misma Convención, que consagra el derecho a ser oído por un Juez o Tribunal imparcial, competente e independiente, establecido con anterioridad por la ley, disposición que juicio de la defensa, habría sido inobservada por el Estado requirente, por lo que el procedimiento y la sentencia adolecerían de un vicio insanable.

En el otrosí de la presentación, se acompañó copia simple del certificado médico de fecha 12 de septiembre de 2023, emitido por el Dr. Yoel López Linares, Neurólogo Adulto de la Clínica Cordillera, en el cual constaría el deterioro cognitivo severo que padecería el requerido Rafael Ahumada Valderrama.

Con fecha 19 de septiembre de 2023, el abogado defensor Luis Núñez Muñoz, en representación del requerido Manuel Vásquez Chahuan evacuó el traslado conferido por resolución de 4 de septiembre del mismo año, solicitando que el Informe Fiscal no sea considerado, negando la extradición de su representado y disponiendo así, su inmediata



libertad. En dicha presentación, sostuvo que el Protocolo Adicional creó una carga procesal adicional para el Estado requirente tratándose de requeridos condenados en rebeldía, consistente en que debe probar la existencia de un remedio en su ordenamiento jurídico capaz de remover la cosa juzgada o la posibilidad de poder incoar un nuevo proceso, carga que debió alegarse y probarse al presentar el requerimiento de extradición. Por otro lado, cuestionó lo aseverado por el Informe Fiscal en orden a considerar que a los requeridos se les proporcionó la defensa técnica jurídica adecuada, fundado en que aquellos defensores de oficio no habrían interpuesto los recursos procesales idóneos para impugnar la sentencia de apelación dictada en perjuicio de su representado, que revocó la sentencia absolutoria de primera instancia. Por otro lado, agregó que el Estado de Italia cercenó los derechos mínimos de defensa de los imputados durante la tramitación del juicio, toda vez que no se habría hecho aplicación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, lo cual no habría sido tomado en cuenta por el Informe Fiscal de autos. Además, en lo que respecta al cumplimiento del numeral 3° del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, discrepa con el Informe, sosteniendo que su representado no habría podido participar en el homicidio de Venturelli Leonelli, toda vez que Vásquez Chahuan habría sido comisionado a la Localidad de Panguipulli hasta el 25 de septiembre, momento en el cual contrajo tifus y debió ser trasladado vía aérea al Hospital Regional de Temuco, antecedentes que el Ministro Madrid Croharé habría tenido en consideración para revocar el auto de procesamiento contra su representado por el secuestro de Eltit Spielmann, y que serían apoyados por las declaraciones de Edith Chahuan Chahuan y Raúl de Goyeneche Cabezón, las cuales se incorporaron al proceso por resolución de 24 de abril de 2023. Por otro lado, discrepa con el Informe Fiscal en cuanto al estándar de convicción necesario para declarar procedente la extradición, señalando que la jurisprudencia citada en el Informe corresponde a votos de minoría que vinculan el artículo 647 con el 274, ambos del Código de Procedimiento Penal. Señaló que, aun considerando el estándar del artículo 274 del Código del ramo, no se tendría por justificada la existencia del delito de homicidio, debido a que la sentencia italiana da luces de que la víctima fue objeto de secuestro, torturas y supone una vaga tesis de cómo pudo haber fenecido, no dando pruebas del deceso violento. Como tampoco, se podría tener por acreditadas las presunciones fundadas para estimar que el requerido tuvo participación en el delito, dado que fue promovido a oficial de inteligencia del Ejército sólo en 1974. Sostuvo además que no sería procedente la extradición por la hipótesis de la letra a) del artículo IV del Tratado de Extradición, toda vez que el requerido ya habría sido objeto de un proceso penal fundado en los mismos hechos. También, que la pena de presidio perpetuo a la que fue condenado por participar en calidad de cómplice en un delito, no sería procedente en el ordenamiento jurídico chileno. El abogado defensor sostuvo además que Vásquez Chahuan fue impedido materialmente de acceder al proceso sustanciado en Italia por inaplicación del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal, toda vez que éste no habría sido notificado del proceso, no se le dio la oportunidad de ser oído, no se le notificó la sentencia de primera instancia, entre otros. Sostuvo además que la declaración de ciudadano italiano de las víctimas sólo ocurrió





cuando éstas estaban muertas, razón por la cual no sería legítimo reconocérseles dicha calidad post-mortem y proceder con el juzgamiento. En la misma línea, sostuvo que Chile tiene mejor derecho que la República Italiana para juzgar los hechos delictuosos, teniendo en consideración que los imputados son chilenos, las conductas punibles se cometieron en Chile, y, además, aún existirían procesos pendientes respecto de las víctimas de autos. Por otro lado, agregó que el fallo de segundo grado de la jurisdicción italiana, sería político, mas no jurídico, fundado sólo en el repudio al pronunciamiento militar del 11 de septiembre en Chile. Por último cerró invocando la Convención Internacional sobre Protección a los Derechos Humanos de la persona mayor, específicamente el artículo 4º letra c) y el artículo 31º, que consagran el derecho a un adecuado acceso a la justicia, garantizando un trato diferenciado y preferencial, como también, el derecho a ser oído por un Juez o Tribunal imparcial, respectivamente, Convención que habría sido violada por la República Italiana en la sustanciación del juicio.

Con fecha 21 de septiembre de 2023, se tuvo presente los traslados evacuados por la defensora Katerina Gnecco Sandoval, por los requeridos Rafael Ahumada Valderrama y Orlando Moreno Vásquez, y de Luis Núñez Muñoz, por el requerido Manuel Vásquez Chahuan, teniéndose por evacuado el traslado conferido a la defensa del requerido Pedro Espinoza Bravo en rebeldía.

Con fecha 30 de octubre de 2023 se tuvo presente el escrito de 25 de octubre de 2023 presentado por el abogado Joaquín Perera Campusano en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y se tuvo por acompañada la copia simple de la sentencia de casación pronunciada el 24 de octubre de 2023 por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 22.184-2021, mediante la cual se rechazaron los recursos de casación deducidos por las defensas de los sentenciados en el marco del proceso Rol N° 2.182-98 episodio “Uruguayos – Alberto Fontela y otros”, declarando que la sentencia definitiva de segunda instancia que condenó al requerido de autos, Rafael Francisco Ahumada Valderrama a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, no es nula.

Con misma fecha, se dejó constancia en el expediente que, tras tomar conocimiento del fallecimiento del abogado Alcibiades Jorge Balmaceda Morales, se tomó contacto mediante la plataforma “Zoom” con el requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo, privado de libertad en el C.C.P. Punta Peuco de Gendarmería de Chile, a fin de consultar si designaría defensa privada en la presente causa, a lo que respondió que abogados de la ONG JURE habían tomado contacto con él para asumir su defensa. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se le informó al reclamado que si no constituía un abogado defensor en un tiempo prudente, se designaría a la Corporación de Asistencia Judicial para que asuma su representación.

Con fecha 1 de noviembre de 2023, la abogada Katerina Gnecco Sandoval, en representación de Rafael Ahumada Valderrama presentó un escrito informando que su representado se encuentra actualmente internado en el Hospital Militar de Santiago, recinto al que habría ingresado de urgencia, desconociéndose fecha de posible egreso,



por lo cual solicita que se tenga por justificada su ausencia del domicilio particular frente a un eventual control de la medida de arresto domiciliario total, y acompañando copia de la orden de hospitalización de fecha 30 de octubre de 2023.

El 2 de noviembre de 2023, se tuvo presente el escrito de la defensora Gnecco Sandoval, y se ordenó comunicar lo informado a Carabineros de Chile, en atención a la medida cautelar decretada contra el requerido Ahumada Valderrama. Por otro lado, se apercibió a la defensa del requerido a que comunique prontamente cuando el requerido regrese a su domicilio o tenga constancia de la fecha en que ello ocurra. Por último, se ofició al Hospital Militar de Santiago del Ejército de Chile, a fin de que informe el actual estado de salud del requerido, el tiempo de hospitalización previsto, y cuando el requerido sea dado de alta y regrese a su domicilio.

El 7 de noviembre de 2023, atendido el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del abogado del requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo, sin que haya designado a un nuevo defensor, y a fin de cautelar sus intereses, se designó a la Corporación de Asistencia Judicial para que asuma la defensa del requerido, comunicándole dicha circunstancia a través de oficio dirigido al C.C.P. Punta Peuco de Gendarmería de Chile.

Por resolución de 8 de noviembre de 2023, y en atención al estado procesal de la causa, se dispuso que los abogados de los requeridos que no se encuentren privados de libertad deban indicar los correos electrónicos de sus defendidos dentro de tercero día, con el objeto de enviarles notificaciones por aquella vía.

Con fecha 10 de noviembre de 2023, la abogada Katerina Gnecco Sandoval en representación del requerido Rafael Ahumada Valderrama presentó un escrito informando que su defendido no utiliza correo electrónico, pues padece de una demencia en etapa avanzada, acompañando copia simple del certificado médico expedido por el Dr. Yoel López Linares de la Clínica Cordillera con fecha 12 de septiembre de 2023. Por otro lado, solicitó que se oficie al Servicio Médico Legal a fin de que dicha institución fije un día y hora para evaluar y realizar un nuevo examen de facultades mentales al requerido, con el objeto que se disponga el sobreseimiento definitivo y parcial de Ahumada Valderrama en estos autos.

El 14 de noviembre de 2023, se tuvo presente el escrito de la abogada Katerina Gnecco Sandoval sólo en cuanto a la inexistencia de un correo electrónico del requerido Rafael Ahumada Valderrama, y se tuvo por acompañado el certificado médico adjunto. Por otro lado, atendido a que el requerido se encuentra internado en el Hospital Militar de Santiago, se resolvió reiterar la solicitud de que dicha institución informe el estado de salud y diagnóstico del requerido, como asimismo que elabore un informe de competencias del requerido en el plazo de 10 días. Por último, se ordenó certificar el estado de la causa Rol N° 2.128/1998, “Episodio Uruguayos Alberto Fontela y Otros”, en la cual el requerido Ahumada Valderrama fue condenado, incluido si fue notificado de la sentencia definitiva dictada en dichos autos.

Con fecha 15 de noviembre de 2023, se recibió oficio de la Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, doña Paola Plaza González, mediante el cual certificó el estado de la causa 2.182-98 Episodio Uruguayos, Alberto Fontela y remitió copias de las actas de notificación de la medida cautelar de



arresto domiciliario total decretada, y del cúmplase dictado en dichos autos, así como también de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago y de la sentencia de casación pronunciada por la Excm. Corte Suprema de Justicia, las cuales se encuentran firmes y ejecutoriadas. Asimismo, se dejó constancia que se le notificó orden de ingreso en calidad de rematado a fin de dar cumplimiento a la pena impuesta. Con misma fecha se tuvo a sus antecedentes la información remitida por la Ministra en Visita.

El 17 de noviembre de 2023, la Corporación de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia aceptó la designación de oficio en representación del requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo dictada en estos autos por resolución de 7 de noviembre de 2023, lo cual se tuvo presente por resolución de 21 de noviembre de 2023.

Con fecha 22 de noviembre de 2023, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz presentó escrito de patrocinio y poder, asumiendo la representación del requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo, lo cual se tuvo presente por resolución de 23 de noviembre.

Por resolución de 1 de diciembre de 2023 se tuvo presente el escrito presentado por el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz acompañando el correo electrónico personal de su representado Manuel Abraham Vásquez Chahuan. Por otro lado, se incorporó a sus antecedentes el oficio del Director General del Hospital Militar de Santiago que remitió un informe médico relativo al estado de salud y un informe de competencia del requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama. La evaluación pericial de competencia arrojó como diagnóstico un deterioro cognitivo conductual moderado, y como conclusiones en cuanto a los criterios de capacidad evaluados durante las entrevistas: en lo relativo a la orientación, orientado en tiempo, lugar, respecto de sí mismo y otros durante las entrevistas; expresión, habilidad para manifestar y darse a entender conservada, habilidad para expresar una decisión conservada; comprensión, entiende la situación, posibles resultados; razonamiento, logra argumentar lógicamente y elaborar información; apreciación, reflexiona sobre la información y los argumentos, pondera alternativas; logra comprensión del proceso en curso; comprometidas parcialmente la velocidad de procesamiento, la memoria autobiográfica y capacidad para almacenar información nueva. Por otro lado, en el informe médico se remitió una actualización diagnóstica respecto al paciente, señalando que este padece de una demencia mixta avanzada, deterioro cognitivo progresivo moderado a severo, fragilidad, hipertensión arterial crónica en tratamiento, cardiopatía coronaria, infarto antiguo de miocardio, angioplastia percutánea, paro cardiorrespiratorio recuperado, candidiasis esofágica severa en tratamiento. Por último a fin de no dilatar el proceso y habiéndose tomado conocimiento de que al requerido Rafael Ahumada Valderrama le fue efectuado un informe psiquiátrico por el Servicio Médico Legal en la causa N° 2.128/1998, “Episodio Uruguayos Alberto Fontela y Otros”, en la cual tiene orden de ingreso, se resolvió pedir al Ministro en Visita Extraordinaria, don Guillermo de la Barra Dünner, tener a bien remitir copia del mismo.

Con fecha 5 de diciembre de 2023 se recibió el oficio N° 2857-2023 de fecha 1 de diciembre de 2023, del Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Guillermo de la Barra Dünner, por el cual remitió copia



del oficio del Servicio Médico Legal N° 13-SCL-PQA-907-23, informe pericial psiquiátrico de 27 de noviembre de 2023 elaborado por el Servicio Médico Legal respecto del requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama, en el marco del procedimiento penal Rol N° 2.182-1998 Episodio “Uruguayos- Alberto Fontela y Otros”. En dicho informe se concluyó que *“de la lectura de compulsas y evaluación clínica psiquiátrica es posible estimar que Rafael Francisco Ahumada Valderrama presenta Trastorno Cognitivo Mayor (demencia) multidominio, a predominio amnésico siendo ésta una patología degenerativa, progresiva, irreversible e incurable de acuerdo a los avances actuales de la medicina, cuyo cuadro clínico encuadra dentro de la figura legal de Enajenado Mental. Por lo anteriormente expuesto, no se encuentra en condiciones de brindar un testimonio confiable (falsos recuerdos) ni ser responsable de sus acciones. No presenta peligrosidad para sí ni para terceros y su tratamiento puede estar en manos de familiares o de centros de asistencia al adulto mayor; esto último, en el momento en que exista mayor demanda aún de cuidados”*.

Por resolución de 18 de diciembre de 2023, vistos y teniendo presente el oficio del Servicio Médico Legal remitido por el Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Guillermo de la Barra Dünner, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 10 N° 1 del Código Penal, y 406, 407, 408 N° 4, 410, 684 y 686 del Código de Procedimiento Penal, se declaró el sobreseimiento parcial y definitivo del proceso respecto del requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ordenándose alzar las medidas cautelares decretadas en su contra.

#### CONSIDERANDO:

**PRIMERO:** *Solicitud de extradición.* La República Italiana requirió formalmente la extradición de los ciudadanos chilenos **Orlando Moreno Vásquez**, nacido en Chile el 14 de febrero de 1941, cédula de identidad chilena N° 4.647.511-9 y **Manuel Vásquez Chahuan**, nacido el 14 de noviembre de 1945, cédula de identidad chilena N° 5.090.301-K, formulada por la Ministra de Justicia de la República Italiana Hon. Marta Cartabia, en virtud del artículo XII del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago el 4 de octubre de 2012, a efectos de que cumplan con la pena de prisión perpetua que les fuera impuesta por la *Corte d’Assise d’Appello de Roma*, por sentencia de 8 de julio de 2019, irrevocable desde el 19 de febrero de 2020, como autores penalmente responsables del delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli; y, al ciudadano chileno **Pedro Octavio Espinoza Bravo**, nacido el 19 de agosto de 1931, cédula nacional de identidad N° 3.063.238-9, formulada por la Ministra de Justicia de la República Italiana Hon. Marta Cartabia, en virtud del artículo XII del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago el 4 de octubre de 2012, a efectos de cumplir con la pena de prisión perpetua con aislamiento diurno por 2 años, impuesta por la *Corte d’Assise d’Appello de Roma*, mediante sentencia de 8 de julio de 2019,



irrevocable desde el 9 de julio de 2021, como autor penalmente responsable por los delitos de homicidio voluntario pluriagravado cometidos en Chile el día 5 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Jaime Patricio Donato Avendaño, y el día 26 de mayo de 1976 cometido en contra del ciudadano italiano Juan Bosco Maino Canales.

**SEGUNDO:** *Procedimiento de extradición.* En concepto de esta Instructora, el procedimiento de extradición no es un medio para establecer la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de cometer un determinado delito, sino que constituye un mecanismo de cooperación cuyo fin es evitar la impunidad de conductas ilícitas graves y comúnmente sancionadas por la comunidad internacional, legitimando la entrega de un individuo que ha delinquido al Estado que lo requiere, con la finalidad de ser juzgado por un ilícito penal, o para que se haga efectiva la cosa juzgada de una sentencia condenatoria ejecutoriada en el país que motiva el requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, es deber de este Tribunal revisar el estándar de juzgamiento con que se sustanció el proceso en el Estado requirente, así como su adecuación a las exigencias propias de un procedimiento previo, serio y racional, en el que se haya cautelado el derecho a defensa de los imputados a la luz de los Tratados Internacionales vigentes.

En tal virtud, el legislador nacional ha optado por regular el ejercicio de esa acción para evitar la discrecionalidad de las autoridades judiciales requirente y requerida al momento de determinar la procedencia del pedido de extradición, imponiendo normas específicas en el ordenamiento jurídico y suscribiendo otras con diferentes actores del ámbito internacional, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las garantías básicas de un procedimiento racional y justo tanto en el Estado requerido, como en el Estado requirente que motiva la solicitud.

**TERCERO:** *Normas aplicables.* Como consecuencia de lo anterior, y en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos que fundan el pedido de extradición, la solicitud formulada en este procedimiento debe resolverse con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2º, del Título VI del libro III del Código de Procedimiento Penal (artículos 644 y siguientes), y las disposiciones del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 y su Protocolo Adicional, suscrito en Santiago el 4 de octubre de 2012, y, por consiguiente, lo que corresponde a esta instructora es analizar si el presente pedido de extradición resulta procedente a la luz de dicha normativa.

**CUARTO:** *Requisitos formales.* En relación con las exigencias formales previstas en el artículo X del mencionado Tratado, cabe concluir que estas son cumplidas a cabalidad en el pedido de extradición, toda vez que el Estado requirente acompañó a través de los canales diplomáticos correspondientes, copia certificada de la sentencia de fecha 8 de julio de 2019, irrevocable con fecha 19 de febrero de 2020 para Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan, y con fecha 9 de julio de 2021 para Pedro Octavio Espinoza Bravo, dictada por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma, indicando las penas a las que resultaron condenados los requeridos, siendo la de prisión perpetua para Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan, y, por otro lado, la de prisión perpetua con 2 años de aislamiento diurno para Pedro Octavio Espinoza Bravo, las cuales no se han iniciado en su cumplimiento.



Además, para satisfacer las exigencias del numeral 2° del mismo artículo X, se acompañó una descripción precisa del hecho por el cual fueron condenados, las fechas y el lugar donde fueron cometidos, como también, la calificación jurídica otorgada.

De esta forma, Orlando Moreno Vásquez resultó responsable del delito previsto y sancionado en los artículos 61 n. 1, 2, 4, 9, art. 575, art. 576.1 ns.1 y 4, art. 577 ns. 2 y 3, C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) *“por haber concurrido, en Chile, el 16 de septiembre de 1973, con otros cómplices, en cuanto miembro de los servicios de “inteligencia” militar encargado de los interrogatorios y de las torturas en el regimiento Tucapel, en la muerte del ciudadano italiano, Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI.”*

Manuel Vásquez Chahuan resultó responsable del delito previsto y sancionado en los artículos 61, n. 1, 2, 4, 9, art. 575, art. 576 párrafo 1 números 1 y 4, art. 577 párrafo 1 ns. 2 y 3 C.P. (homicidio voluntario pluriagravado) *“por haber participado, en Chile el 16 de septiembre de 1973, junto a otros copartícipes, en calidad de teniente de los servicios secretos militares encargado de los interrogatorios y de las torturas en el regimiento Tucapel, en el asesinato del nacional italiano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI”*

Por último, Pedro Octavio Espinoza Bravo fue condenado por dos episodios. Primero, en el marco del cargo N1) - Caso "DONATO AVENDAÑO", resultó responsable del el delito previsto y sancionado por los arts. 61 n.1, 2, 4, 9, 575, 576/1° n.1 y 4, 577/1° n.2, 3 y 4 del Código Penal (homicidio voluntario pluriagravado) *“por haber participado, en Chile el 5 de mayo de 1976, junto con otros cómplices, como jefe de las operaciones de la DINA (organismo de represión contra el partido comunista), en el papel de número dos de la organización, y como responsable del centro clandestino de detención “Villa Grimaldi”, donde estuvo detenido ilegalmente Jaime Patricio Donato AVENDAÑO, junto con otros militantes del Partido comunista chileno, en el asesinato de dicho ciudadano italiano, Jaime Patricio Donato AVENDAÑO, por cuya muerte se procedió de conformidad con el art. 8 del código penal. Con tal fin, efectuó el registro y la ocupación militar de treinta y dos apartamentos, definidos “cuevas” del Partido Comunista, entre los cuales los de la Calle Conferencia n. 1587 y de la Calle Alejandro del Fierro n. 5113, donde realizó, con otros cómplices, actos dirigidos a poner en peligro, con la finalidad de matar, la incolumidad de un número indeterminado de personas, incluso por el solo hecho de sospechar que pudieran militar en el Partido Comunista Chileno, arrestándolas sin ninguna resolución de la Autoridad legítima, llevándolas a Villa Grimaldi, torturándolas y matando a algunas de ellas, entre las cuales el ciudadano Jaime Patricio Donato Avendaño.”*

Adicionalmente, en el marco del cargo O1) - Caso "MAINO CANALES", resultó responsable del delito previsto y sancionado por los arts. 61 n.1, 2, 4, 9, 575, 576/1° n.1 y 4, 577/1° n.2, 3 y 4 del Código Penal (homicidio voluntario pluriagravado) *“por haber participado, en Chile el 26 de mayo de 1976, junto con otros cómplices, como jefe de las operaciones de la DINA (organismo de represión contra el partido comunista), prácticamente el número dos de la organización, y como responsable del centro clandestino de detención “Villa Grimaldi”, donde estuvo detenido ilegalmente Juan*



*Bosco MAINO CANALES junto con otros militantes del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria - corriente de izquierdas de la democracia cristiana chilena, que se había separado del partido), en el asesinato del ciudadano italiano, Juan Bosco MAINO CANALES, por cuya muerte se procedió de conformidad con el art. 8 del código penal. Con tal fin, en el ámbito de la campaña represiva contra el MAPU, que él había creado, programado y realizado, con otros cómplices, el día 26 de mayo de 1976, tras haber arrestado a Elisabeth URRRA, a Antonio Elizondo ORMAECHEA y a Juan Bosco MAINO CANALES, y tras haberlos llevado a "Villa Grimaldi", donde éstos fueron interrogados y torturado, mató a las personas antes citadas que habían sido arrestadas ilegalmente, entre las cuales el ciudadano Juan Bosco MAINO CANALES, ocultando sus cadáveres y apropiándose de algunos bienes personales de ellos, entre los cuales un automóvil Citroën AK6."*

En el mismo sentido, para tener por satisfecho lo exigido por la letra b) del numeral 2° del artículo X del Tratado ya referido, se acompañó una adecuada individualización de cada requerido, con mención a su nacionalidad y su residencia en Chile. Asimismo, para cumplir con la exigencia de la letra c), se señaló que ninguna de las penas se ha iniciado en su cumplimiento. Por último, se adjuntó copia de las disposiciones legales aplicables al hecho, y de las relativas a la prescripción del delito y la pena.

Por lo tanto, tal como se mencionó anteriormente, cabe concluir que los requisitos formales exigidos por el Tratado en cuestión se encuentran íntegramente satisfechos en el pedido de autos.

**QUINTO:** *Requisitos de fondo.* En lo atinente a los requisitos de fondo que debe satisfacer la solicitud de extradición, el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal establece los requisitos que deben concurrir de forma copulativa para declarar procedente el pedido. Así dispone: “Art. 647. (695) *La investigación se contraerá especialmente a los puntos siguientes:*

*1° A comprobar la identidad del procesado;*

*2° A establecer si el delito que se le imputa es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad a los principios del Derecho Internacional; y*

*3° A acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye.”*

**SEXTO:** *Identidad de los requeridos.* En cuanto al primero de los requisitos enunciados, la identidad de los requeridos se encuentra plenamente acreditada en autos, coincidiendo la identificación proporcionada por el Estado requirente con la entregada por los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, con la documentación remitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación relativa al extracto de filiación y antecedentes de cada requerido, con los informes de facultades mentales evacuados por el Servicio Médico Legal, y los oficios de Gendarmería de Chile, sobre todo, tomando en consideración que cada uno de los requeridos compareció como tal a la diligencia de toma de declaración indagatoria de fecha 22 de febrero de 2023, en la cual acreditaron



sus identidades exhibiendo sus cédulas de identidad nacional, no suscitándose cuestión alguna relativa a la identidad de los sometidos a proceso.

**SÉPTIMO:** *Delito extraditable.* A fin de determinar si el delito de autos autoriza la extradición conforme lo exige el numeral 2° del artículo en estudio, deben observarse las reglas establecidas por el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana y su Protocolo Adicional. De esta forma, resulta relevante el artículo I que consagra la obligación de extraditar; el artículo II que consagra los hechos que dan lugar a la extradición; el artículo IV que contempla ciertas hipótesis bajo las cuales se debe rechazar la extradición; el artículo VI que contempla ciertas hipótesis de rechazo facultativo de la extradición; y, por último, el artículo 1 del Protocolo Adicional de Cooperación en materia de extradición, el cual establece ciertos requisitos para conceder la extradición respecto de una persona condenada en rebeldía.

**OCTAVO:** *Principio de jurisdicción.* Respecto al artículo I del Tratado, este consagra el compromiso de las Partes del Tratado de otorgar la extradición de quienes se encuentren en su territorio y sean buscadas por la Autoridad Judicial de la otra Parte por haberse iniciado en su contra un procedimiento penal o por haber sido condenadas a una pena privativa o restrictiva de la libertad personal. En el caso de marras, la solicitud se enmarca dentro de esta hipótesis, toda vez que se trata de un grupo de ciudadanos chilenos que se encuentran en territorio chileno, y que son requeridos por las autoridades de la República Italiana para efectos de cumplir con una condena privativa de la libertad impuesta por la judicatura italiana.

**NOVENO:** *Principios de doble criminalidad y mínima gravedad del hecho.* Continuando con el análisis de los requisitos de fondo que dispone el Tratado que rige la materia, el numeral 1° del artículo II recoge los principios de doble criminalidad y de mínima gravedad del hecho. De esta forma, exige que los hechos sean sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena restrictiva o privativa de la libertad personal cuya duración sea superior en su máximo a un año o más severa. En la misma línea, el numeral 2° del mismo artículo exige adicionalmente que, tratándose de extradiciones cuya finalidad es ejecutar una pena –como el caso de marras–, se requiere que el saldo de pena a cumplir sea superior a seis meses.

Así, tal como se desprende de la sentencia de fecha 8 de julio de 2019 pronunciada por la *1ª Corte di Assise di Appello di Roma*, los requeridos en extradición han sido condenados a la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en diversos hechos constitutivos del delito de homicidio voluntario pluriagravado, la cual no se ha iniciado en su ejecución. Por lo tanto, se cumple con los requisitos antes aludidos.

Por otro lado, bajo la legislación chilena, los hechos por los cuales cada uno de los extraditables fue condenado en Italia, se corresponden con hechos punibles tipificados en el Código Penal de la época, sin perjuicio de las posteriores modificaciones legislativas en derecho interno para adecuarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que más adelante se revisarán, a saber: secuestro calificado del artículo 141 CP, cuya pena es de presidio mayor en cualquiera de sus grados; arresto o detención ilegal cometida por funcionario público del artículo 148 CP, cuya pena es de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, agravada a reclusión menor en su grado máximo si dicho





arresto o detención excede los treinta días; aplicación de tormentos y detención en lugar no designado por la ley del artículo 150 CP, cuya pena asignada por el legislador es de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados; y, homicidio calificado del artículo 391 N° 1 CP, sancionado con presidio mayor en su grado medio a muerte. En consecuencia, es dable afirmar que se da cumplimiento a los principios de doble criminalidad y mínima gravedad del hecho exigidos por el Tratado.

**DÉCIMO:** *Rechazo por proceso pendiente o cosa juzgada.* Cabe analizar si se verifica alguna de las hipótesis de rechazo que contempla el artículo IV del Tratado.

Al respecto, la letra a) prohíbe la extradición “*si por el mismo hecho la persona reclamada se encuentra sometida a procedimiento penal o ya fue juzgada por las Autoridades Judiciales de la Parte requerida*”, por lo que es menester corroborar si los hechos por los cuales fueron condenados en Italia los requeridos, son objeto de alguna investigación en curso, o si ya fueron juzgados por la jurisdicción chilena

a.1. Cargo M1- Episodio Omar Roberto Venturelli Leonelli, en el cual miembros de los servicios de inteligencia militar participaron, a partir del 16 de septiembre de 1973, en diversos sucesos que condujeron a la detención de la víctima, interrogatorios y torturas, lo cual derivó en la desaparición forzada y muerte de aquella.

En cuanto a estos hechos, según consta de los antecedentes que rolan en el proceso, se instruyó en Chile la causa Rol N° 2182-98 “Episodio Venturelli”, dirigida en contra de Juan Manuel Contreras y Alfonso Podlech. Sin embargo, dicho proceso fue sobreesido y archivado el 3 de marzo de 2011, por el numeral 2° del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, fundado en que, si bien se estableció la comisión del ilícito, no existían indicios suficientes sobre su autoría.

a. 2. Cargo N1- Episodio Jaime Patricio Donato Avendaño, en que se investigó la detención ilegal de la víctima, en el contexto del registro y ocupación militar de las denominadas “cuevas” del Partido Comunista de Calle Conferencia 1587 y de la Calle Alejandro del Fierro 5113; y su posterior traslado a Villa Grimaldi, donde fue torturado y se le dio muerte.

Respecto a estos hechos, según consta en antecedentes, en Chile se instruyó la causa Rol N° 2.182-98 “Episodio Conferencia 1”, en la que se condenó al requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de ocho delitos de secuestro calificado, entre los cuales, se encuentra el perpetrado en contra de la víctima Jaime Patricio Donato Avendaño, ocurrido el 5 de mayo de 1976, en el marco de las acciones represivas desplegadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en contra del Partido Comunista de Chile . Dicha sentencia se confirmó en segunda instancia por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y a la fecha, se encuentra radicada ante la Excelentísima Corte Suprema bajo el Rol N° 201.145-2023 para el conocimiento y fallo de los recursos de casación interpuestos en su contra.

Por lo tanto, existiendo identidad de hechos investigados y sancionados, de víctima, y de sujeto condenado en Chile y requerido en extradición por la República Italiana, se puede afirmar que se verifica la hipótesis de la letra a) del artículo IV que impide la concesión de la extradición para evitar una situación de doble persecución



penal, respecto del cargo N1 imputado a Pedro Octavio Espinoza Bravo, relativo al homicidio voluntario pluriagravado en contra de Jaime Patricio Donato Avendaño, ocurrido el 5 de mayo de 1976.

a. 3. Cargo O1- Episodio Juan Bosco Maino Canales, en que se investigó la detención ilegal de la víctima en el contexto de la campaña represiva contra el MAPU, y su posterior traslado a Villa Grimaldi, donde fue interrogado, torturado y se le dio muerte.

Según consta en el Informe Fiscal, y en los oficios remitidos por los Ministros en Visita Extraordinaria a esta Instructora, en relación a estos hechos se instruyó en Chile la causa Rol N° 2182-98 “Episodio Juan Maino y otros”, seguida por los delitos de secuestro calificado perpetrados en contra de una serie de personas, entre las que se encuentra la víctima Juan Bosco Maino Canales. Sin perjuicio de que han existido condenas en aquel proceso, el requerido Espinoza Bravo no fue sometido a proceso en dichos autos. Según consta del oficio de fecha 2 de agosto de 2022, remitido a esta Instructora por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, el único antecedente relativo a Pedro Octavio Espinoza Bravo que obra en la causa Rol N° 2182-98 “Episodio Juan Maino y otros”, consiste en una copia de declaración en calidad de inculpado prestada por el requerido Espinoza Bravo ante el Ministro Juan Guzmán Tapia en el marco de la instrucción llevada por el Episodio “Operación Colombo”, la cual se incorporó a la los autos a solicitud del Ministro Instructor de la época. Por lo tanto, se puede afirmar que el requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo no ha sido investigado, procesado ni condenado por el secuestro, tortura y homicidio de Juan Bosco Maino Canales.

Como conclusión general en lo relativo a la exigencia de la letra a) del artículo IV del Tratado, que consagra la prohibición de doble juzgamiento, se puede afirmar que en Chile se ha establecido la existencia de los hechos punibles investigados en Italia, mas ninguno de los requeridos en extradición ha sido procesado ni condenado por ellos, con la sola excepción de Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien resultó condenado a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de ocho delitos de secuestro calificado, entre ellos, el perpetrado contra el ciudadano ítalo chileno Jaime Patricio Donato Avendaño, en el marco de la causa Rol N° 2182-98 Episodio Calle Conferencia 1, razón por la cual no cabe sino rechazar su extradición para cumplir la pena impuesta en el marco del Cargo N1- Episodio Jaime Patricio Donato Avendaño. En todas las demás investigaciones judiciales seguidas en Chile, se han indagado situaciones conexas, sin que se hayan dirigido las acciones penales en contra de los demás requeridos Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan.

**UNDÉCIMO:** *Rechazo por prescripción, amnistía o delito político.* El artículo IV del Tratado de Extradición, la letra b) señala que la extradición no será otorgada “*si a la fecha de la recepción de la solicitud, la pena o la acción penal hubiera prescrito, según la ley de una de las Partes;*”. Asimismo, la letra c) que prohíbe la extradición “*si para el delito que ha motivado el pedido, en la Parte requerida se ha otorgado amnistía, siempre que este hecho recaiga bajo la jurisdicción penal de dicha Parte;*”, por último, la



letra e), que ordena rechazar la extradición “*si el hecho por el cual es solicitada se considera por la Parte requerida como delito político;*”.

Al respecto, se debe tener presente que los hechos acreditados por la jurisdicción italiana y que fundan el presente pedido de extradición, han sido catalogados por el Estado requirente como perpetrados dentro de un contexto de persecución sistemática desplegada por agentes del Estado contra una población civil, algunos perpetrados en el marco del “Sistema Cóndor” (Maino Canales y Donato Avendaño), y otro en una época previa a la formalización de dicho plan (Venturelli Leonelli). Estos delitos se configuran como graves violaciones a los derechos humanos de un grupo determinado de personas, por el sólo hecho haber sido sindicados como opositores ideológicos a un Gobierno instalado de facto. Por lo tanto, resultan aplicables diversas normas que integran el Derecho Internacional de los derechos humanos, que a su vez recogen diversos principios del Derecho Internacional considerados como *ius cogens*, los cuales se configuran como un límite al ejercicio de la soberanía por mandato del inciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que además impone a los órganos del Estado, el deber de respetar y promover tales derechos esenciales garantizados por la Carta Fundamental y los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Tal como reconoce el texto constitucional, estos principios de *ius cogens* que versan sobre derechos esenciales son obligatorios, inderogables y anteriores a la legislación positiva nacional e internacional que los *reconoce*, mas no los *crea*. En el esfuerzo de reconocer y positivizar estos derechos, la comunidad internacional ha suscrito un sinnúmero de Tratados Internacionales en la materia.

Entre ellos se encuentran, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 1948), la cual establece los derechos humanos fundamentales que deben ser protegidos por la comunidad internacional, entre los que se encuentra el derecho a la vida, libertad y seguridad (art. 3°), la prohibición de sometimiento a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5°), y la prohibición de ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado (art. 9°); la Convención Americana de Derechos Humanos (suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 1969, promulgada en Chile el 23 de agosto de 1990), en cuanto contempla la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella (art. 1° n°1), el derecho a la vida (art. 4°), la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5°), y reconoce el derecho a la libertad personal (art. 7°); la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (suscrita en París el 20 de diciembre de 2006, promulgada en Chile el 10 de diciembre de 2010), que define en qué consiste una desaparición forzada (art. 2°), califica su práctica generalizada o sistemática como crimen de lesa humanidad (art. 5°), establece que el plazo de prescripción de estas acciones debe computarse desde el cese de la desaparición de la persona (art. 8°), el deber de juzgar o extraditar a los presuntos autores de delitos de desaparición forzada (art. 11°), y la prohibición de considerar el delito de desaparición forzada como político en el contexto de extradición (art. 13°); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito en Roma el 17 julio 1998, promulgado el 6 de julio de 2009), que



crea la Corte Penal Internacional (art. 1°), establece su competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad (art. 5° letra b), define qué se entiende por crímenes de lesa humanidad (art. 7°), y establece la imprescriptibilidad de estos delitos (art. 29°); la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, promulgada el 7 de octubre de 1998), que define en forma amplia el concepto de tortura (art. 1°), establece el deber de juzgar o extraditar a los presuntos autores de delitos de tortura (art. 7°), e incluye los delitos de tortura como objeto de extradición en cualquier tratado bilateral existente entre los Estados Partes (art. 8°).

En el mismo afán de prevenir y sancionar los crímenes cometidos contra la dignidad humana, y en una directa manifestación del *ius puniendi* que goza la Comunidad Internacional para castigar estos delitos, el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estatuto jurídico ratificado por Chile y vigente, define a los crímenes de lesa humanidad como *cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; (...) e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura (...) h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos (...) i) desaparición forzada de personas*. A su vez, establece que se entenderá como “ataque contra una población civil” *una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política*; por “tortura” se entenderá el *causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control*; por “persecución” *la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad*; y, por “desaparición forzada de personas” *la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado*.

En el mismo sentido, y con la finalidad de positivizar en el ordenamiento jurídico interno el mandato internacional de sancionar enérgicamente la comisión de estos delitos, se dictó la ley N° 20.357 que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, promulgada el 26 de junio de 2009, la cual en su artículo 1° exige para catalogar un acto como un crimen de lesa humanidad que *1° el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil*, y, *2° Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que*



*favorezca la impunidad de sus actos.* A su vez, el artículo 2° dispone que se entenderá por “ataque generalizado” *un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas, y por “ataque sistemático” una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas.* Incluso, su artículo 4° contempla la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo para el que mate a otro concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1°, y su artículo 7° castiga con presidio mayor en su grado mínimo a medio al que torture a otro bajo su custodia, agravándose a presidio mayor en su grado medio a máximo si producto de las torturas se ocasionan lesiones graves. En el mismo sentido, la ley N° 20.968 que Tipifica Delitos de Tortura y de Tratos Cruels, Inhumanos y Degradantes, promulgada el 11 de noviembre de 2016, modificó el párrafo 4 del título III del libro segundo del Código Penal chileno, introduciendo una serie de artículos que tienen por finalidad el castigo de los delitos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución.

A su vez, la doctrina nacional ha identificado cuatro elementos centrales que permiten determinar cuándo nos encontramos en presencia de un crimen de lesa humanidad, a saber: 1. el sujeto activo o victimario evidencia vínculos directos o indirectos, formales o informales con aparatos del Estado; 2. existencia de una acción vejatoria de la dignidad de la persona; 3. en ciertos casos, -como el de autos- el amparo de la impunidad; y, por último 4. la trascendencia social del acto vejatorio (Bernaes Rojas, Gerardo. *La Imprescriptibilidad de la Acción Penal en Procesos por Violaciones a los Derechos Humanos*, 2007). En el mismo sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia dictada a propósito de la detención forzosa y desaparición de militantes del Partido Comunista de Chile, entre los que se encontraba Jaime Patricio Donato Avendaño, Rol N° 2545-2019 de 24 de abril de 2023, actualmente radicada en la Excma. Corte Suprema conociéndose de los recursos de casación interpuestos en su contra, delimita en su considerando décimo cuarto la naturaleza de estos crímenes de la siguiente forma: *“Un atentado provisto de método, dirigido en contra de víctimas con una militancia política definida, la que constituye el móvil de la agresión perpetrada, mediante un proceder que instrumentaliza, corrompe o pervierte las potestades que otorga el ordenamiento jurídico a la condición de funcionarios públicos de los hechores, permitiendo no sólo la comisión, sino también el encubrimiento de los crímenes en y contra opositores al régimen político imperante, por lo que tales actos típicos constituyen un crimen contra la humanidad, desde que dan cuenta de una línea de conducta que se despliega respecto de un gran número de personas unidas por una característica común; y que son ejecutadas con un cierto grado de organización que hace observable que con ellas se sigue un plan o política (Werle, G. Tratado de Derecho Penal Internacional, 2da. Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 47 y servicios; y 477-479).”*

Tal como se mencionó *ut supra*, todos estos elementos se encuentran presentes en los delitos que fundan el presente pedido de extradición. Así la desaparición forzada de Omar Roberto Venturelli Leonelli (Cargo M1), de 31 años de edad, profesor de la



Universidad Católica de Temuco, ex sacerdote, miembro del grupo “Cristianos por el Socialismo”, detenido y desaparecido el 25 de septiembre de 1973, luego de presentarse de forma voluntaria al Regimiento Tucapel de Temuco, luego de la dictación de bandos militares dirigidos a perseguir militantes o simpatizantes del Gobierno derrocado, donde fue objeto de tratos crueles y torturas perpetradas por órganos represivos del Estado, y que desencadenaron en su muerte.

Asimismo, la desaparición forzada de Jaime Patricio Donato Avendaño (Cargo N1), de 41 años de edad, mecánico eléctrico y dirigente sindical, miembro del Comité Central del Partido Comunista, detenido el 5 de mayo de 1976 en una “ratonera” montada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el marco de la persecución a los miembros de la cúpula del Partido Comunista de Chile.

De igual forma, la desaparición forzada de Juan Bosco Maino Canales (Cargo O1), de 27 años de edad, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), detenido el 26 de mayo de 1976 en la comuna de Ñuñoa, en el marco de la acción represiva desplegada por los servicios de inteligencia (DINA) en contra de los opositores políticos a la Junta Militar de Gobierno.

De la lectura de los casos reseñados, resulta innegable su carácter de crímenes de lesa humanidad, los cuales también han sido conceptualizados por la Excma. Corte Suprema a través de reiterada y consistente jurisprudencia en el siguiente tenor: *“son crímenes de lesa humanidad aquellos ilícitos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad del hombre, de suerte tal que para su configuración existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que contrarían de forma evidente y manifiesta el más básico concepto de humanidad, destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes (entre otras, en SCS N° 37.770-2017, de 9 de julio de 2018; 92043-2020, de 27 de septiembre de 2021; y, 19097-2022, de 27 de febrero de 2023).”* (SCS Rol N° 144.242-2020, de 22 de junio de 2023, cons. 4°).

Estos delitos son caracterizados por el Derecho Penal Internacional como imprescriptibles (art. 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), imposibles de amnistiar, y constituye un deber para la comunidad internacional sancionarlos enérgicamente por atentar contra valores humanos fundamentales. Análogamente, bajo la normativa nacional, la Ley N° 20.357 que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, promulgada el 26 de



junio de 2009, dispone expresamente en su artículo 40 que la acción penal y la pena de estos crímenes no prescribe.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenido: *“Que, entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar circunstancias excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”* (SCS Rol N° 144.242-2020, de 22 de junio de 2023, cons. 5°). En la misma línea, el máximo Tribunal ha razonado: *“Los principios de acuerdo a los cuales se consagra la imposibilidad de amnistiarlos, de establecer circunstancias excluyentes de responsabilidad o de declarar su prescripción, institutos que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables, determinan que los convenios, pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales, gozan de primacía. De este postulado se sigue que de acuerdo a una interpretación progresiva y finalista de la Carta Fundamental, prevalecen sobre el orden jurídico interno, puesto que se entiende que la prefieren, perfeccionan y complementan, siendo, por tanto, una normativa posible de invocar por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional de respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales del individuo. Es por ello que en este tipo de transgresiones no es posible invocar el Decreto Ley de Amnistía y la prescripción de la acción penal, porque lo prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos, razón por la cual, la causal en estudio no podrá prosperar.”* (SCS Rol N° 43575-2020 de 20 de junio de 2023, cons. 13°).

Por último, a propósito del Decreto Ley N° 2.191 de 18 de abril de 1978, éste concede una amnistía general a todos los responsables de hechos delictuosos cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978 durante la vigencia del estado de sitio, espacio temporal entre los que se encontrarían los delitos de autos. Sin embargo, los artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos en ella consagrados y adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, por lo tanto, se puede sostener que normas de auto amnistía como el Decreto Ley N° 2.191 tienen como finalidad perpetrar la impunidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad, resultando manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al atentar contra los derechos civiles y políticos en ella consagrados, tales como el derecho a la vida (art. 4°), a la integridad personal (art. 5°), y a la libertad personal (art. 7°). Por lo tanto, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el Decreto Ley N° 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede ser invocado por los Estados Partes como un obstáculo para lograr desarrollar una adecuada investigación judicial que brinde justicia a las víctimas de tales crímenes. Además de la jurisprudencia nacional citada, que ya sostiene uniformemente la imposibilidad de



amnistiar dichos crímenes, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Almonacid Arellano y otros contra Chile*, sostuvo en la sentencia de 26 de septiembre de 2006, que la mantención de la vigencia del Decreto Ley N° 2.191 como norma de derecho interno, constituye una abierta infracción del Estado de Chile a las exigencias impuestas por el artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mantener formalmente dentro de su ordenamiento un Decreto Ley contrario a la letra y espíritu de la Convención. Adicionalmente, la Corte Interamericana consideró que la aplicación del Decreto Ley N° 2.191 por parte de los Tribunales de Justicia chilenos para efectos de sobreseer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos por aparatos represivos del Estado durante la dictadura, constituye una infracción al artículo 1.1 de la Convención. Así, sostuvo el deber de los jueces ejercer un control de convencionalidad al aplicar normas de derecho interno que pretendan preterir las consagradas por la Convención: *“cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Almonacid Arellano y otros contra Chile*, sentencia de 26 de septiembre de 2006.)

Por lo tanto, no cabe sino concluir que no se verifica ninguna de las hipótesis contempladas en la letra b), c), o e) del Tratado en análisis, por tratarse de crímenes imprescriptibles, no amnistiables, ni políticos, sino que se trata de crímenes de lesa humanidad atentatorios de derechos humanos.

**DUODÉCIMO:** *Rechazo por juzgamiento o condena emanada de un Tribunal de excepción.* La letra d) del artículo IV del Tratado dispone que la extradición será rechazada *“si la persona reclamada es, fue o será juzgada por un tribunal de excepción en la Parte requirente;”*. De los antecedentes remitidos por el Estado Requirente, aparece que los requeridos fueron juzgados por los Tribunales Ordinarios en lo Penal de la República Italiana, y finalmente en última instancia por la *1ª Corte di Assise di Appello di Roma* (Corte del Jurado de Apelaciones), los que no constituyen un Tribunal de excepción.

**DÉCIMO TERCERO:** *Rechazo por motivos de discriminación.* La letra f) del artículo IV del Tratado dispone como hipótesis de rechazo de la extradición *“si la Parte requerida tiene serios motivos para considerar que la persona reclamada será objeto de actos persecutorios o discriminatorios por motivos de raza, de religión, de sexo, de nacionalidad, de idioma, de opinión política o de condición personal o social, o si la situación de dicha persona corra el riesgo de agravarse por uno de los elementos mencionados;”*. Al respecto, no existen serios motivos para considerar que los requeridos en extradición serán objeto de actos persecutorios o discriminatorios por motivos de raza,





religión, sexo, nacionalidad, idioma, opinión política, o por su condición personal o social.

**DÉCIMO CUARTO:** *Rechazo por no observancia del debido proceso.* Que, la letra g) del artículo IV del Tratado dispone que se rechazará la extradición “*si debido al hecho por el cual es solicitada, la persona reclamada ha sido o será sometida a un procedimiento que no garantiza el respeto de los derechos mínimos de defensa. La circunstancia de que tal procedimiento se ha desarrollado en rebeldía de la persona reclamada, no constituye de por sí motivo de rechazo de la extradición*”. En el mismo sentido, el artículo 1º del Protocolo Adicional de Cooperación en materia de extradición, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002, señala que “*Cuando una Parte solicite a la otra la extradición de una persona condenada en rebeldía, la extradición será concedida si la Parte requirente demuestra que el propio ordenamiento prevé instrumentos idóneos que aseguren, a la persona condenada en rebeldía de quien se solicita la extradición, el derecho a la impugnación de la sentencia de condena o el derecho a un nuevo proceso, en caso que la persona a extraditar no haya tenido conocimiento efectivo del proceso.*”

Tal como se desprende de los antecedentes remitidos, el pedido de extradición tiene por propósito ejecutar el cumplimiento de las penas de prisión perpetua [*ergastolo*], impuestas por sentencia pronunciada por la Corte del Jurado de Apelaciones de Roma [*1ª Corte d’Assise d’Appello di Roma*] con fecha 8 de julio de 2019, a los requeridos en extradición de autos. Si bien dicho proceso se desarrolló sin la comparecencia personal de los requeridos imputados ante los Tribunales italianos, consta de los antecedentes que rolan en el proceso que:

g. 1. Los imputados fueron debidamente notificados de la investigación judicial desarrollada en su contra por los Tribunales italianos, y además, se les comunicó en su oportunidad a través de exhortos internacionales debidamente tramitados, que debían fijar domicilio en Italia y designar un abogado de confianza que asumiera su defensa (Causa CS Rol N° 6.192-2008 y 6.654-2009 de Exhorto Internacional). Esto, además fue reconocido espontáneamente por el requerido Orlando Moreno Vásquez en la diligencia de toma de declaración indagatoria llevada a cabo el 22 de febrero de 2023 ante quien suscribe.

g. 2. Ante la negativa del requerido Espinoza Bravo a participar del juicio, y la omisión de los demás requeridos de designar defensor de confianza y fijar domicilio en Italia, el Tribunal italiano designó defensores de oficio para todos los requeridos: Marco Bastoni por Pedro Octavio Espinoza Bravo, y Valentina Perrone por Orlando Moreno Vásquez, y Manuel Vásquez Chahuan.

g. 3. La figura de los abogados defensores de oficio fue objeto de lata declaración del testigo presentado por el Estado requirente, Andrea Speranzoni, italiano, defensor de Derechos Humanos y querellante en el proceso criminal desarrollado en Italia, quien señaló que se trata de defensa técnica altamente especializada que participó de la defensa de los intereses de los imputados en toda instancia. Corolario de lo anterior es la sentencia absolutoria de fecha 17 de enero de 2017 para Espinoza Bravo, Moreno Vásquez y Vásquez Chahuan en primera instancia ante el III Tribunal Penal de Roma [*Corte di Assise di Roma*]; luego, la solicitud de confirmación de absolución de Moreno



Vásquez y Vásquez Chahuan, presentada por la defensora Valentina Perrone, y la solicitud del defensor Marco Bastoni en cuanto a confirmar la absolución de Espinoza Bravo; la interposición de apelaciones incidentales a lo largo del proceso de segunda instancia, tales como las promovidas en audiencia de 7 de noviembre de 2018, en la que los defensores de los requeridos solicitaron, entre otros, la inadmisibilidad de la apelación presentada por el Procurador de la República ante el Tribunal de Roma, se declarase la nulidad ab origen del procedimiento de reconocimiento de la nacionalidad italiana a las víctimas de los delitos por no haber sido iniciado por los directos interesados (fallecidos), sino que, por sus descendientes, sin el poder necesario. Todas estas actuaciones constan en lo expositivo de la sentencia de segunda instancia.

g. 4. El proceso criminal en que se dictó la sentencia condenatoria se desarrolló por más de una década en las diversas instancias judiciales del país requirente, y la sentencia de apelación se dictó considerando la diversa prueba producida en el juicio, dentro de la cual se encuentran declaraciones testimoniales de familiares de desaparecidos, de sobrevivientes a la reclusión y torturas, historiadores, y documentos oficiales emanados de las comisiones de investigación instituidas por los gobiernos civiles electos una vez recobrada la democracia, como por ejemplo, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación en el caso de Chile.

g.5. Tal como consta en lo expositivo de esta sentencia, para efectos de indagar si en el procedimiento criminal seguido ante los Tribunales italianos se garantizó el respeto de los derechos mínimos de defensa, se recibieron una serie de testimonios de académicos italianos, doctores en derecho, que depusieron ante esta Instructora en audiencias de fecha 10, 17 y 19 de mayo de 2023. Así, la doctora en Derecho, Silvia Bagni, Profesora Asociada en Derecho Público Comparado de la Universidad de Bologna, que expuso sobre la consagración del justo proceso en materia Constitucional, y la garantías que éste resguarda, tales como la reserva de ley en materia procesal y penal, el contradictorio, la independencia e imparcialidad del juez, la extensión razonable del proceso, el derecho del imputado a ser informado confidencialmente de la naturaleza y los motivos de la acusación, el plazo otorgado al acusado para preparar su defensa, y la igualdad de armas, la publicidad de los procesos penales, el derecho al juez natural pre-constituido, el derecho al recurso, el derecho a la defensa técnica, la presunción de inocencia, el principio *in dubio pro reo*, todos los cuales han sido aplicados en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Señaló además que el estándar de convicción que rige en materia penal es el de más allá de toda duda razonable, y que la carga de la prueba recae sobre el fiscal. Con la misma finalidad, se recibió el testimonio de María Alicia Mejía Fritsch, abogada especializada en derecho penal procesal y sustantivo, quien depuso sobre el proceso criminal desarrollado en Italia en contra de los requeridos. Esta testigo ilustró sobre las diversas etapas que contempla el ordenamiento jurídico procesal penal italiano, comenzando con la investigación desarrollada por el Fiscal a cargo, quien luego de reunir los antecedentes, comunicó a los imputados a través de documentos traducidos, que se dirigía un proceso penal en su contra, para efectos de designar un defensor de confianza; luego, se contempla una etapa preliminar de pedido de juicio, la cual se desarrolla ante un juez unipersonal que verificó



que el aviso de conclusión de investigaciones había sido correctamente notificado a los interesados, se discutieron excepciones procesales interpuestas por los abogados defensores, finalizando con el decreto de envío a juicio; luego, se desarrolló la etapa de *dipartimento* o discusión, ante un Tribunal compuesto por 2 jueces de carrera, 2 jueces letrados y 6 jurados, ante quienes se presentaron los testigos ofrecidos por el Ministerio Público y defensores, pudiendo ser interrogados y contrainterrogados por los intervinientes, los que depusieron auxiliados por traductores, se presentó prueba documental traducida; se refirió a la calidad profesional de los abogados defensores de oficio; se refirió a la sentencia de primer grado, la cual fue traducida y comunicada a los defensores; los recursos que se interpusieron en contra de ella; y luego la sentencia de segundo grado dictada por la Corte de Apelaciones; se refirió también a los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia de segunda instancia, los cuales fueron desechados por la Corte Suprema de Casación Italiana, declarando que en el juicio no existieron vicios aptos para producir la nulidad de la sentencia.

Concluyendo, se puede afirmar que en el procedimiento criminal desarrollado ante la jurisdicción italiana se respetaron los principios formativos del debido proceso, consagrados a nivel constitucional y procesal penal, salvaguardando así el derecho a defensa de los imputados, por lo cual no corresponde considerar concurrente la hipótesis de rechazo contenida en la letra g). Una vez que se les notificó a los imputados del proceso seguido en su contra, y frente a su decisión de no participar en el proceso, o simplemente no designar domicilio en Italia ni defensor de confianza, operaron los mecanismos procesales necesarios para resguardar el derecho a defensa de los imputados requeridos.

Más aún, para cumplir con las exigencias del artículo 1° del Protocolo adicional del Tratado, tratándose de condenas dictadas en rebeldía del imputado, el ordenamiento jurídico italiano dispone de una instancia adicional, una vez concretada la entrega, con la finalidad de que los requeridos ejerzan su derecho a impugnar la condena, o a solicitar un nuevo proceso. Esto se desprende de los oficios de difusión de búsqueda en campo internacional despachados por la Procuraduría General de la República Italiana, y acompañados al pedido de extradición de cada requerido. En lo medular, se señala que la legislación italiana prevé en el artículo 175 del Código Procesal Penal, que dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de entrega, el condenado extranjero requerido en extradición puede solicitar la restitución del término para presentar impugnación, salvo que haya tenido conocimiento efectivo del juicio y haya renunciado voluntariamente a participar o a presentar impugnación, circunstancias que deben ser verificadas por el juez de la impugnación respectiva.

**DÉCIMO QUINTO:** *Rechazo por sometimiento a penas atentatorias de derechos fundamentales, trato discriminatorio a menores de edad, o delitos exclusivamente militares.* La letra h) del artículo IV dispone que se rechazará la extradición “*si existen fundados motivos para estimar que la persona reclamada será sometida a penas o malos tratos que de todas maneras fueren considerados como violación de los derechos fundamentales;*”. Asimismo, la letra i), que contempla el rechazo de la extradición, cuando el requerido era menor de edad al momento de la



comisión del delito y la ley de la Parte requirente no “*la considera así o si no prevé para los menores un tratamiento procesal o sustancial para su reinserción social en conformidad con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte requerida*”. Por último, la letra j) que dispone el rechazo de la extradición “*si el hecho por el cual se solicita la extradición constituye, de acuerdo a la ley de la Parte requerida, un delito exclusivamente militar. A ese efecto se consideran delitos exclusivamente militares los hechos previstos y penados por la ley militar y que no constituyen delitos de derecho común.*”

De los antecedentes remitidos por el Estado requirente, no aparecen fundados motivos para estimar que los requeridos fueran a ser objeto de malos tratos atentatorios de sus derechos humanos. En el mismo sentido, ninguno de los requeridos en extradición era menor de edad. Por último, tal como se señaló *ut supra*, no se trata de delitos exclusivamente militares, sino que, de crímenes de lesa humanidad perpetrados por órganos represivos dirigidos contra un sector determinado de la población civil.

**DÉCIMO SEXTO:** *Estándar de convicción.* En relación al tercer requisito del artículo 647 de nuestro Código de Procedimiento Penal, esto es, que la investigación se contraerá “*3° A acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye*”, la jurisprudencia uniforme de esta Suprema Corte ha señalado que los antecedentes que la ley exige respecto de la existencia del hecho punible y la participación del requerido en el delito, deben ser ponderados conforme al estándar de sometimiento a proceso consagrado en el artículo 274 del mismo Código, el cual requiere que de la lectura de los antecedentes aparezca “*1° Que está justificada la existencia del delito que se investiga, y 2° Que aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.*”, así las SCS Rol N° 7.953-2017 de 6 de junio de 2019 y SCS Rol N° 39.545-2021 de 8 de noviembre de 2021.

En este sentido, la Excelentísima Corte ha señalado que “*la ley no pretende que los antecedentes inculpativos conduzcan necesariamente a una decisión de condena, pero sí que sean graves y de consideración de modo que justifiquen el juzgamiento; análisis de mérito que en el proceso penal vigente a la fecha de la comisión del ilícito corresponde al juez de primer grado y que en el de extradición está reservado al Ministro Instructor*” (SCS Rol N° 21.018-2015 de 23 de marzo de 2016, cons. 9°). En la misma línea, y a propósito de la valoración de la prueba para cumplir con el tercer requisito del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal ha señalado que “*la valoración de todos los medios probatorios debe siempre hacerse por el Juez Requirente, y en este procedimiento de extradición solo se les aprecia a los efectos de verificar los presupuestos del artículo 647 del CPP, atendido que no se trata del juicio mismo*” (SCS Rol N° 2.849-2011 de 1 de septiembre de 2011, cons. 6°).

**DÉCIMO SÉPTIMO:** *Estándar de sometimiento a proceso.* Entonces corresponde a esta Instructora analizar si de los antecedentes que conforman el pedido de extradición, se alcanza el estándar de sometimiento a proceso en cuanto a que esté justificada la existencia del delito por el que se condenó, y, que por otro lado, aparezcan presunciones fundadas para estimar que los requeridos han tenido participación en el



delito. Lo anterior, teniendo presente que en este ante juicio no se requiere de una certeza plena que vaya más allá de toda duda razonable, ni una convicción judicial total que permita fundar una sentencia condenatoria, toda vez que dichos estándares fueron alcanzados en el proceso sustanciado por el Estado requirente en ejercicio de su soberana potestad jurisdiccional, el cual se desarrolló con observancia del debido proceso legal según se consignó en el considerando décimo cuarto de este fallo.

Hecha la salvedad, es necesario tener en consideración los hechos por los cuales se condenó a cada requerido, y la participación que le habría cabido a cada uno según la sentencia que se pretende cumplir, esto es, la de fecha 8 de julio de 2019, dictada por la *Corte d'Assise d'Appello di Roma*:

a) Manuel Vásquez Chahuan y Orlando Moreno Vásquez por el homicidio voluntario pluriagravado de Omar Roberto Venturelli Leonelli (Cargo M1).

*“Cargo M1: caso Venturelli. Sergio Víctor ARELLANO STARK, Hernán Jerónimo RAMÍREZ RAMÍREZ, Manuel VÁSQUEZ CHAHUAN, Orlando MORENO VÁSQUEZ, Daniel AGUIRRE MORA y Carlos LUCO ASTROZA, M 1) del delito previsto y castigado por los artículos 81.2, 422, 630, 575, 576.1 n° 1 y 4, 577.1 n° 2, 3 y 4, y 61 n° 1, 2, 4 y 9 C.P. por haber llevado a cabo, con más acciones ejecutivas de un mismo diseño criminal, en concurso entre ellos, con Oscar Alfonso PODLECH MICHAUD (contra quien se procede por separado) y con otras personas no identificadas - entre estas últimas también algunas de las que participaron personalmente en los secuestros y en las muertes - y con otras fallecidas (Gustavo LEIGH, José Toribio MERINO CASTRO, Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Pablo Heriberto ITURRIAGA MARCHESE y Máximo VIVANCO, Luis Armando JOFRE SOTO, Nelson Manuel UBILLA TOLEDO, Leonel QUILODRAN BURGOS y Andrés PACHECO CARDENAS), actos dirigidos a poner en peligro la incolumidad, también con la intención de matar, de un número indeterminado de personas, profesores y representantes de las Universidades, incluso sólo porque supuestamente militantes de los Movimientos de izquierdas o de tener con dichos militantes simples relaciones de parentela, amistad, afecto, frecuentación o simpatía; actos que consistían en arrestar, sin ninguna orden de la autoridad legítima, a un número indeterminado de personas por sus supuestas relaciones con los citados Movimientos y haberlas tenido detenidas ilegalmente y torturado para sacarles a la fuerza indicaciones sobre la identidad de otros militantes de los citados Movimientos, sus nombres de batalla, su localización y la participación de éstos en presuntas acciones subversivas; por haber concurrido en la muerte de muchas de las personas secuestradas y entre éstas la del ciudadano italiano Ornar Roberto VENTURELLI LEONELLI, por cuya muerte se procede en virtud del art. 8 C.P.*

*Actos y acciones que consistían en:*

*- Haber emanado, el intendente de la Región de Temuco, el bando n. 16 con el que instaba a muchos miembros de las universidades de las regiones, entre los cuales a Omar VENTURELLI, a que se presentasen ante las autoridades militares, pena la aplicación de la "ley de fuga";*



- Detenido ilegítimamente a VENTURELLI en la cárcel de aquella ciudad, que se había presentado el 16.9.1973 en el regimiento de Tucapel de Temuco, cumpliendo con lo indicado en el citado bando n° 16;

- Interrogado a VENTURELLI en múltiples ocasiones, torturándolo, en el cuartel Tucapel junto a otras personas arrestadas por los mismos motivos, entre las cuales Adolfo BERCHENKO NAVARRETE, Norberto PREGNAN ARAVENA, Lautaro Víctor CALFUQUR HERNRIQUEZ, Víctor Herman MATURANA BURGOS, Miguel BARUDY LABRIN y un tal Carrasco, funcionario del CORA;

- Haber dispuesto, aparentemente, la excarcelación de VENTURELLI, que resultaba "oficialmente" detenido en la cárcel de Temuco sólo desde el 25/9/1973, con disposición n° 52 de la Fiscalía del ejército del 4/10/1973;

- Viceversa, haber entregado, a VENTURELLI a la "caravana de la muerte" dirigida por el general Sergio ARELLANO STARK;

- Haber matado a VENTURELLI ocultando su cadáver."

A Manuel Vásquez Chahuan se le consideró responsable en cuanto teniente de los servicios secretos militares, encargado de los interrogatorios y torturas en el Regimiento Tucapel.

A Orlando Moreno Vásquez se le consideró responsable en cuanto miembro de los servicios de inteligencia militar, encargado de los interrogatorios y de las torturas en el Regimiento Tucapel.

En lo que respecta a la existencia justificada del delito por el que se condenó a Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan, según consta de la sentencia pronunciada por los Tribunales italianos, la desaparición de Omar Venturelli Leonelli se evidencia en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (conocido como Informe Rettig), habiéndose declarado el 7 de mayo de 1993 su muerte presunta acaecida el 22 de septiembre de 1975. En el mismo sentido, la existencia del Bando N° 16 se pudo acreditar a través de la revisión de fecha 13 de diciembre de 2021 de los 6 tomos de tramitación que conforman la causa Rol N° 2.182-1998 episodio "Venturelli", traída a la vista en estos autos. En dicha oportunidad se adjuntó copia de la página N° 4 del Diario Austral de la ciudad de Temuco, correspondiente a la edición del día viernes 14 de septiembre de 1973, en la que se publicó el texto del Bando N° 16, comunicado por el Coronel Intendente Hernán Ramírez Ramírez, por medio del cual se ordenó a una serie de personas, entre las cuales se encuentra Omar Venturelli Leonelli, a presentarse en la comandancia del Regimiento Tucapel, bajo apercibimiento de sanción determinada conforme a las normas que regulan el Estado de Sitio.

Según consta en la sentencia de Italia, estos hechos fueron asimismo corroborados por diversos testigos que depusieron ante el Tribunal en el proceso llevado a cabo en la República Italiana, como por ejemplo, el de Ernesto García Islas, soldado conscripto del Ejército de Chile en cumplimiento del servicio militar obligatorio, que en audiencia de 8 de mayo de 2015 señaló que vio a Omar Venturelli Leonelli en el Regimiento Tucapel a finales de septiembre de 1973, volviéndolo a ver en octubre del mismo año, mucho más delgado y demacrado, habiendo escuchado de otros soldados que la víctima estaba destinada a la muerte. En el mismo sentido declaró Víctor Maturana Burgos, militante



del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), quien fue detenido y enviado a la cárcel de Temuco, que señaló que a fines de septiembre vio llegar al establecimiento de detención a la víctima. Asimismo, Jorge Barudy, médico psiquiatra que compartió con la víctima mientras se encontraban detenidos en la Cárcel de Temuco, que señaló que le realizó curaciones luego de las sesiones de interrogatorios y torturas a las que fue sometido, afirmando que la última vez que lo vio fue la noche del 3 o 4 de octubre, cuando fue retirado por soldados del centro de detención.

Por otro lado, en cuanto a la existencia de presunciones fundadas para estimar que los requeridos han tenido participación en el delito, cabe señalar que los mismos requeridos Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan, se ubican en el Regimiento Tucapel (lugar donde ocurrieron los hechos) y reconocen la existencia de detenidos en sus declaraciones prestadas en el marco de la causa Rol N° 2.182-1998 Episodio Omar Venturelli Leonelli, las cuales fueron remitidas a esta Instructora a través del oficio 1979-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021 de la Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, doña Paola Plaza González. Orlando Moreno Vásquez señaló en declaración de fecha 7 de mayo de 2003, que a partir del 11 de septiembre de 1973 hubo una gran cantidad de detenidos en el Regimiento Tucapel y que estos quedaron a disposición de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del Regimiento. Por su parte, Vásquez Chahuan señaló en declaración de 23 de marzo de 2005, que en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, llegaban personas detenidas al Regimiento Tucapel, que estas eran trasladadas a la Fiscalía Militar y que dichos ingresos y egresos no eran registrados en los libros de guardia.

Por otro lado, según consta de la lectura de la sentencia dictada el 8 de julio de 2019 por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma, durante la tramitación del proceso penal se recibió una serie de testimonios de víctimas que fueron detenidas en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre los cuales se encuentra la declaración de Luis Alarcón Seguel prestada en audiencia de 7 de mayo de 2015, arrestado en dicho establecimiento el 5 de octubre de 1973, que afirmó haber sido interrogado hasta finales de 1973 por el teniente Manuel Vásquez Chahuan y Orlando Moreno Vásquez, con la finalidad de obtener información sobre integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.). En el mismo sentido declaró la testigo Bernardita Weisser, arrestada el 26 de octubre de 1973, torturada y trasladada al Regimiento Tucapel de Temuco, quien reconocía Orlando Moreno Vásquez y lo sindicó como persona de confianza del jefe de la inteligencia militar de Temuco. Asimismo, el testigo Alonso Azócar, que en audiencia de 7 de mayo de 2015 sindicó a Moreno Vásquez como uno de los participantes en los interrogatorios que se realizaban en el Regimiento Tucapel. En la misma línea, el testimonio de Paul Herman Carrasco en audiencia de 8 de mayo de 2015, que ubica en el Regimiento Tucapel a Vásquez Chahuan y Moreno Vásquez.

Con respecto a las alegaciones del abogado defensor Luis Núñez Muñoz vertidas en traslado de fecha 19 de septiembre de 2023, mediante las cuales sostiene que el requerido Vásquez Chahuan habría estado en Panguipulli hasta el 24 de septiembre de 1973 momento en que contrajo tífus y habría quedado con licencia médica y reposo por



20 días, cabe mencionar que efectivamente, según los documentos presentados por aquella parte e incorporados a estos antecedentes por resolución de 7 de enero de 2022, en la copia simple de hoja de vida militar de Manuel Vásquez Chahuan se registra anotación de 3 de septiembre de 1973 que le felicita por actuación en operación militar desplegada entre el 30 de agosto y 2 de septiembre de 1973; en la siguiente anotación de fecha 24 de septiembre de 1973 consta que se da parte de enfermo por diagnóstico de para-tifus; luego, una anotación de 26 de septiembre de 1973 le felicita por su participación en operativo desarrollado en alrededores de Liquiñe, la que condujo a la captura José Liendo Vera, alias Comandante Pepe, sin especificarse en qué periodo se desplegó dicho operativo. Por otro lado, en el documento “Calificación Médica Anual” consta que se otorgó un parte de enfermo por para-tifus por el plazo de 18 días, sin especificar en qué fecha habría padecido la enfermedad. En el mismo sentido, el oficio N° 1595/1820 de 18 de febrero de 2022 del Estado Mayor General del Ejército de Chile, incorporado a estos autos por resolución de 3 de marzo de 2022, por medio del cual se comunica que entre los años 1973 y 1979 no existe registro alguno de licencia médica, sólo figurando una interconsulta el 24 de diciembre de 1975 desde la urgencia de traumatología por una fractura de falange del segundo dedo del pie derecho. Por otro lado, y en contraste con la copia simple de la hoja de vida militar del requerido acompañada por la defensa, la hoja de vida militar autenticada y remitida por el Estado Mayor General del Ejército de Chile a través del referido oficio N° 1595/1820 resulta ilegible en la página relativa al periodo de septiembre de 1973. Por lo tanto, en vista de los antecedentes que rolan en el proceso, no es posible descartar la presencia de Manuel Vásquez Chahuan en el Regimiento Tucapel entre el 2 de septiembre y el 24 de septiembre de 1973, época de tiempo en la que es perfectamente factible la materialización de los hechos imputados al requerido, debido a la coincidencia en tiempo y espacio con la víctima.

Por otro lado, con respecto a las alegaciones de la abogada Katerina Gnecco Sandoval vertidas en traslado de 18 de septiembre de 2023, mediante las cuales sostiene que no es posible que el requerido Orlando Moreno Vásquez haya participado en la comisión del delito por el cual se solicita su extradición, fundado en que a la época de los hechos, si bien se encontraba cumpliendo funciones en el Regimiento Tucapel, éstas no se relacionaban con la detención, interrogatorio o desaparición de persona alguna, cabe señalar que la defensa no ha acompañado antecedentes que permitan sostener dicha premisa. Por otro lado, se debe tener presente el oficio N° 1595/1820 de 18 de febrero de 2022 del Estado Mayor General del Ejército de Chile, mediante el cual se comunica a esta Instructora que la Hoja de Vida Militar de Orlando Moreno Vásquez correspondiente al período 1973/1974 ha sido eliminada por motivos desconocidos, corroborándose dicha información a través de un certificado de 24 de febrero de 1987. Al respecto, resulta a lo menos dudoso que sólo la hoja de vida correspondiente al período en que tuvieron lugar los hechos haya sido suprimida por agentes desconocidos y bajo circunstancias desconocidas.

Con el cúmulo de antecedentes probatorios que rolan en el presente proceso de extradición, y en esta etapa procesal, se puede colegir con sólidos fundamentos que los





requeridos Manuel Vásquez Chahuan y Orlando Moreno Vásquez en sus calidades de miembros de los servicios de inteligencia militar del Ejército de Chile, formaron parte de una estructura jerarquizada con un plan propio, ajeno a la función pública que les correspondía como funcionarios de las fuerzas armadas, en plena concomitancia con otros sujetos pertenecientes a las fuerzas de represión, cuyo objetivo principal fue perseguir a los militantes de movimientos de izquierdas, profesores y representantes universitarios, y miembros de organizaciones de la sociedad civil de afinidad política contraria al nuevo régimen instaurado por la fuerza. La primera etapa de este plan se materializó en la dictación del Bando N° 16 por el intendente de la Región de Temuco, mediante el cual se obligó a ciertas personas, individualizadas con nombre y apellido, -entre las cuales se encontraba la víctima de autos- a presentarse en el Regimiento Tucapel de Temuco bajo apercibimiento de sanción. Omar Venturelli Leonelli, ex sacerdote y profesor universitario, quien de buena fe se presentó voluntariamente en dependencias del Regimiento, dejando de manifiesto su intención de cooperar con sus persecutores, fue detenido ilegalmente, sometido a intensas sesiones de interrogatorios y torturas, mantenido como prisionero en el Regimiento Tucapel y la Cárcel Pública de Temuco, todos estos actos que culminaron con su desaparición y muerte. En este antejuicio, la participación en calidad de autor de Manuel Vásquez Chahuan y Orlando Moreno Vásquez fluye con nitidez, pues, de los datos aportados a la investigación se infiere con claridad meridiana que ambos forman parte de un aparato represivo jerarquizado, con superiores dictando órdenes e inferiores acatando y ejecutando. En nomenclatura penal, esta cadena de mando cuenta con autores mediatos e inmediatos en los términos del artículo 15 del Código Penal chileno, siendo igualmente responsable quien realiza el hecho punible mediante una conducta directamente subsumible en el tipo penal, y el que hace ejecutar el hecho mediante otro. Resulta relevante lo planteado en la letra a) a propósito de la autoría en los aparatos organizativos de poder, en lo relativo a que los autores ejecutores inmediatos, que tienen pleno dominio de sus propias acciones, funcionan como elementos reemplazables en la operatividad del aparato de poder, el cual subsiste independiente de su existencia, lo cual convierte al respectivo ejecutor, sin perjuicio de su propio dominio de la acción y ubicación en la cadena de mando, al mismo tiempo en instrumento del sujeto ubicado sobre él. Incluso, bajo el prisma del Derecho Penal Internacional, el homicidio de Omar Venturelli Leonelli -crimen de lesa humanidad- se enmarca dentro de una hipótesis de responsabilidad individual por el hecho colectivo, el cual ha sido definido por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia como aquel donde *“muchas personas teniendo un propósito común se embarcan en una actividad criminal que luego es ejecutada conjuntamente o por algunos de los miembros de esa pluralidad de personas”* (ICTY, *Prosecutor v. Tadic*, Caso N° IT-94-1-A, 15.07.1999, párr. 194. En Matus, Jean Pierre. *Las formas de responsabilidad criminal por el hecho colectivo en el Derecho internacional y en el derecho interno chileno conforme a la Ley N° 20.357*. Revista Política Criminal, 2013). Todos los actos punibles despegados por los sujetos activos pertenecientes a la colectividad (dictación del Bando N°16, detención ilegal, torturas, interrogatorios, homicidio), se materializan bajo un propósito común, propio de la



empresa criminal conjunta (acabar con actores políticos afines al Régimen democrático derrocado y contrarios al recientemente instaurado). En este sentido, en la sentencia que se pretende cumplir, la Corte razona para sancionar a los “cuadros intermedios” de esta “empresa” como Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuan, que : *“Los imputados definidos por el primer juez como ‘cuadros intermedios’ no eran subalternos, no ignoraban lo que estaba sucediendo sino que, viceversa, aunque subordinados en la escala jerárquica a los vértices militares y a los jefes de gobierno, ellos eran sus colaboradores más íntimos, constituían una elite estable e inmutable en su composición y desempeñaban papeles importantes en el seno de la inteligencia y de las estructuras de coordinación y de represión contra la lucha subversiva que tenía – como ya hemos dicho - una autonomía decisoria sobre la organización de las operaciones, los medios, los hombres y los recursos económicos. Así pues éstos sabían muy bien cuál era el objetivo que sus superiores querían alcanzar y también sabían muy bien que participaban, individuando a cada una de las personas que tenían que arrestar, en el alcance de tal resultado. Esto queda confirmado en la arrogancia que mostraban los militares que actuaban en los centros de detención, haciéndose fuertes del silencio y de la inactividad de las autoridades constituidas ante las denuncias presentadas por los familiares de los secuestrados.”* Asimismo, respecto al rol que desempeñaron los torturadores dentro de los centros de detención clandestinos, como el caso de Vásquez Chahuan y Moreno Vásquez, razonó la corte que la detención, interrogatorios y torturas, eran un paso necesario para cumplir con el fin último de obtener inteligencia y neutralizar a la oposición política: *“La detención de las víctimas en los centros clandestinos era un pasaje obligado para alcanzar el objetivo final (homicidio) para la doble finalidad de obtención de informaciones que habrían ampliado el campo de la represión y la neutralización de las víctimas imposibilitadas a causa de las torturas sufridas a cualquier forma de resistencia y a organizar una fuga.”*

Por lo tanto, a juicio de esta Instructora, se da cumplimiento al estándar para someter a proceso a Manuel Vásquez Chahuan y Orlando Moreno Vásquez por el homicidio voluntario pluriagravado de Omar Roberto Venturelli Leonelli.

b) Pedro Octavio Espinoza Bravo por el homicidio voluntario pluriagravado de Jaime Patricio Donato Avendaño (Cargo N1).

*“Cargo N1: caso Donato Avendaño. Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, Marcelo MOREN BRITO N 1) del delito previsto y castigado por los artículos 81.2, 422, 630, 575, 576.1 n° 1 y 4, 577.1 n° 2, 3 y 4, y 61 n° 1, 2, 4 y 9 cp. por haber llevado a cabo, con más acciones ejecutivas de un mismo diseño criminal, en concurso entre ellos y con otras personas no identificadas - entre éstas últimas también algunas de las que participaron personalmente en los secuestros y en las muertes - y otras fallecidas (Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE), actos dirigidos a poner en peligro la incolumidad, también con la intención de matar, de un número indeterminado de personas, incluso sólo porque supuestamente militantes en el Partido Comunista Chileno o de tener con dichos militantes simples relaciones de parentela, amistad, afecto, frecuentación o simpatía; actos que consistían en arrestar, sin ninguna orden de la autoridad legítima, a un número indeterminado de*



personas por sus supuestas relaciones con el citado Partido y haberlas tenido detenidas ilegalmente y torturado para sacarles a la fuerza indicaciones sobre la identidad de otros militantes del citado Partido, sus nombres de batalla, su localización y la participación de éstos en presuntas acciones subversivas. A tal fin registraban y ocupaban militarmente 32 inmuebles definidos "guaridas" del Partido Comunista, entre los cuales el situado en la Calle Conferencia n° 1587 y en la Calle Alejandro del Fierro n° 5113 donde secuestraban a muchas personas, algunas de las cuales matadas, y entre éstas al ciudadano italiano Jaime Patricio DONATO AVENDAÑO por cuya muerte se procede en virtud del art. 8 CP.

Actos y acciones seguidamente descritas con relación al 'caso de la Calle Conferencia n° 1587':

- Haber secuestrado, el 30/4/1976 a Juan BECERRA BARRERA, cerca de su casa situada en Santiago de Chile, en la Calle Conferencia n° 1587, y haberlo trasladado al centro clandestino de detención de la DINA llamado "Villa Grimaldi" situado en Santiago en el barrio Peñalolén en la calle José Arrieta y conocido también como "Terranova" y "el Infierno";

- Haber secuestrado precedentemente y haber trasladado al mismo centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", a Teresa ZUNIGA GUAJARDO, María Angélica GUTIERREZ y Eliana VIDAL, respectivamente cuñada, esposa y prima de Juan BECERRA BARRERA;

- Haber torturado a todas las personas antes indicadas para sacarles con la fuerza informaciones sobre el lugar donde estaba Mario ZAMORANO;

- Haber vuelto a llevar a las personas antes indicadas, arrestadas de modo ilegítimo, a la casa de la Calle Conferencia n° 1587 y haberlas obligado a quedarse allí y a trabajar, aparentemente, en un laboratorio de peletería allí presente;

- Haber retenido, durante algunas horas, al Obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Enrique ALVEAR URRUTIA, en el inmueble de la calle Alejandro del Fierro n° 5113 de la madre de BECERRA que, como Obispo, había ido allí tras un aviso difundido por la esposa de Julio MAIGRET, militante comunista, detenido ya que arrestado en el ámbito de esa misma operación represiva contra el Partido Comunista;

- Haber secuestrado el 4/5/1976, a su llegada al apartamento de la Calle Conferencia n° 1587, a Mario Jaime ZAMORANO DONOSO y a Jorge MUÑOZ POUTAYS que eran trasladados al centro clandestino de detención "Villa Grimaldi" donde eran torturados;

- Haber secuestrado el 5/5/1976 al ciudadano italiano Jaime Patricio DONATO AVENDAÑO y a Uldarico DONAIRE CORTEZ, trasladados también ellos, al centro clandestino de detención "Villa Grimaldi" y allí torturados;

- Haber secuestrado el 6/5/1976, siempre en el apartamento de la Calle Conferencia n° 1587, a Lisa del Carmen ESCOBAR, trasladada, también ella a 'Villa Grimaldi' y allí torturada;

- Haber secuestrado, al abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Hernán MONTEALEGRE en el ámbito de dicha operación;



*- Haber causado la muerte y ocultado los cadáveres de muchos militantes del Partido Comunista, entre los cuales el de Mario Jaime ZAMORANO DONOSO, Jorge MUÑOZ POUTAYS, Uldarico DONAIRE CORTEZ, Lisa del Carmen ESCOBAR y del ciudadano italiano Jaime Patricio DONATO AVENDAÑO por cuya muerte se procede en virtud del art. 8 CP. ”*

A Pedro Octavio Espinoza Bravo se le consideró responsable como jefe de las operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en la práctica el número dos de la organización, y responsable del centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", donde estuvo detenido Jaime Patricio Donato AVENDAÑO, junto a otros militantes del Partido Comunista Chileno.

Tal como se refirió en el considerando décimo a propósito de la hipótesis de rechazo obligatorio por proceso pendiente o cosa juzgada contemplada en el artículo IV del Tratado de Extradición, en Chile se instruyó la causa Rol N° 2.182-98 “Episodio Conferencia 1” por los mismos hechos, en la que se condenó al requerido Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de ocho delitos de secuestro calificado, entre los cuales, se encuentra el perpetrado en contra de la víctima Jaime Patricio Donato Avendaño, ocurrido el 5 de mayo de 1976, en el marco de las acciones represivas desplegadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en contra del Partido Comunista de Chile. Dicha sentencia se confirmó en segunda instancia por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y a la fecha, se encuentra radicada ante la Excelentísima Corte Suprema bajo el Rol N° 201.145-2023 para el conocimiento y fallo de los recursos de casación interpuestos en su contra. Por lo tanto, verificándose la hipótesis de rechazo obligatorio respecto de estos hechos, se omitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento del estándar de sometimiento a proceso.

c) Pedro Octavio Espinoza Bravo por el homicidio voluntario pluriagravado de Juan Bosco Maino Canales (Cargo O1).

*“Cargo O1: caso Maino. Juan Manuel CONTRERAS SEPÚLVEDA; Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO O1) del delito previsto y castigado por los artículos 81.2, 422, 630, 575, 576.1 n° 1 y 4, 577.1 n° 2, 3 y 4, y 61 n° 1, 2, 4 y 9 C.P. por haber llevado a cabo, con más acciones ejecutivas de un mismo diseño criminal, en concurso entre ellos y con otras personas no identificadas - entre éstas últimas también algunas de las que participaron personalmente en los secuestros y en las muertes - y otras fallecidas (Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Paul SCHAFFER), actos dirigidos a poner en peligro la incolumidad, también con la intención de matar, de un número indeterminado de personas, incluso sólo porque supuestamente militantes del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), corriente de izquierdas de la democracia cristiana chilena que se había separado del partido, o de tener con dichos militantes simples relaciones de parentela, amistad, afecto, frecuentación o simpatía; actos que consistían en arrestar, sin ninguna orden de la autoridad legítima, a un número indeterminado de personas por sus supuestas relaciones con el citado Partido y haberlas tenido detenidas ilegalmente y torturado para sacarles a la fuerza indicaciones sobre la identidad de otros militantes del citado Partido, sus nombres de batalla, su localización y la participación de éstos en presuntas acciones subversivas; haber concurrido en la muerte*



de muchas personas secuestradas y entre éstas, la del ciudadano italiano Juan Bosco MAINO CANALES por cuya muerte se procede en virtud del art. 8 CP.

*Actos y acciones seguidamente descritas:*

- Por haber ideado, programado y realizado la campaña represiva contra el MAPU;

- Por haber arrestado, en ejecución de dicha campaña represiva, a numerosos militantes de dicho movimiento o a sus familiares;

- En particular por haber arrestado el 24/5/1976 Andrés Constantini REKAS URRRA, no comprometido políticamente, hermano de Elizabeth URRRA, haberlo trasladado al centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", donde era torturado para sacarle a la fuerza informaciones sobre la actividad y localización de su hermana Elizabeth, del esposo de ésta, Antonio Elizondo ORMAECHEA y de otras personas, entre las cuales Juan Bosco MAINO CANALES;

- Por haber arrestado el 26/5/1976 a Elizabeth URRRA, Antonio Elizondo ORMAECHEA y Juan Bosco MAINO CANALES y haberlos trasladado al centro clandestino de detención "Villa Grimaldi" donde eran interrogados y torturados mientras que Andrés Constantini REKAS URRRA sucesivamente era puesto en libertad;

- Por haber matado a las tres personas antes indicadas, arrestadas ilícitamente y haber ocultado los cadáveres, apropiándose de algunos bienes personales de éstas, entre los cuales, de un auto Citroën AK-6. ”

A Pedro Octavio Espinoza Bravo se le consideró responsable como jefe de las operaciones de la DINA (en práctica el número dos) y responsable del centro clandestino de detención "Villa Grimaldi", donde estuvo detenido Maino Canales con los otros militantes del Movimiento.

En lo que respecta a la existencia justificada del delito por el que se condenó a Espinoza Bravo, consta en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal italiano, que fueron incorporadas al proceso diversas declaraciones en audiencias celebradas el 28 y 29 de mayo de 2015. Entre ellas, se encuentra la de Andrés Constantino Rekas Urria, prestada en la Embajada de Italia en Santiago el 26 de diciembre de 2000, leída en la referida audiencia, que relató que fue detenido con fecha 22 de mayo de 1976 por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), y que luego fue trasladado al centro de detención clandestina Villa Grimaldi, lugar en el que fue objeto de torturas e interrogatorios con miras a averiguar sobre su hermana Elizabeth Rekas Urria, su marido, Antonio Elizondo Ormaechea, y sobre la víctima de autos, Juan Bosco Maino Canales. Señaló además que una vez que capturaron a la víctima Maino Canales, debió reconocerla a solicitud de los torturadores. En el mismo sentido, prestó declaración en dicho proceso Carlos Montes Cisterna, secretario general del Movimiento de Acción Popular Unitaria (M.A.P.U.), quien fue detenido ilegalmente el 30 de diciembre de 1980 por la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.), órgano represivo continuador de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), quien señaló haber escuchado de uno de sus torturadores que Maino Canales “*se nos fue*” expresión utilizada por los agentes de la policía secreta para decir que un detenido objeto de tortura no había resistido a las violencias y había muerto, como asimismo el victimario le habría enseñado un



documento escrito de puño y letra por Montes y que había entregado a Maino Canales antes de huir de Santiago. Asimismo, prestó declaración el primo de la víctima, Pablo Adiazola Maino, quien señaló que el día antes de su desaparición, la víctima le había confiado que estaba en peligro y que iba a reunirse con el secretario del Movimiento de Acción Popular Unitaria (M.A.P.U.), Carlos Montes. Sobre la desaparición de la víctima declararon asimismo sus hermanas Margarita y Mariana y su ex novia, Gloria Torres Ávila.

En cuanto a la existencia de presunciones fundadas para estimar que el requerido ha tenido participación en el delito, se recibieron los testimonios de Gloria Torres Ávila, abogada de la Vicaría de la Solidaridad y de Carlos Montes Cisternas, quienes ubican a Espinoza Bravo dentro de los vértices de mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.). En el mismo sentido, en declaración indagatoria llevada a cabo el 22 de febrero de 2023, el requerido reconoció que con fecha 19 de noviembre de 1974 fue designado por el Director de Inteligencia Nacional a cargo del Cuartel Terranova, reconocido centro clandestino de detención, tortura y exterminio a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.) ubicado en la antigua Villa Grimaldi.

Del cúmulo de antecedentes probatorios allegados a la causa, se puede colegir con sólidos fundamentos en esta etapa procesal –dada la naturaleza de este antejuicio–, que Pedro Octavio Espinoza Bravo, en su calidad de Jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.) y responsable del centro clandestino de detención “Villa Grimaldi”, formó parte de una estructura jerarquizada con un plan propio, encargada de perseguir y eliminar la oposición política del Gobierno militar, organización que dependía directamente del Presidente de la Junta militar, Augusto Pinochet Ugarte. La desaparición forzada y asesinato de Juan Bosco Maino Canales se enmarca dentro de la campaña represiva dirigida en contra del Movimiento de Acción Popular Unitaria (M.A.P.U.), en la cual se empleó la tortura, secuestro a familiares no comprometidos políticamente, interrogatorios y el asesinato, todas acciones desarrolladas en forma clandestina, pero organizadas desde las esferas más altas de la Junta militar que gobernaba. En este antejuicio, la participación en calidad de autor de Pedro Octavio Espinoza Bravo fluye con nitidez, pues, de los antecedentes aportados a la investigación se infiere con claridad meridiana que este forma parte de un aparato represivo jerarquizado, con superiores dictando órdenes e inferiores acatando y ejecutando. En nomenclatura penal, esta cadena de mando cuenta con autores mediatos e inmediatos en los términos del artículo 15 del Código Penal chileno, siendo igualmente responsable quien realiza el hecho punible mediante una conducta directamente subsumible en el tipo penal, y el que hace ejecutar el hecho mediante otro. Resultan relevantes los planteamientos de la doctrina nacional e internacional a propósito de la autoría en los aparatos organizativos de poder, abordado en la letra a), y la doctrina del Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos en lo relativo a la empresa criminal conjunta, abordado en la letra b). Estos delitos, unidos a otros similares perpetrados por órganos represivos del Gobierno Militar, por su modalidad y características de los ejecutores, trascienden el ámbito individual, pues resulta evidente que se cometieron en el marco de una política estatal de eliminación selectiva de presuntos militantes de agrupaciones



políticas contrarias al régimen imperante, la cual fue diseñada, planificada y controlada desde las más altas esferas del Poder del Estado, por consiguiente, constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Más aún, el homicidio de Maino Canales se enmarca claramente bajo la doctrina de la responsabilidad del superior, recogida en el artículo 35° de la Ley N° 20.357 que tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes de Guerra, de 26 de junio de 2009. La ubicación de Espinoza Bravo en el vértice operativo de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), lo hace directamente responsable como autor, por los delitos cometidos por sus subalternos cuando “*teniendo conocimiento de su comisión por otro, no la impidieren, pudiendo hacerlo*”, es decir, ya no se requiere comprobar que la acción haya emanado de una orden directa del superior, sino que sólo se requiere acreditar que tuvo conocimiento de los delitos que se cometían y que, pudiendo hacerlo, no lo haya impedido. En el caso en análisis, existe abundante prueba directa, conformada por declaraciones de testigos, documentos, y una sentencia condenatoria dictada en un procedimiento criminal legalmente tramitado, que relacionados permiten justificar suficientemente la existencia del delito de homicidio de Juan Bosco Maino Canales, así como también, sea cual fuere la doctrina que mejor explique la participación culpable del extraditable, al menos en este ante-juicio, fluye con claridad su participación en calidad de autor en dicho delito, en su calidad de vértice directivo de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.) y director del Centro de Detención Clandestina Terranova de Villa Grimaldi.

A modo de conclusión general, se puede afirmar que de los medios probatorios enumerados precedentemente, surgen un conjunto de indicios cuyos caracteres de multiplicidad, conexión y concordancia resultan suficientes para dar por comprobada la existencia de los homicidios voluntarios pluriagravados perpetrados sobre las víctimas Omar Roberto Venturelli Leonelli (Cargo M1 caso Venturelli), y Juan Bosco Maino Canales (Cargo O1 caso Maino), como también son suficientes para tener por cumplido el requisito que impone la ley en cuanto a la acreditación de la autoría de los requeridos en los hechos, considerando especialmente las imputaciones de las otras víctimas sobrevivientes de las detenciones ilegales y torturas, que compartieron con los fallecidos en los centros de detención clandestinos, testimonios verosímiles y concordantes con los demás antecedentes acompañados al proceso ventilado ante el Estado requirente, y los que se agregaron al proceso de extradición de autos, por lo que se puede sostener en esta etapa procesal, que sería factible someter a proceso a los requeridos en Chile conforme el estándar del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal.

**DÉCIMO OCTAVO:** *Protocolo Adicional del Tratado de Extradición.* Con respecto a la alegación de parte de los defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz en traslados evacuados en fecha 18 y 19 de septiembre de 2023, en orden a solicitar el rechazo absoluto del requerimiento de extradición de autos, fundado en el hecho que la República Italiana no habría cumplido con la carga de probar conforme al artículo 1° del Protocolo Adicional del Tratado de Extradición, que la sentencia condenatoria dictada en rebeldía y/o ausencia de los imputados pueda ser impugnada por los requeridos, esta Ministra Instructora discrepa, toda vez que, tal como se señaló en el considerando décimo cuarto, el Estado requirente sí cumplió con dicha exigencia al



momento de presentar la solicitud de extradición de todos y cada uno de los requeridos, al adjuntar los respectivos oficios de difusión de búsqueda en campo internacional despachados por la Procuraduría General de la República Italiana, los cuales ponen en conocimiento del Estado requerido que la legislación italiana prevé en el artículo 175 del Código Procesal Penal un plazo especial para que los condenados en rebeldía puedan impugnar la sentencia, salvo que estos hayan tenido conocimiento efectivo del juicio y hayan renunciado voluntariamente a participar o a presentar impugnación, circunstancias que deben ser verificadas por el juez de la respectiva impugnación. Esto, sin perjuicio de que, según consta en autos, los requeridos fueron notificados en su oportunidad, a través de exhortos internacionales debidamente diligenciados, del juicio que se sustanciaba en su contra en la República Italiana (Causa CS Rol N° 6.192-2008 y 6.654-2009 de Exhorto Internacional).

**DÉCIMO NOVENO:** *Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor.* Respecto a la invocación genérica de los artículos 4° letra c) y 31 de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor realizada por los abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz en traslados evacuados en fecha 18 y 19 de septiembre de 2023, cabe señalar que la adopción de medidas judiciales con la finalidad de garantizar un trato diferenciado y preferencial a los requeridos de autos en su calidad de personas mayores, ha sido una preocupación constante de este Tribunal, lo que se ha visto reflejado en diversas acciones, como por ejemplo, la comparecencia asistida por los abogados defensores a la toma de declaración indagatoria de fecha 22 de febrero de 2023, y las decenas de autorizaciones concedidas a lo largo de la sustanciación del proceso con la finalidad de que los requeridos pudiesen asistir a sus horas médicas, a pesar de encontrarse sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total. Por otro lado, el respeto de la dignidad de las personas mayores no impone un deber a los Estados de abandonar el ejercicio de la potestad punitiva, máxime si tomamos en consideración que los delitos de autos revisten la calidad de crímenes de lesa humanidad, que tal como se consignó en el considerando undécimo, es un deber de la comunidad internacional investigarlos y sancionarlos según manda la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1°, 8° y 25° relativos a los derechos reconocidos, las garantías judiciales, y el derecho a la protección judicial. Por último, cabe agregar que, si bien los requeridos de autos son de avanzada edad, no es menos cierto que los delitos que fundan el pedido tuvieron lugar hace más de 50 años unos, y 47 años otros, por lo que, a juicio de esta Instructora, cualquier decisión que tenga por finalidad dilatar o dificultar injustificadamente la administración de justicia, constituiría una re-victimización de los familiares de las víctimas que han esperado media centena para acabar con la impunidad por los crímenes perpetrados sobre sus seres queridos.

**VIGÉSIMO:** *Aplicación del Tratado de Asistencia judicial en materia penal.* Con respecto a la alegación de los abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz en traslados evacuados con fecha 18 y 19 de septiembre de 2023, en el sentido que el proceso ventilado en la República Italiana habría adolecido de vicios procesales de nulidad fundado en la no aplicación del Tratado de Asistencia judicial en





materia penal, lo cual habría conculcado su derecho a defensa y a aportar pruebas o a declarar, cabe señalar que, tal como se consignó en los puntos g.1 y g.2 del considerando décimo cuarto, los imputados fueron debidamente notificados de la investigación judicial desarrollada en su contra por los Tribunales italianos, y, además, se les comunicó en su oportunidad a través de exhortos internacionales debidamente diligenciados, que debían fijar domicilio en Italia y designar un abogado de confianza que asumiera su defensa (Causa CS Rol N° 6.192-2008 y 6.654-2009 de Exhorto Internacional), y, frente a la negativa expresa del requerido Espinoza Bravo a participar del juicio, y la omisión de los demás requeridos de designar defensor de confianza y fijar domicilio en Italia, el Tribunal italiano designó defensores de oficio para todos los requeridos, siendo esta la oportunidad idónea para solicitar diligencias investigativas, aportar antecedentes y prestar declaración ante el Tribunal italiano, sea aplicando las normas procesales italianas o las del Tratado de Asistencia judicial en materia penal celebrado con Chile. A juicio de esta instructora, el actuar de los requeridos de autos en orden a ausentarse voluntariamente del proceso en Italia, y luego, pretender en esta instancia la nulidad del proceso y de la sentencia dictada fundado en la no consideración de antecedentes y pruebas que ellos mismos pudieron haber aportado, constituye una manifestación del principio de que nadie puede invocar la propia negligencia para solicitar la nulidad del proceso. A mayor abundamiento, las normas contenidas en el Tratado de Asistencia judicial en materia penal tienen por finalidad brindar un marco convencional para que la República Italiana y Chile puedan prestarse auxilio y cooperación en el desarrollo de la investigación penal, cuya aplicación no constituye un requisito esencial para la correcta sustanciación de un proceso penal en los estados suscribientes.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** *Principio de la prohibición de reforma peyorativa.* Con respecto a la alegación de los abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz en cuanto a que el derecho a defensa de los requeridos no habría sido respetado en atención a que los abogados defensores de oficio no habrían recurrido de la sentencia de segundo grado que condenó *in peius*, en primer lugar, cabe definir en qué consiste este principio. Horvitz y López, siguiendo a Maier, caracterizan la prohibición de la reforma peyorativa o *non reformatio in peius*, como “una garantía que consiste en la prohibición que pesa sobre el tribunal que revisa una resolución jurisdiccional por la interposición de un recurso de modificarla en perjuicio del imputado, cuando ella sólo hubiese sido recurrida por él o por otra persona autorizada por la ley, en su favor” (Horvitz y López. Derecho Procesal Penal chileno I. Principios, sujetos procesales, medidas cautelares, etapa de investigación, 2008, pág. 238). Bajo la legislación nacional, el Código de Procedimiento Penal, permite expresamente la reforma en perjuicio o peyorativa en sus artículos 528 y 548 a propósito de la interposición de recursos de apelación y casación, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura de los antecedentes remitidos por el Estado requirente, consta que no se verifica ninguna hipótesis amparable por el principio de la prohibición de la reforma peyorativa, toda vez que, contra la sentencia definitiva de primera instancia que absolvió a Espinoza Bravo, Moreno Vásquez y Vásquez Chahuan, los órganos persecutores representados por el Procurador de la República ante



el Tribunal de Roma, y el Procurador General, presentaron recursos de apelación, solicitando que se condenara a los imputados absueltos. Por otro lado, ante dicha presentación, los abogados defensores de oficio interpusieron recursos de apelación incidental en contra de la sentencia de primera instancia en audiencia de 7 de noviembre de 2018, mediante la cual solicitaron que se declarara la inadmisibilidad de los recursos de apelación presentados por los órganos persecutores. Por lo tanto, la esfera de conocimiento y decisión del Tribunal de segunda instancia se configuró por las pretensiones de reforma del persecutor, que solicitó se condenara a todos los imputados, y la de los imputados mismos, que a su vez solicitaron que no se les condenara, resultando ajustada a derecho la sentencia de alzada que acogió la petición fiscal.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** *Rechazo por doble persecución.* En los traslados ya referidos evacuados por los abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz, se ha alegado que no sería procedente conceder la extradición debido a la verificación de la causal de rechazo contemplada en la letra a) del artículo IV del Tratado bilateral, la cual prohíbe la extradición “*si por el mismo hecho la persona reclamada se encuentra sometida a procedimiento penal o ya fue juzgada por las Autoridades Judiciales de la Parte requerida*”. En este sentido, la abogada Katerina Gnecco Sandoval sostiene que si bien su defendido Orlando Moreno Vásquez, no fue sometido a proceso en el procedimiento penal sustanciado en Chile relativo al homicidio de Omar Roberto Venturelli Leonelli, que no sería procedente extraditarlo debido a que el tenor de la letra a) del artículo IV se refiere a haber estado o estar sujeto a un procedimiento penal en el sentido amplio, esto es, haber sido sujeto pasivo de la acción penal. En este sentido, señala que en su oportunidad, los Jueces instructores no pudieron determinar una participación punible de su representado, cerrándose la investigación sustanciada por el homicidio de Venturelli Leonelli. A su vez, el abogado Luis Núñez Muñoz sostiene que su representado Manuel Vásquez Chahuan fue igualmente sometido a proceso en el sentido amplio, toda vez que habría sido interrogado en la causa Rol 2182-98 por el homicidio de Venturelli Leonelli, y exhortado a decir la verdad, proceso que habría sido reabierto con posterioridad y sobreseído temporalmente conforme al artículo 409 n° 2 del Código de Procedimiento Penal.

Al respecto, según se abordó en el considerando décimo, respecto del Cargo M1-Episodio Omar Roberto Venturelli Leonelli, se instruyó en Chile la causa Rol N° 2182-98 “Episodio Venturelli”, dirigida en contra de Juan Manuel Contreras y Alfonso Podlech, habiéndose sobreseído temporalmente y archivado dicho proceso el 3 de marzo de 2011, por el numeral 2° del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, fundado en que, si bien se estableció la existencia de la comisión del ilícito, no existían indicios suficientes sobre su autoría.

Para resolver dicha alegación, se debe dilucidar quiénes son las partes penales en el procedimiento del crimen, entendiéndose a estas como los sujetos que forman parte de la relación jurídico penal. Siguiendo a Osvaldo López, podemos afirmar que el sujeto pasivo del procedimiento penal “*es solamente el reo, o sea, quien está sometido a proceso, mas no el simplemente inculcado*” (López, Osvaldo. *Derecho Procesal Chileno*, Tomo I (1969), p. 80.), y ello es corroborado de la lectura del artículo 278 del Código



del ramo, tratado a propósito del “Procesamiento y la Prisión Preventiva”, que señala “*El procesado es parte en el proceso penal y deben entenderse con él todas las diligencias del juicio. Su defensa es obligatoria.*” Agrega Osvaldo López que “*Mientras no se dicte el auto encargatorio de reo, el sindicado por el delito es simplemente ‘inculcado’ y no es parte del proceso penal, no obstante tener algunos derechos de disposición procesal*” (López, Osvaldo. ob. Cit. pp. 80-81.), por lo tanto, la categoría procesal que tuvo Moreno Vásquez y Vásquez Chahuan en los respectivos procesos es de *inculcado*, quienes son un tercero en el procedimiento penal y que no son alcanzados por el efecto de cosa juzgada del proceso, dado que la acción penal nunca se dirigió en contra de ellos. Por lo tanto, no cabe sino desechar la solicitud de rechazo fundada en la letra a) del artículo IV del Tratado bilateral, toda vez que resulta pacífico que los requeridos nunca fueron sometidos a proceso, es decir, no se dirigió nunca la acción penal en contra de ellos como sujetos pasivos.

**VIGÉSIMO TERCERO:** *Rechazo facultativo de la extradición y principio aut dedere aut iudicare.* El artículo VI del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana consagra en su numeral 1° y 2° la facultad de rechazar la extradición si la persona reclamada tiene la nacionalidad de la Parte requerida, y si el hecho por el cual se solicita la extradición fue cometido en su totalidad o en parte en el territorio del Estado requerido. En el mismo sentido, los abogados defensores Katerina Gnecco Sandoval y Luis Núñez Muñoz en sus traslados evacuados con fecha 18 y 19 de septiembre de 2023, solicitaron el rechazo de la extradición en virtud del artículo VI, invocando el principio *aut dedere aut iudicare* consagrado en el numeral 3° del mismo artículo, arguyendo que el Estado de Chile tiene mejor derecho para juzgar los hechos que fundan el pedido de extradición, en atención que éstos fueron perpetrados por nacionales chilenos en el territorio nacional.

Al respecto, cabe señalar que, sobre la base del principio de jurisdicción universal, los crímenes de lesa humanidad –como el de autos- pueden ser juzgados por cualquier Estado en ejercicio del *ius puniendi* internacional que deriva de las normas del Derecho Internacional consuetudinario. Este ejercicio de la jurisdicción internacional también puede encontrarse reconocido a través del Derecho Internacional convencional, como por ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 y promulgado en Chile el 6 de julio de 2009), o en los Convenios de Ginebra (suscrito el 12 de agosto de 1949 y promulgado en Chile el 5 de diciembre de 1950), que a través de su artículo 50° consagra la obligación de los Estados suscribientes de “*buscar a las personas acusadas de haber cometido, o de haber ordenado cometer, una cualquiera de dichas infracciones graves, haciendo comparecer a las tales personas ante los propios tribunales de esa Parte, fuere cual fuere la nacionalidad de ellas*”, consagrando además la facultad de entregarlas a otro Estado Parte interesado en la persecución con la finalidad de someterlas a enjuiciamiento.

Por otro lado, según consta de los antecedentes remitidos por la requirente, el artículo 8 del Código Penal italiano otorga competencia penal extraterritorial al Estado italiano para conocer y juzgar delitos cometidos por extranjeros en un territorio extranjero, pero sobre ciudadanos italianos, el cual le otorga jurisdicción a en razón de la



nacionalidad de las víctimas. De esta forma, se permite perseguir a extranjeros por actos perjudiciales para nacionales del foro en el extranjero.

Por último, cabe tener presente que el artículo VI dispone que la extradición *podrá* ser denegada, vocablo cuyo tenor implica una facultad para el Tribunal y no una imposición. Es por todo lo anterior que en esta instancia no se hará uso de la facultad discrecional que asiste a esta Instructora de rechazar la entrega de los requeridos en extradición.

**VIGÉSIMO CUARTO:** *Entrega diferida.* El artículo XIV del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana contempla la facultad de diferir la entrega de los requeridos cuando éstos se encuentran sometidos a procedimiento penal o debieren cumplir una condena en el territorio del Estado requerido, en el siguiente tenor: *“1. Si la persona a ser extraditada estuviere sometida a procedimiento penal o debiere cumplir una condena en el territorio de la Parte requerida por un delito diferente a aquel que motiva la solicitud de extradición, la Parte requerida deberá igualmente decidir sin demora sobre la solicitud de extradición y dar a conocer su decisión a la otra Parte. En caso de ser acogida la solicitud de extradición, la Parte requerida puede diferir la entrega de la persona hasta que dicho procedimiento penal esté concluido o la pena impuesta haya sido cumplida.”*

Según consta del Informe Fiscal, los requeridos mantienen los siguientes procesos penales vigentes en Chile:

- a) Orlando Moreno Vásquez se encuentra actualmente recluso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco cumpliendo la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo impuesta en la causa Rol N° 2.182-1998 “Episodio Eltit Spielmann”, y mantiene un proceso penal vigente en su contra llevado adelante por el Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Álvaro Mesa Latorre, bajo el Rol N° 113.089-2013 “Episodio Asalto al Polvorín”.
- b) Manuel Vásquez Chahuan registra procesos penales vigentes en la causa Rol N° 113.089-2013 “Episodio Asalto al Polvorín” del Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Álvaro Mesa Latorre, y en la causa Rol N° 144.034-2019 instruida por el mismo Ministro en Visita Extraordinaria por el delito de aplicación de tormentos.
- c) Pedro Octavio Espinoza Bravo ha sido condenado en múltiples procesos penales seguidos en Chile y según información proporcionada por Gendarmería de Chile, se encuentra actualmente recluso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, registrando fecha prevista para el término de cumplimiento el año 2.571.

En atención a los procesos y condenas pendientes que registran los requeridos ante Tribunales chilenos, y en resguardo del ejercicio de la potestad jurisdiccional, constitucionalmente consagrada en el artículo 76 de la Carta Fundamental, y en línea con lo resuelto por la Segunda Sala de este Excelentísimo Tribunal en orden a que el cumplimiento de los requisitos para proceder a la extradición, no implica poner al requerido en posición de eximirse de las eventuales responsabilidades penales por los



procesos pendientes en su contra (SCS Rol N° 10.331-2023 de 9 de febrero de 2023), se hará uso de la facultad que confiere el artículo ya mencionado del Tratado bilateral para diferir la entrega de los requeridos a la completa sustanciación de los procesos vigentes que mantengan en territorio nacional, iniciados con anterioridad a la dictación del presente fallo, y, en su caso, al cumplimiento de la condena que en aquellos se impusiere (en el mismo sentido SCS Rol N° 134.130-2022 de 6 de diciembre de 2022, SCS Rol N° 94.999-2016 de 27 de marzo de 2017, y, SCS Rol N° 2.852-2012 de 26 de febrero de 2013).

### DECISIÓN DEL TRIBUNAL:

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 644 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y lo establecido en las disposiciones legales del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito el 27 de febrero de 2002, y su Protocolo Adicional, suscrito el 4 de octubre de 2012, y demás disposiciones legales citadas, se declara:

I. Se **acoge** la solicitud de extradición formulada por la República Italiana contra los ciudadanos chilenos **Orlando Moreno Vásquez**, nacido en Chile el 14 de febrero de 1941, cédula nacional de identidad chilena (R.U.N.) N° 4.647.511-9 y **Manuel Vásquez Chahuan**, nacido el 14 de noviembre de 1945, cédula nacional de identidad chilena (R.U.N.) N° 5.090.301-K, a efectos de que cumplan con la pena de prisión perpetua impuesta por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma, por sentencia de 8 de julio de 2019 como autores penalmente responsables del delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli; y **Pedro Octavio Espinoza Bravo**, nacido el 19 de agosto de 1931, cédula nacional de identidad chilena (R.U.N.) N° 3.063.238-9, a efectos de cumplir con la pena de prisión perpetua con aislamiento diurno por 2 años, impuesta por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma mediante sentencia de 8 de julio de 2019, como autor penalmente responsable por el delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el día 26 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Juan Bosco Maino Canales.

II. Se **rechaza** la solicitud de extradición formulada en contra de **Pedro Octavio Espinoza Bravo** para efectos de cumplir con la pena de impuesta por la *Corte d'Assise d'Appello* de Roma por su participación como autor del delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el día 5 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Jaime Patricio Donato Avendaño.

III. Se mantiene la medida cautelar de arraigo nacional decretada respecto de todos los requeridos de autos con fechas 29 de septiembre de 2021 y 29 de julio de 2022, como también se mantiene la medida cautelar personal de arresto domiciliario total decretada con fecha 21 de marzo de 2023 en contra de Manuel Abraham Vásquez Chahuan con el propósito de asegurar la entrega a las autoridades del Estado requirente, sin perjuicio de que los jueces de las causas pendientes puedan decretar medidas de mayor intensidad respecto de los requeridos.



Además, se deja constancia que Orlando Moreno Vásquez permaneció sujeto a la medida cautelar personal de arresto domiciliario total en este procedimiento desde el 21 de marzo de 2023 hasta el 14 de abril de 2023.

**IV.** La entrega de **Orlando Moreno Vásquez** se diferirá a la completa sustanciación del proceso penal seguido en su contra en la causa Rol N° 113.089-2013 “Episodio Asalto al Polvorín”, y en su caso, al término del cumplimiento de la condena que le fuera impuesta; al cumplimiento de la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo impuesta en la causa Rol N° 2.182-1998 “Episodio Eltit Spielmann”; y a cualquier otro proceso penal que se encuentre vigente a la fecha de dictación de este fallo.

La entrega de **Manuel Vásquez Chahuan** se diferirá a la completa sustanciación de los procesos penales seguidos en su contra en las causas Rol N° 113.089-2013 “Episodio Asalto al Polvorín” y Rol N° 144.034-2019, y en su caso, al término del cumplimiento de la condena que le fuera impuesta, como también a cualquier otro proceso penal que se encuentre vigente a la fecha de dictación de este fallo.

La entrega de **Pedro Octavio Espinoza Bravo** quedará diferida al término del cumplimiento de las penas impuestas en los procesos penales iniciados con anterioridad a la dictación del presente fallo, como también a la completa sustanciación de los procesos penales vigentes a la fecha de dictación de este fallo.

Con tal finalidad, ofíciase a las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones para que los Ministros en Visita Extraordinaria de su jurisdicción, que instruyan causas sobre vulneraciones de derechos humanos, informen los procesos pendientes que mantengan los requeridos de autos y que se encuentren radicados ante ellos, así como también para que comuniquen oportunamente y con la debida antelación el término del cumplimiento de la pena que les fuere impuesta.

**V.** Ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese al Estado requirente por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a Gendarmería de Chile, y a la Oficina Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile para su conocimiento.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Consúltase si no fuera apelada.

**Rol N° 63.423-2021.**

Pronunciada por la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, Ángela Vivanco Martínez.



En Santiago, a dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

